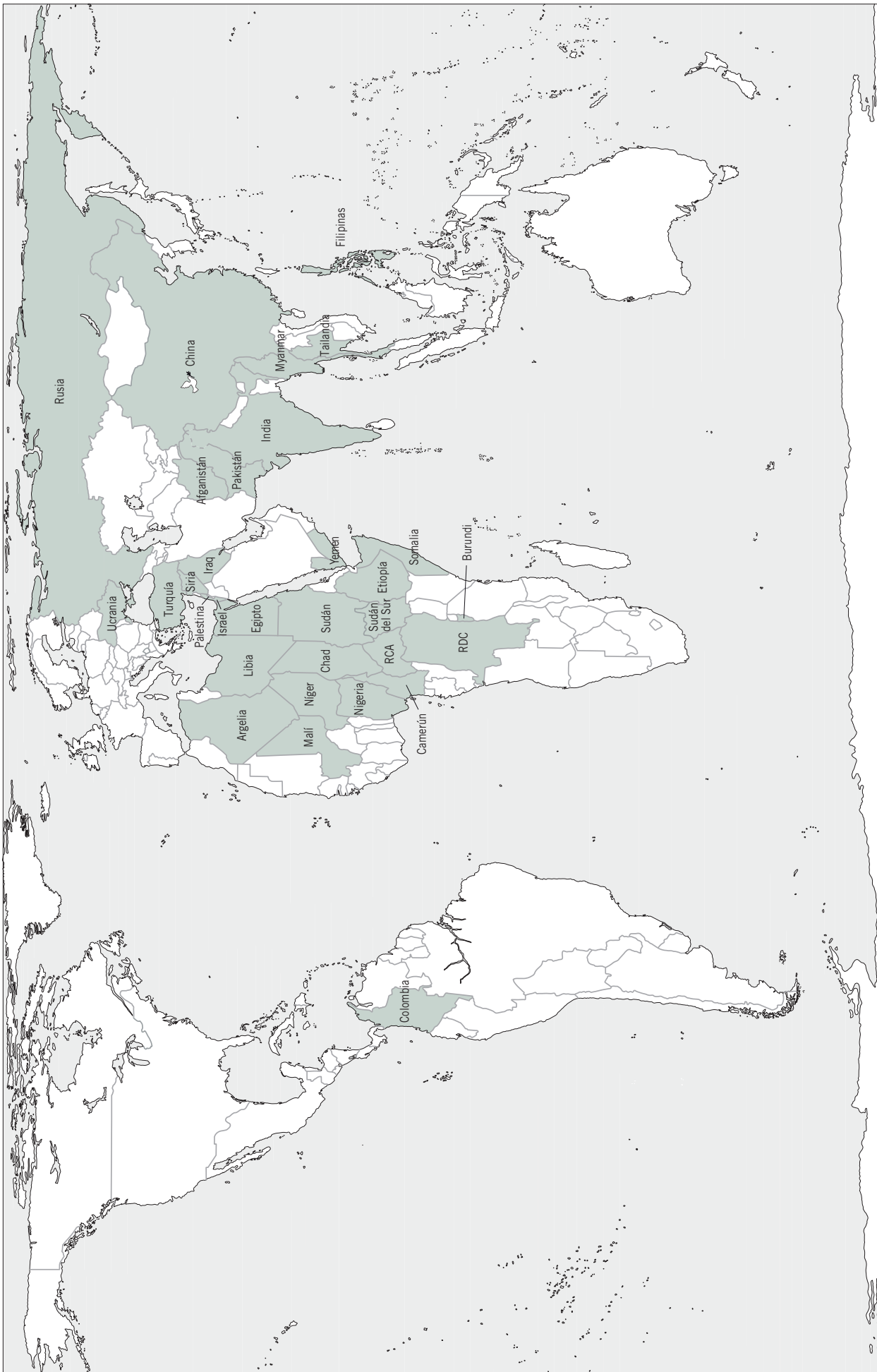


Mapa 1.1 Conflictos armados



Fin del conflicto armado durante 2016

Paises con conflicto armado

1. Conflictos armados

- Durante 2016 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (13) y Asia (10), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- La misión de la ONU en Malí (MINUSMA) pasó a ser la operación de la ONU con más bajas mortales en la actualidad.
- En Nigeria, la estrategia militar de la fuerza regional (MNJTF) logró reducir significativamente la capacidad operativa de Boko Haram.
- Los enfrentamientos armados en Sudán del Sur persistieron a pesar de la firma del acuerdo de paz.
- Al-Shabaab incrementó sus acciones armadas durante 2016 con el objetivo de desestabilizar el proceso electoral en Somalia.
- La situación en Libia empeoró en 2016, en un contexto de profundización de la división política, persistentes focos de la violencia y continuas violaciones a los derechos humanos.
- El conflicto armado en Colombia descendió a su nivel mínimo de violencia en 52 años.
- El inicio del proceso de diálogo político en Myanmar con grupos insurgentes no logró poner fin al conflicto armado con los grupos no adheridos al acuerdo de alto el fuego.
- Aumentó la preocupación en Mindanao (Filipinas) por la creciente proliferación y coordinación de grupos armados y por la mayor presencia de ISIS.
- La guerra en Turquía entre el Estado y el PKK se deterioró gravemente, con violencia urbana y en zonas rurales y atentados de gran escala, a lo que se sumaron otros ejes de tensión en el país.
- El conflicto armado en Iraq provocó la muerte de más de 16.000 civiles en 2016.
- La situación en Yemen continuó deteriorándose a lo largo del año, con elevados niveles de violencia que tuvieron un devastador impacto en la población civil.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2016. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2016, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2016.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2016

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		=
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	2
	Gobierno		↑
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales	1
	Autogobierno, Identidad		=
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí (norte) -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Chad	1
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) ⁶ - 2011-	Interno internacionalizado	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		↓
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno, Recursos		↑

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2016 con la del 2015, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2016 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
6. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como “Nigeria (Boko Haram)” por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse “Región Lago Chad (Boko Haram)” dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		=
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), JEM, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLM/A-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), milicias comunitarias, Uganda, Sudán, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, FARC-EP, ELN, grupos paramilitares	1
	Sistema		↓
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS	3
	Sistema		=
China (Turquestán Oriental) -2014-	Interno	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	↓
	Autogobierno, Sistema, Identidad		Fin
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↓
Filipinas (Mindanao) ⁷ -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	2
	Sistema		↑
Myanmar -1948-	Interno	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDA)A	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	3
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓

7. En la anterior edición del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Rusia (Daguestán) -2010-	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema		=
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Ucrania -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel	3
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), al-Shamia Front, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas	2
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2016

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados durante el año 2016 y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional, como el impacto de los conflictos en la población civil y los embargos de armas.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

A lo largo de 2016 se observó una ligera reducción en el número de conflictos armados respecto a años anteriores. Durante 2016 se contabilizó un total de 33 casos de conflictos armados a nivel mundial frente a 35 contextos en 2015, 36 en 2014 y 35 en 2013. De los 33 casos registrados en 2016 sólo 32 permanecían activos al finalizar el año, ya que la situación

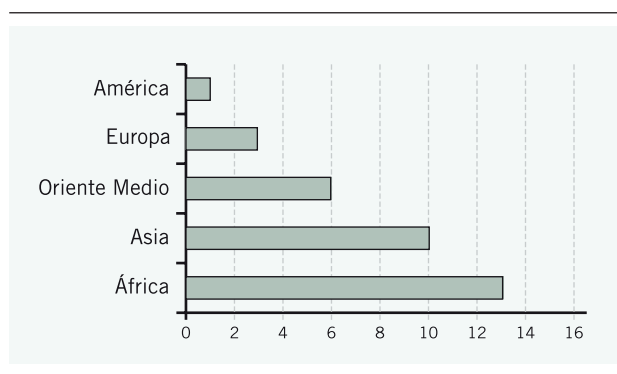
en China (Turquestán Oriental), que enfrenta al Gobierno chino con organizaciones uigures, dejó de ser considerada como un conflicto armado activo en 2016 ante la significativa reducción en los niveles de violencia en el último año. En comparación con los conflictos armados del año anterior, el caso de India (Assam) ya se identificó como “finalizado” al acabar 2015 –aunque continuó siendo considerado como un contexto de tensión durante 2016–,⁸ mientras que la conflictividad armada en la región de Mindanao, Filipinas, pasó a ser analizada como un solo contexto dada la creciente complejidad de la violencia y la mayor coordinación e interdependencia entre los grupos armados que operan en el territorio.⁹ Respecto a la distribución geográfica de los conflictos armados, y siguiendo la tendencia de años previos, la mayor parte se concentró en África (13 casos) y Asia (10), seguidos de Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).

En cuanto a la relación entre el escenario de la contienda y los actores involucrados en la disputa,

8. Véase el resumen sobre India (Assam) en el capítulo 2 (Tensiones).

9. En la anterior edición del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2016



durante 2016 se identificaron cinco conflictos armados de carácter interno; es decir, protagonizados por actores armados de un mismo Estado y que operaban dentro de las fronteras del mismo –China (Turquestán Oriental), Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar, Tailandia (sur) y Rusia (Daguestán). **Sólo un caso fue catalogado como internacional, el de Israel-Palestina, mientras que la gran mayoría –26 de los 33 casos, equivalentes a un 79%– fueron considerados como conflictos armados internos internacionalizados.**

Es decir, alguna de las partes en liza era foránea, los grupos armados involucrados en la disputa tenían bases o lanzaban ataques desde países vecinos, o los enfrentamientos se extendían a otros Estados, entre otros elementos. Este elemento de internacionalización se hizo patente durante 2016 en la participación de terceros actores en diversos conflictos.

Así, por ejemplo, en numerosos contextos se mantuvo el despliegue de misiones de la ONU –MINUSMA en Malí, MINUSCA en RCA, UNMISS en Sudán del Sur, UNAMID en Sudán, o MONUSCO en RDC– o de misiones de organizaciones regionales como la UA –AMISOM en Somalia–, ECOWAS –en Malí–, OTAN –en Afganistán y presencia en la región del Mar Negro, en el marco de la tensión con Rusia por Ucrania– o la UE –EUCAP, EUTM y EUNAVFOR en Somalia, EUFOR en RCA. Algunos Estados también desempeñaron un papel significativo en ofensivas militares fuera de sus fronteras, como por ejemplo las acciones de EEUU en la campaña contra ISIS en Libia y en los ataques contra posiciones de AQPA e ISIS en Yemen, las de Francia en el marco de la Operación Barkhane en Malí, o las intervenciones de Rusia e Irán en apoyo a las ofensivas del régimen de Bashar al-Assad en el conflicto en Siria. Algunas intervenciones foráneas en contextos de conflicto armado se canalizaron a través de coaliciones militares *ad hoc*. Entre ellas destacan, por ejemplo, la coalición internacional contra ISIS –creada en 2014, liderada por EEUU e integrada por más de 68 miembros (entre países y organizaciones)– que durante 2016 continuó

La mayor parte de los conflictos armados en 2016 se concentró en África (13 casos) y Asia (10), seguidos de Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno)

La gran mayoría de los conflictos armados fueron de carácter interno internacionalizado (79%)

con sus operaciones en Iraq y Siria; la coalición de países árabes que bajo el liderazgo de Arabia Saudita y con el apoyo de algunos países occidentales –EEUU, Reino Unido, entre otros– está involucrada desde 2015 en el conflicto armado en Yemen; o la fuerza militar conjunta regional configurada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún para dar respuesta a la amenaza de Boko Haram, que en los últimos años ha ampliado su alcance territorial más allá de las fronteras de Nigeria.

El factor de internacionalización también se evidenció en las operaciones de diversos grupos armados más allá de los límites de sus países de origen. Junto a Boko Haram, cabe resaltar casos como el de AQMI –de origen argelino, pero con presencia también en los conflictos armados en Malí y Libia y en otros escenarios de tensión (Burkina Faso, Níger)¹⁰–, o el de ISIS, que además de mantener su principal base territorial en Iraq y Siria continuó reivindicando acciones en otros diversos países ya sea a través de células, comandos o simpatizantes que perpetraron diversas ofensivas durante 2016 –incluyendo en territorio europeo, como evidenciaron los atentados en Bruselas, Niza y Berlín–,

o a través de acciones de filiales del grupo en numerosos contextos, sin que exista claridad en todos los casos sobre el nivel de coordinación y cooperación entre la organización central de ISIS y las diferentes facciones. Muchas de estas filiales continuaron operando durante 2016 en escenarios de conflicto armado –como en Afganistán, Argelia, Libia, Pakistán, Rusia, Turquía o Yemen– y también en contextos de tensión.¹¹ En algunos casos

estas facciones han asumido el nombre de “provincias” (*wilayaat*) del presunto califato proclamado por ISIS –como en el caso de Provincia del Sinaí (Egipto) y Daguestán (Rusia)– o nombres específicos –como el Estado Islámico de Lanao (Filipinas). A nivel general, cabe destacar que la mayoría de los conflictos armados actuales tiene una dimensión internacional o regional vinculada también a otros factores, como el comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico, económico o militar proporcionado por otros países a alguno de los bandos en pugna, por los intereses políticos y/o económicos de Estados vecinos en el escenario del conflicto armado o los flujos de personas refugiadas.

En lo referente a las causas de la conflictividad armada a nivel global, el análisis de los diferentes contextos en 2016 confirma la naturaleza multidimensional del fenómeno.

En línea con años anteriores, la mayor parte de los casos –24 en total, equivalentes al 73%– tuvo entre sus motivaciones

principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del**

10. Véase el resumen sobre estos casos en el capítulo 2 (Tensiones).

11. Véase el capítulo 2 (Tensiones).

Estado, lo que derivó en luchas por erosionar o acceder al poder. De los 24 casos en los que se observaron este tipo de causas, en 19 la búsqueda de un cambio de sistema fue un factor especialmente relevante. Esta dimensión se hizo especialmente visible en conflictos armados con presencia de grupos con una agenda ideológica de inspiración socialista, como en los casos del grupo armado CPI-M en India, el NPA en Filipinas o las FARC-EP y el ELN en Colombia, que se encuentran además entre los conflictos activos más longevos a nivel mundial. En estos dos últimos casos, durante 2016 los grupos armados estuvieron involucrados en conversaciones de paz con las autoridades –de carácter exploratorio en el caso del ELN– con el propósito de poner fin a la violencia. En contraste, en el primer caso –donde no hay negociaciones activas– se observó un repunte en las hostilidades entre el grupo armado de oposición naxalita y las autoridades indias.

La motivación de cambio de sistema también estuvo presente en los conflictos con participación de actores armados de inspiración yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estas organizaciones se encuentran las diversas filiales de al-Qaeda –como AQMI, que opera en Argelia, pero también en Libia y otros países del Sahel; o AQPA, en Yemen–; el grupo armado Estado Islámico (ISIS) y sus grupos afines –que le han declarado lealtad y aspiran a formar parte del pretendido califato–; además de organizaciones como Boko Haram en Nigeria, al-Shabaab en Somalia, Abu Sayyaf en Filipinas, grupos insurgentes que operan en la zona del norte del Cáucaso, en Rusia, o las milicias talibán que actúan en Pakistán y Afganistán. En muchos casos estos grupos han aprovechado las dinámicas de inestabilidad y debilitamiento del Estado, así como la competencia entre actores regionales, para expandir sus actividades y su radio de acción. Respecto a la oposición a las políticas de un determinado gobierno, este elemento estuvo presente en 10 de los 24 casos anteriormente mencionados. Este factor tuvo su expresión durante 2016 en forma de fuertes tensiones y violencia entre gobiernos y sectores de la oposición –como por ejemplo Burundi– y estuvo presente en escenarios en los que la disputa por el poder ha llevado a grupos armados y/o facciones políticas a asumir el control territorial de zonas concretas en las que reivindican su autoridad y legitimidad, como en RCA, Libia o Yemen (al-houthistas).

En materia de causas, y también siguiendo la tendencia de años previos, **otra serie de contextos de conflicto armado tuvo entre sus motivaciones aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autodeterminación o autogobierno**. Este factor estuvo presente en un 52% de los casos –17 conflictos–, y tuvo una especial relevancia en contextos de Asia y Europa. Entre ellos cabe mencionar China (Turquestán Oriental), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Ucrania (este) y Turquía (sudeste). Este último caso fue uno de los que vivió una de las peores escaladas de violencia durante 2016, fruto de la intensificación del conflicto armado entre el Estado

turco y la insurgencia kurda del PKK. Este elemento de reivindicaciones identitarias y de autonomía también se observó en algunos conflictos armados en África –como en Etiopía (Ogadén), Malí (norte) o Sudán (Darfur y Kordofán Sur y Nilo Azul)– en contextos donde han existido problemas para reconocer o dar cabida a la pluralidad étnica y política, lo que ha derivado en el surgimiento de movimientos de contestación al poder central o de carácter secesionista. En Oriente Medio este factor fue especialmente relevante en el conflicto Israel-Palestina, pero también estuvo presente en otros casos, como Iraq o Siria, vinculado a la presencia de actores armados con agendas autonomistas (grupos kurdos). Cabe destacar que en muchos contextos la proliferación de actores armados y las complejas dinámicas de violencia han supuesto la coexistencia o interacción –en ocasiones una relación de cooperación y en otras de conflicto– entre actores armados con agendas de autogobierno o identitarias y otros con aspiraciones de cambio de sistema. Así, por ejemplo, durante 2016 combatientes de las milicias kurdas del PYD (YPG/YPJ) se enfrentaron a ISIS en el norte de Siria; mientras que en Filipinas el grupo armado MILF y la facción mayoritaria del MNLF decidieron cooperar con la campaña del Gobierno contra diversos grupos insurgentes de línea yihadista que operan en Mindanao y, en algunos casos, se enfrentaron directamente con miembros de Abu Sayyaf.

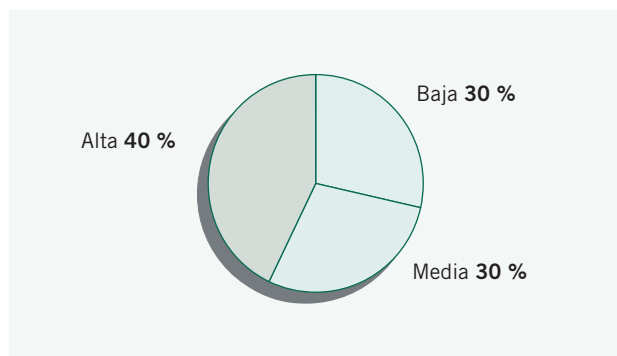
Finalmente, en cuanto a las causas de la conflictividad armada cabe mencionar que **otro grupo de casos tuvo entre sus principales motivaciones la lucha por el control de recursos y territorios**. Este factor se observó en nueve de los 33 casos de conflictos armados en 2016 –lo que representa un 27% del total–, aunque puede considerarse que este elemento fue una dimensión subyacente en muchos escenarios de conflicto a nivel global. La pugna por el control de recursos fue un rasgo presente en conflictos armados en el continente africano, como quedó en evidencia en 2016 en los enfrentamientos en Libia en las zonas del creciente petrolero; en el avance de grupos armados en la RCA hacia zonas clave para controlar la extracción de diamantes y los flujos de armas; o en las actividades de explotación y comercio ilegal de minerales para financiar a grupos armados en la RDC. Esta dimensión también estuvo presente en casos como el de Sudán (tanto en Darfur como en Kordofán y Nilo Azul) y en Sudán del Sur. Fuera de África, este factor también fue un elemento explicativo de las dinámicas de violencia en Pakistán (Baluchistán). Respecto a la dimensión de control de territorio, el caso más representativo fue el de Israel-Palestina, donde la persistente construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos no sólo fue denunciada en 2016 como una flagrante violación al derecho internacional por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también como uno de los principales obstáculos para avanzar en la solución de dos Estados.

En materia de evolución de los conflictos armados a nivel global, durante 2016 siete de los 33 casos (21%) registraron una disminución de la violencia respecto al año anterior. Entre ellos, el ya mencionado caso de China (Turquestán Oriental), que dejó de ser considerado como

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente concentró el mayor número de conflictos armados, un total de 13, equivalentes al 39% de todos los casos a nivel global. Además, la mayor parte de los casos africanos fueron de intensidad elevada, seis de los 13, es decir, el 46% de los casos registrados en África: Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul) y Sudán del Sur. • La totalidad de casos de conflicto armado de la región fueron de carácter interno internacionalizado. En este contexto, cabe destacar, por ejemplo, la creciente internacionalización del conflicto armado protagonizado por Boko Haram, que inicialmente concentraba sus acciones armadas en Nigeria y que ha pasado a operar en la región de Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún. • Respecto a las causas de los conflictos, en la mayoría de casos estuvieron presentes factores de oposición a las políticas de los gobiernos o al sistema político, económico o ideológico del Estado (nueve casos o 69%). Otros siete contextos presentaron elementos vinculados a la lucha por el control de recursos y territorios (54%), y en otros seis demandas identitarias o de autodeterminación y autogobierno (46%). • En materia de evolución de los conflictos armados, durante 2016 la gran mayoría de casos presentó niveles de violencia similares o peores respecto al año anterior (seis casos respectivamente). Sólo en un contexto, en la Región Lago Chad (Boko Haram) se identificó un descenso de la violencia en comparación con 2015, aunque el caso siguió siendo uno de los más graves del continente, con un gran impacto en términos de muertes, crisis humanitaria y desplazamiento forzado.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Albergó un único caso de conflicto armado, el de Colombia. En línea con lo ocurrido el año anterior, el contexto colombiano presentó una baja intensidad y una tendencia de descenso de la violencia, en el marco de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP y el inicio de negociaciones exploratorias con el grupo armado ELN en 2016.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región concentró el mayor número de conflictos armados de carácter interno a nivel mundial. La mitad de los casos en la región –China (Turquestán Oriental) Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar y Tailandia (sur)– fueron de carácter interno, mientras que los otros cinco tuvieron un carácter interno internacionalizado. • Siguiendo la tendencia de años previos, en 2016 Asia también se caracterizó por la mayor prevalencia de casos de conflicto armado vinculados a demandas identitarias o de autogobierno. Este factor de causalidad estuvo presente en seis de los diez contextos en la región. En cinco casos, el elemento de oposición al gobierno o al sistema del Estado fue una de las causas significativas, mientras que en un caso –Pakistán (Baluchistán)– la cuestión de los recursos jugó un papel especialmente destacado. • Asia fue escenario de dos conflictos de intensidad elevada durante 2016, Afganistán y Pakistán, que en línea con años previos presentaron elevados niveles de letalidad. No obstante, en términos comparativos, en el caso de Pakistán se redujeron los niveles de violencia respecto al año anterior. • La gran mayoría de conflictos armados presentaron una intensidad media (cuatro casos) o baja (cuatro), incluyendo el caso de China (Turquestán Oriental) que dejó de ser considerado conflicto armado activo al finalizar 2016 debido al descenso en los niveles de violencia. • La mitad de los casos del continente evolucionaron negativamente respecto al año anterior –Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Myanmar y Pakistán (Baluchistán).
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se registraron tres casos de conflicto armado, uno de carácter interno –Rusia (Daguestán)– y dos de carácter interno internacionalizado –Turquía (sudeste) y Ucrania (este). Rusia fue escenario de la disputa en el primer caso y parte implicada en el caso del conflicto en Ucrania, ya que Moscú continuó dando apoyo a actores armados en la zona oriental de este último país. • En términos de causalidad, los conflictos armados en Europa presentaron una diversidad de motivaciones, aunque con una mayor presencia de factores vinculados a cuestiones identitarias o de autogobierno –presentes en los casos de Turquía (sudeste) y Ucrania (este). En este último caso también fue relevante el elemento de oposición a las políticas del gobierno, mientras que en Rusia (Daguestán) el principal factor subyacente en la dinámica del conflicto fue la aspiración a un cambio de sistema por parte de grupos armados de línea yihadista. • Turquía (sudeste) registró un incremento significativo de la violencia en 2016 y pasó a ser considerado de alta intensidad (frente a la intensidad media registrada el año anterior). Ucrania, en cambio, presentó una disminución de la violencia en comparación con 2015 y fue catalogado como conflicto armado de intensidad media en 2016. Rusia (Daguestán) se mantuvo como un contexto de baja intensidad, en línea con lo observado el año previo.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En términos comparativos y en línea con los últimos años, la región concentró la mayor proporción de conflictos armados de alta intensidad. Cuatro de los seis casos de la zona (67%) –Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– presentaron unos elevados niveles de violencia con severos impactos en la población. • Los tres conflictos armados más graves de Oriente Medio –Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– registraron un aumento en los niveles de violencia en 2016, con serias repercusiones en términos de letalidad, pero también de impacto humanitario y desplazamiento forzado. Los otros tres contextos –Egipto (Sinaí), Israel-Palestina y Yemen (AQPA)– presentaron una evolución similar al año 2015, por lo que no se registró ningún caso en el que se observara un descenso de la violencia. • Todos los conflictos armados fueron de carácter interno internacionalizado a excepción del caso de Israel-Palestina, el único contexto calificado como conflicto armado internacional en la región y a nivel mundial. • La dimensión de internacionalización de los conflictos en esta región se hizo patente en la intervención de coaliciones militares internacionales y de terceros Estados en casos como los de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas) y en la acción transfronteriza de diversos grupos armados. • En términos de causalidad, Oriente Medio también presentó una gran diversidad de factores, con una presencia destacada de casos –cinco de seis, lo que equivale a un 83%– donde fue relevante la aspiración a un cambio de sistema, en especial por parte de actores armados de inspiración yihadista.

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

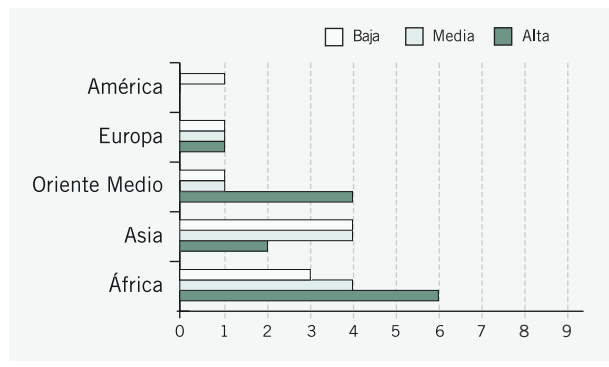


un conflicto armado activo, y el de Colombia, donde los avances en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP permitieron una reducción en las dinámicas de violencia asociadas al conflicto. Otro tercio de los contextos –11 casos, equivalentes al 33%– presentaron una evolución similar a la de 2015. La mayor parte de los conflictos armados –15 casos o el 46%– registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior. Algunos de los conflictos armados que se deterioraron significativamente en 2016 fueron los de Malí (norte) y Libia y en ambos casos fue –en parte– como consecuencia de las serias dificultades para implementar acuerdos suscritos el año 2015 con el propósito de reconducir el conflicto por la vía política.¹² Los niveles de violencia e inestabilidad también se incrementaron de manera notoria en casos como el de Filipinas (Mindanao) o el de Turquía (sudeste) y en los dos contextos esta evolución estuvo determinada, entre otros factores, por la mayor complejidad de las dinámicas de violencia. Otros tres contextos que se agravaron de manera importante en 2016 fueron los de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas), escenarios caracterizados por el gran número de actores armados involucrados en la disputa –incluyendo coaliciones internacionales y terceros Estados– y por el gravísimo impacto de las hostilidades en la población civil.

En lo que respecta a la intensidad de los conflictos armados –valorada tanto por las repercusiones de las disputas en términos de letalidad como en los impactos de la violencia en la seguridad humana, la destrucción de infraestructuras y los desplazamientos forzados de población, entre otros factores–, el panorama de conflictividad en 2016 constató una distribución similar entre casos de baja y media intensidad. Un 30% de los conflictos –10 casos– presentó una intensidad baja y otro 30% una mediana intensidad. La mayor parte de los conflictos armados en 2016 tuvieron una intensidad elevada –13 casos, equivalentes a un 40%–, cifra que representa un incremento de los casos graves respecto a años anteriores: 31% en 2015, 33% en 2014. **Los conflictos de intensidad elevada en 2016 fueron: Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul), Sudán del**

La mayor parte de los conflictos armados –15 casos o el 46%– registró un empeoramiento durante 2016, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior

Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Sur, Afganistán, Pakistán, Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas). Como queda patente, la mayor parte de estos casos se concentró en África y Oriente Medio. Cabe destacar que en algunos de estos contextos las cifras de letalidad superaron con creces el millar de víctimas mortales anuales. Este fue el caso, por ejemplo, de Sudán del Sur, donde se registraron más de 3.000 muertes a causa del conflicto en 2016; el de Afganistán, donde se contabilizaron más de 9.000 personas fallecidas, incluyendo más de 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad y casi 3.500 civiles; el de Iraq, donde el balance de fallecimientos entre la población civil en el último año ascendió a más de 16.000 personas; y especialmente el caso de Siria, donde algunas estimaciones apuntan a que entre 50.000 y 60.000 personas habrían perdido la vida en 2016 como consecuencia de las hostilidades.

1.2.2. Impacto de los conflictos en la población civil

Los conflictos armados a nivel mundial continuaron causando gravísimos impactos en la población civil, además de destrucción de infraestructuras y repercusiones de largo plazo. **Las consecuencias de la conflictividad armada global no se reflejaron solamente en los elevados niveles de letalidad entre civiles en algunos contextos de conflicto armado, sino también en otros múltiples impactos de la violencia utilizada de manera indiscriminada o, incluso, deliberadamente contra población civil.** Durante 2016 la situación en algunos escenarios de conflicto fue especialmente significativa en este ámbito, como por ejemplo en el caso de Siria. Numerosos informes de ONG y de organismos de la ONU denunciaron múltiples abusos cometidos a gran escala en este país, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y/o contra la humanidad. Entre ellos el asesinato de civiles desarmados y combatientes heridos, el uso de torturas y malos tratos, la muerte de millares de personas en centros de detención, secuestros y desapariciones, además de otras prácticas especialmente lesivas para la población civil, como los asedios, que

12. Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).

sometieron a miles de personas a una situación de aislamiento, falta de alimentos y asistencia sanitaria. En estos contextos, el hambre y el acceso a otros recursos como el agua potable o a la electricidad fueron utilizados como armas de guerra. La situación en Siria –muchos de cuyos aspectos están presentes a diferente escala en otros conflictos armados– alentó debates y mensajes de alerta sobre la continua transgresión a las normas y principios del derecho internacional humanitario (DIH), leyes definidas justamente para regular los métodos y prácticas usadas en escenarios bélicos y para proteger a quienes no participan en las hostilidades.¹³ Las consecuencias derivadas de esta falta de distinción entre civiles y combatientes en el marco de los enfrentamientos y el uso de la violencia fueron especialmente patentes durante 2016 en acontecimientos ocurridos en contextos como Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, RCA, RDC, Sudán del Sur, Afganistán, India (CPI-M), Myanmar, Ucrania (este), Turquía (sudeste), Rusia (Daguestán), Yemen (al-houthistas), Iraq, Israel-Palestina y Siria.¹⁴

En este contexto de desafío a las normas del DIH, **los ataques a infraestructuras de salud y personal médico en escenarios de conflicto armado fueron uno de los temas que motivaron especial preocupación en 2016.**

El Consejo de Seguridad aprobó en mayo una resolución (2286), promovida por más de 80 Estados, en la que condena de manera contundente este tipo de ataques en situaciones de conflicto armado, exige el fin de la impunidad a los responsables de estas acciones y subraya las consecuencias de largo plazo que tienen este tipo de ofensivas en la población civil y en los sistemas de salud de los países afectados. La resolución recuerda que las partes contendientes tienen la obligación de respetar el DIH y sus compromisos bajo los convenios de Ginebra, que incluyen garantías sobre la seguridad y el libre acceso del personal médico y humanitario. Siria es uno de los casos donde las ofensivas contra infraestructuras de salud han sido más recurrentes, como han constatado los informes de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de otras ONG –Amnistía Internacional denunció en 2016 que el régimen y Rusia estaban recurriendo a esta práctica como parte de su campaña bélica para recuperar el control de Aleppo, por ejemplo–, pero no ha sido el único caso. En los últimos tres años la Cruz Roja contabilizó 2.400 ataques en 11 países y Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó sobre continuos ataques a hospitales en Afganistán, RCA, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. MSF subrayó, además, que cuatro de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estaban involucrados en coaliciones militares que han sido responsables de este tipo de ataques.

Los conflictos armados siguieron teniendo severos impactos en las y los menores de edad, como resultado de secuestros, reclutamiento forzado y destrucción de infraestructuras civiles, entre otras prácticas

Adicionalmente, los conflictos armados siguieron teniendo severas consecuencias en las y los menores de edad. Según un nuevo informe anual del secretario general de la ONU sobre la situación de los niños y niñas en contextos de conflicto armado –publicado en abril de 2016 y que cubre el período de enero a diciembre de 2015–, se constataron crecientes consecuencias graves en las y los menores de edad, relacionadas directamente con la denigración y la falta de cumplimiento del DIH y las leyes internacionales de derechos humanos en diversos escenarios.¹⁵ El informe destaca particularmente algunos casos como el de Afganistán –que en 2015 presentó los mayores niveles de víctimas mortales entre menores de edad desde que existe un registro sistemático de bajas civiles (en 2009)–, Somalia –donde se documentó un aumento del 50% en los abusos a menores en comparación con el año anterior–, Sudán del Sur –donde menores padecieron especialmente durante las ofensivas militares contra fuerzas de la oposición–, o el de Siria –por el elevado número de niñas y niños fallecidos en el marco del conflicto. **En otros contextos se denunció el incremento en el reclutamiento de menores, como por ejemplo en Somalia o Yemen. En este último país, por ejemplo, la**

ONU constató que durante 2015 la cifra de menores reclutados por actores armados se había quintuplicado respecto al año anterior –en su mayoría (72%) captados por los al-houthistas. El informe también confirma que el número de menores fallecidos o heridos a causa del incremento de la violencia en Yemen –en su mayoría niños (70%)– se había multiplicado por seis en comparación con 2014, en su mayor parte (60%) como consecuencia de ofensivas atribuidas a la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita.

El informe también subraya los efectos en las y los menores de los persistentes ataques contra infraestructuras civiles como escuelas y hospitales, en muchos casos como consecuencia de ofensivas aéreas en zonas pobladas, y denuncia las acciones deliberadas de algunos actores armados para impedir el acceso de las niñas a la educación. Al igual que en el informe anterior, el secretario general de la ONU expresa su profunda inquietud por el aumento en el fenómeno de los secuestros a manos de grupos como al-Shabaab, Boko Haram, ISIS o el LRA, entre otros, y por la vulnerabilidad de las y los menores en situaciones de desplazamiento forzado, en especial de aquellos no acompañados. El análisis de los acontecimientos ocurridos en los distintos conflictos armados a lo largo de 2016 confirma la persistencia de muchas de las dinámicas que afectan a niños y niñas en conflictos armados. En clave positiva, el informe del secretario general de la ONU sobre niños y niñas en conflictos armados destaca el trabajo en campañas y planes de acción contra el reclutamiento

13. Véase “Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

14. Véase el resumen anual sobre estos casos en este capítulo.

15. Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU, *Children and armed conflict. Report of the Secretary General, A/70/836-S/2016/360*, 20 de abril de 2016.

de menores en países como Afganistán, RDC, Myanmar y el compromiso suscrito por el Gobierno de Sudán en marzo de 2016 para poner fin y prevenir el reclutamiento y uso de menores por parte de sus fuerzas de seguridad. El documento también señala en positivo los avances vinculados al proceso de paz en Colombia. Las FARC-EP –que en 2015 ya se habían comprometido a frenar el reclutamiento de menores de 17 años y de separar a los menores de 15 de sus filas– asumieron un compromiso público a comienzos de 2016 para poner fin al reclutamiento de menores de 18 años. El informe de la ONU celebra además que la corte constitucional colombiana decidiera que los y las menores reclutados por todos los actores armados, incluyendo en fase de desmovilización, fueran considerados como víctimas y, por tanto, sujetos de derechos a la reparación y a un apoyo al proceso de reintegración. El acuerdo de paz firmado en diciembre de 2016 definió un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, entre las cuales identifica a las niñas y los niños como un grupo vulnerable del conflicto.

La ONU lamentó la persistencia de prácticas como las violaciones masivas y el uso deliberado de la violencia sexual en contextos de conflicto armado

Otro de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual, aunque en muchas ocasiones menos visible e infra-denunciado.¹⁶ Como destaca el informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos –publicado en junio de 2016 y que analiza el período de enero a diciembre de 2015–, expertos en terreno estiman que por cada caso de violación denunciado en contextos de conflicto armado existen otros 10 ó 20 casos que no son documentados. **El informe de la ONU lamenta la persistencia de episodios de violaciones masivas en escenarios bélicos y señala que durante 2015 se documentaron abusos de este tipo en RDC (este), Sudán y Sudán del Sur.** Asimismo, señala el uso de las agresiones sexuales motivadas por la supuesta filiación política de las víctimas en casos como Burundi o como forma de castigo, como en el caso de mujeres cristianas violadas en represalia por su contacto con miembros de la comunidad musulmana en RCA. El texto de la ONU también alerta sobre el uso sistemático de la violencia sexual en otros contextos de conflicto, como Iraq o Siria y destaca su uso como “táctica terrorista” y como instrumento para perpetrar genocidio contra comunidades minoritarias por parte de grupos armados como ISIS. En este último caso, el uso de la violencia sexual se identifica como una práctica premeditada y estratégica para los fines de la organización. La oferta de mujeres como esposas temporales o esclavas sexuales ha actuado, por un lado, como un factor de atracción de combatientes extranjeros que se han sumado a las filas de ISIS y, por otro, como un elemento de expulsión de comunidades que se han visto forzadas a abandonar sus hogares para escapar de la amenaza del grupo armado.

Cabe destacar que la violencia sexual también opera como una amenaza a las mujeres que afecta su movilidad y sus posibilidades de actuación en el ámbito público, convirtiéndose en un factor de control moral y social que pretende circunscribirlas a la esfera privada. **El análisis de la evolución de los conflictos armados a nivel mundial durante 2016 revela la continuidad de este fenómeno, con nuevos episodios de violencia sexual en casos como Burundi** –donde una comisión de investigación de la ONU denunció al Gobierno tras identificar un patrón sistemático de abusos a los derechos humanos, incluyendo violaciones–; **Libia** –con una alta incidencia de abusos contra la población migrante y refugiada que llegó al país norteafricano en su intento por alcanzar las costas europeas–; **Myanmar** –donde se identificó un patrón periódico de abusos a civiles, entre ellos asesinatos y violaciones–; **Ucrania (este)** –con denuncias de violencia sexual tanto en áreas bajo control del Gobierno como en manos de las fuerzas rebeldes–; **o Siria** –donde volvieron a registrarse acusaciones de uso de violencia sexual por distintos actores armados implicados en el conflicto.

Los masivos desplazamientos forzados de población fueron otro de los impactos más dramáticos e ilustrativos de los conflictos armados, con consecuencias de amplio alcance para las poblaciones civiles afectadas por múltiples formas de violencia. En los últimos años los balances de ACNUR han constatado el significativo aumento de las cifras de desplazamiento forzado a nivel global, con un incremento de más de un 50% en un período de cinco años. **Desde que en 2011 la agencia de la ONU anunciara un nuevo récord de 42,5 millones de personas desplazadas de manera forzosa los números no han dejado de aumentar de manera vertiginosa: 45,2 millones en 2012; 51,2 millones en 2013; 59,5 millones en 2014; y 65,3 millones al finalizar el año 2015.**¹⁷ En este total de 65,3 millones de personas –una cifra superior a la población de Reino Unido y que si correspondiera a un país lo ubicaría en el puesto 21 de los más poblados del mundo– se incluyen 21,3 millones de personas refugiadas (16,1 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,2 millones de palestinos y palestinas registrados en la UNRWA), otras 40,8 millones de personas en situación de desplazamiento forzado interno y 3,2 millones de solicitantes de asilo.

De acuerdo a las cifras globales disponibles a principios de 2017, que presentan un balance parcial de 2016 basándose en datos relativos al primer semestre del año, estas tendencias se mantenían.¹⁸ Así, por ejemplo, el número de personas refugiadas bajo mandato de ACNUR –excluyendo, por tanto, a la población palestina vinculada a la UNRWA– había pasado de 16,1 millones a finales

16. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad).

17. UNHCR, *Global Trends: Forced Displacement in 2015*, 20 de junio de 2016.

18. ACNUR publica su informe anual a mediados de año, el 20 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Los datos que se presentan a continuación corresponden al informe parcial con datos relativos al primer semestre de 2016. UNHCR, *Mid-Year Trends 2016*, 17 de febrero de 2017.

Del total de personas que llegaron a Europa, la gran mayoría –unas 850.000– lo hicieron a través de la ruta del Mar Egeo que conecta Turquía con Grecia. A lo largo de 2015, según los recuentos disponibles, un total de 3.771 personas murieron en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas. En 2016 se redujo el número de personas que apostaron por cruzar el Mediterráneo, pero las cifras de letalidad aumentaron. En octubre de 2016 ya se había superado el balance de 2015 y **al finalizar el año 2016 los datos de diferentes organizaciones indicaban un alarmante incremento en las muertes de personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo, alcanzando la cifra record de 5.000 víctimas mortales en un año.**¹⁹

Es decir, un promedio de casi 14 muertes diarias en el Mar Mediterráneo. Tras los acuerdos de la UE con Turquía para bloquear los flujos de personas refugiadas en la zona oriental del Mediterráneo, la conocida como “ruta central” que conecta Libia con Italia se convirtió en la principal vía de tránsito y en la más letal.

En cuanto a los desplazamientos forzados de población de carácter interno –dentro de las fronteras del mismo Estado escenario de conflicto y violencia–, las cifras globales disponibles correspondientes a 2015 indicaban que al finalizar ese año había un total de 40,8 millones de personas en esta situación. **Según los balances de IDMC, el desplazamiento forzado interno producto de conflictos y violencia no ha cesado de aumentar desde 2003 y la cifra de 2015 –que duplica a la de personas refugiadas a nivel global– era la más alta desde que existen registros.**²⁰ A lo largo de 2015 más de 8,6 millones de personas se convirtieron en nuevas desplazadas como resultado de conflictos y violencia en un total de 28 países. Las guerras en Oriente Medio tuvieron una especial incidencia en este balance. Los datos de IDMC indican que en 2015 los conflictos en Yemen, Iraq y Siria supusieron 4,8 millones de nuevos desplazamientos, es decir, más de la mitad de todos los nuevos desplazamientos a nivel mundial. Yemen se ubicó a la cabeza de los nuevos desplazamientos ya que la intensificación de las hostilidades en el país forzó la huida de sus hogares de más de 2,5 millones de personas –casi el 10% de la población– en tan solo un año (que se sumaron a las 330.000 que ya vivían en una situación de desplazamiento interno crónico en provincias del norte). Fuera de esta región, conflictos como el de Ucrania, Sudán, RDC o Afganistán también motivaron importantes nuevos desplazamientos de población en 2015.

En lo que respecta a la cifra global, del total de 40,8 millones de personas desplazadas internas en el

mundo al finalizar 2015, dos tercios –alrededor de 30 millones de personas– se ubicaban en tan solo una decena de países. Siria se situaba en primer lugar con 6,6 millones de personas desplazadas internas al finalizar 2015. Pese a ello, en este caso, se observó un descenso en el número de personas desplazadas internas –de 7,6 a 6,6 millones– en parte porque muchas de ellas decidieron cruzar las fronteras y buscar refugio fuera del país. Otros países que concentraron un número importante de población desplazada interna fueron Colombia, RDC, Iraq, Sudán y Yemen,

entre otros. La evolución de los conflictos armados en 2016 parece indicar que las tendencias en materia de desplazamiento forzado interno continuarán la línea identificada por el IDMC y ACNUR, si se tiene en cuenta el impacto de los acontecimientos en algunos países como los enfrentamientos entre diversos grupos armados en RCA –que sólo en noviembre de 2016 forzaron a más de 11.000 personas a huir de sus hogares–; las consecuencias de la ofensiva militar del Gobierno de

Sudán en Jebel Marra –que motivó una grave crisis de desplazamiento forzado en Darfur–; las repercusiones de los enfrentamientos y atentados en Afganistán –que agravaron la problemática situación de desplazamiento forzado en el país–; el deterioro de la situación en Yemen –donde se calculaba que la cifra de población desplazada interna había alcanzado los tres millones de personas al finalizar 2016–; los combates y los efectos de la dura campaña del régimen de Bashar al-Assad contra fuerzas de la oposición en Alepo –que forzaron a más de 100.000 personas a huir de la ciudad–, o la operación de la coalición internacional y el Gobierno iraquí contra ISIS en Mosul –que motivó importantes nuevos desplazamientos de civiles, elevando la cifra total de personas desplazadas internas en el país a más de 3,6 millones al finalizar 2016.²¹

1.2.3. Embargos de armas

En virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU puede adoptar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, que van desde sanciones económicas o de otra índole hasta la intervención militar internacional.²² El empleo de sanciones tiene por objeto ejercer presión sobre un Estado, entidad o individuo para que cumpla con los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Las sanciones pueden ser económicas y comerciales, en sentido amplio; o medidas más selectivas, como embargos de armas, prohibiciones de viajar, restricciones financieras o diplomáticas, o una combinación de ambas

19. UN News, “Mediterranean death toll in 2016 ‘worst we have seen’ – UN refugee agency”, *UN News*, 25 de octubre de 2016; Nick Cumming-Bruce, “Worst Annual Death Toll Ever: Mediterranean Claims 5,000 Migrants”, *The New York Times*, 23 de diciembre de 2016.

20. IDMC, *GRID 2016: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2016.

21. Véase el resumen anual sobre los conflictos armados mencionados en este capítulo.

22. Para este fin existe el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tabla 1.2. Embargos de armas de la ONU, UE, OSCE y la Liga Árabe en 2016

País*	Entrada en vigor	País	Entrada en vigor
Embargos vigentes decretados por Naciones Unidas (14)		Embargos decretados por la UE (22)	
Al-Qaeda y entidades e individuos asociados, milicias talibán**	2002	Al-Qaeda y milicias talibán**	2002
Côte d'Ivoire	2004-2016	Belarús	2011
Corea, RPD	2006	China	1989
Eritrea	2009	Côte d'Ivoire	2004-2016
Irán	2006	Corea, RPD	2006
Iraq (FNG*** desde 2004)	1990	Egipto	2013
Líbano (FNG)	2006	Eritrea	2010
Liberia (FNG desde 2009)	1992-2016	Irán	2007
Libia	2011	Iraq (FNG desde 2004)	1990
RCA	2013	Líbano (FNG)	2006
RDC (FNG desde 2008)	2003	Liberia (FNG desde 2008)	2001-2016
Somalia (FNG desde 2007)	1992	Libia	2011
Sudán (Darfur) (FNG)	2004	Myanmar	1991
Yemen (FNG)	2015	RCA	2013
		RDC (FNG desde 2003)	1993
Embargos decretados por la Liga Árabe (1)		Rusia	2014
Siría	2011	Siría	2011
		Somalia	2002
Embargos decretados por la OSCE (1)		Sudán	1994
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	1992	Sudán del Sur	2011
		Yemen (FNG)	2015
		Zimbabwe	2002

* En negrita, país o grupo en una situación de conflicto armado sujeto a embargo.

** Embargo no ligado a un país o territorio en concreto.

*** FNG: Fuerzas No Gubernamentales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y European Commission, Restrictive measures in force (Article 215 TFEU), publicado el 7 de julio de 2016, European Commission.

cosas.²³ Los embargos de armas de Naciones Unidas son impuestos por resoluciones adoptadas en virtud del artículo 41 del Capítulo VII de la Carta. Al menos nueve de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben apoyar la resolución y ninguno de los miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) debe vetarla. Hay dos tipos de embargos del Consejo de Seguridad: los voluntarios y los obligatorios. Los Estados miembros

de la ONU deben cumplir los embargos de armas obligatorios. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de violaciones de los embargos de armas por parte de los Estados miembros. Los últimos ejemplos de que se tiene constancia corresponden a Eritrea,²⁴ en relación a las actividades militares de Arabia Saudita y EAU que estarían violando el embargo de armas que pesa sobre este país, e Irán, en relación a posibles transferencias de armas a países sometidos a embargo.²⁵

23. Los mecanismos de sanciones y, en concreto, los embargos de armas, han sido utilizados de forma desigual desde la creación de Naciones Unidas. Entre 1945 y 1968 no fue sancionado ningún país. Entre 1968 y 1989 estos mecanismos solo fueron utilizados en dos contextos, vinculados al proceso de descolonización: en la antigua Rodhesia del Sur (actual Zimbabwe) entre 1968 y 1979 (debido a la inestabilidad interna); y en Sudáfrica entre 1977 y 1994 (por la intervención sudafricana en los países vecinos, la violencia e inestabilidad interna y el sistema de discriminación racial del Apartheid). Desde 1989, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sancionado a 24 regímenes: la antigua Yugoslavia, Haití, Iraq, Angola, Sierra Leona, Somalia, Eritrea, Liberia, RDC, Côte d'Ivoire, Sudán (2), Líbano, Corea del Norte, Irán, Libia (2), Guinea-Bissau, RCA, Yemen, Sudán del Sur, así como contra ISIS, al-Qaeda y las milicias Talibán (2). El limitado uso de estos mecanismos durante la Guerra Fría se enmarcó, como otros instrumentos de Naciones Unidas, en la política de competencia entre bloques, por lo que el fin de este periodo supuso, como en otras áreas, un creciente activismo de la organización en este campo, facilitando la imposición de embargos de armas. Su uso también favoreció el fortalecimiento del papel de Naciones Unidas como garante de la paz y la seguridad internacionales. Además, los embargos de armas fueron progresivamente vistos como un tipo de sanciones más efectivas que las sanciones económicas, por centrarse en las élites de los Estados y en los grupos armados no estatales, limitando su impacto humanitario.
24. Véase Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, *Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con la resolución 2182 (2014) del Consejo de Seguridad: Eritrea*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2016/920, 31 de octubre de 2016. Este informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, presentado en octubre de 2016, afirma que las actividades militares de Arabia Saudita y EAU en Eritrea estarían violando el embargo de armas que pesa sobre este país. Véase el resumen sobre Eritrea en el capítulo 2 (Tensiones).
25. Véase Consejo de Seguridad de la ONU, Segundo informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad, S/2016/1136, 30 de diciembre de 2016. En este informe se señala que Francia informó a la ONU de que, en marzo de 2016, se había incautado de un cargamento de armas en el Océano Índico septentrional, concluyendo que dicho cargamento procedía de Irán y estaba probablemente destinado a Somalia o al Yemen. Días después de la publicación del informe de la ONU, el secretario general de la ONU manifestaba su preocupación ante la confirmación de la posible violación del embargo de armas tras acceder a un informe confidencial que corroboraba los hechos presentados en el informe de diciembre. Véase Nicholls, Michelle, "U.N. chief concerned Iran may have violated arms embargo: report", Reuters, 8 de enero de 2017. El 24 de junio de 2016, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconoció en una entrevista televisiva que recibía todas sus armas y misiles de Irán, tal y como recogió el mismo informe de la ONU. Véase Goodenough, Patrick, "Terrorist Chief: 'As Long as Iran Has Money, We Will Have Money'", CNS, 27 de junio de 2016.

En este sentido, un informe publicado en 2016 por Small Arms Survey²⁶ destacaba los crecientes obstáculos organizacionales, operacionales y políticos al trabajo que realizan los expertos encargados de monitorear los embargos de armas de la ONU. Las entrevistas con expertos en armamento actuales y anteriores en los Comités de Expertos de la ONU revelan que el proceso de monitoreo está socavado por una coordinación desigual con las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU; el bloqueo a las investigaciones, al reclutamiento de expertos y al acceso a las zonas de investigación; plazos de investigación insuficientes; la interferencia política, represalias y presiones sobre los miembros de los Paneles de Expertos, entre las principales cuestiones. Estos expertos sostienen que, a pesar de estos desafíos, el monitoreo ayuda a prevenir las violaciones de los embargos de armas, debido a que se incrementan los costos de posibles violaciones de este mecanismo de sanción y probablemente evitan ciertos tipos de violaciones. No obstante, los participantes en el estudio remarcaron la necesidad de no medir el éxito de los Paneles de Expertos de la ONU estrictamente en términos de reducción de los flujos de armas, lo que sugiere que los paneles deberían funcionar junto con otras medidas, políticas y diplomáticas, para promover realmente la paz y la seguridad.

Cabe destacar que este apartado solo hace referencia a los embargos de armas impuestos o vigentes por organizaciones internacionales y no incluye los embargos y sanciones impuestos por Estados de forma unilateral. Además de la ONU, organizaciones como la Liga Árabe o la UE también han establecido embargos de armas vinculantes para sus Estados miembros en los últimos años, que en unos casos responden a la implementación de los embargos de armas que impone Naciones Unidas (como por ejemplo, el embargo de armas a RCA impuesto en 2013, o el embargo de armas a algunos de los actores involucrados en el conflicto en Yemen impuesto en abril de 2015 por parte de la ONU e implementado por parte de la UE en junio de ese año) y, en otros casos, corresponden a iniciativas propias de estas organizaciones, como es el caso de las medidas adoptadas contra Rusia en 2014 por parte de la UE. Los embargos de la UE se imponen mediante Posiciones Comunes adoptadas de forma unánime por el Consejo de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. En el caso de la organización OSCE los embargos son voluntarios. Otros organismos regionales, como la UA y ECOWAS, disponen de mecanismos similares, aunque en la actualidad no existe ningún embargo de armas establecido por estas organizaciones africanas.

En 17 de los 32 conflictos armados activos al finalizar 2016 y en 59 de las 87 tensiones no se habían establecido embargos de armas por parte de la ONU ni de otras organizaciones regionales

En definitiva, a finales de 2016 continuaban sometidos a un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU **11 países y la organización al-Qaeda (y las entidades e individuos vinculados a ella, como las milicias talibán), dos menos respecto al año 2015, por el levantamiento de los embargos de armas que pesaban sobre Côte d'Ivoire, en abril, y Liberia, en mayo.** En abril el Consejo de Seguridad de la ONU tomó la decisión, mediante la resolución 2284, de levantar el embargo de armas que pesaba sobre **Côte d'Ivoire** desde el ciclo de violencia en las elecciones de 2010. En paralelo propuso una progresiva reducción y posible conclusión de la ONUCI a mediados de 2017, teniendo en cuenta la mejora de las condiciones de seguridad sobre el terreno desde el fin del conflicto armado y la capacidad del Gobierno para asumir la función de seguridad, aunque el mismo informe del secretario general de la ONU de marzo reconocía la persistencia de la fragilidad en el país.²⁷ En paralelo, el Consejo de Seguridad también aprobó el 25 de mayo la resolución 2288, por la que levantaba el embargo de armas que pesaba sobre **Liberia** como consecuencia del conflicto armado que padeció entre 1999 y 2003 y de la situación de inestabilidad de los años posteriores, debido a la mejora general de la estabilidad y a la consolidación de las instituciones estatales, aunque animó al Gobierno a establecer el marco adecuado para combatir el tráfico ilícito de armas y munición.

En seis de estos países (RDC, Iraq, Líbano, Somalia, Sudán y Yemen) los embargos de la ONU solo afectaban a actores armados no estatales, y no al Gobierno. En lo concerniente a la UE, al finalizar 2016 seguían **vigentes 20 embargos de armas establecidos por la UE sobre 19 países y sobre al-Qaeda y las milicias talibán**, este último embargo no vinculado a un país o territorio. Dos embargos, sobre Côte d'Ivoire y Liberia, fueron levantados en junio, en consonancia con las decisiones de la ONU tomadas en abril y mayo. En tres de estos países (RDC, Iraq y Líbano), además del que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán, el embargo de la UE solo afectaba a actores no estatales. El caso de **Egipto** es paradigmático: existe un embargo de armas de la UE vigente sobre el país, pero en contraste con el resto de medidas restrictivas y sanciones establecidas por la UE relativas a la exportación de armas, el Consejo de la UE no estableció una decisión o regulación específica, por lo que el embargo de armas no es legalmente vinculante sino que es un compromiso político de los Estados miembros.²⁸ En consecuencia, diversos países están trasgrediendo dicho embargo de armas. Finalmente, la **Liga Árabe** mantuvo su embargo de

26. LeBrun, Emile, y Rigual, Christelle, *Monitoring UN Arms Embargoes. Observations from Panels of Experts*, Small Arms Survey, agosto de 2016.

27. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe especial del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire*, S/2016/297, 31 de marzo de 2016. Véase el resumen sobre Côte d'Ivoire en el capítulo 2 (Tensiones).

28. Véase *EU arms embargo on Egypt*, SIPRI Database, 10 de enero de 2017, y European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU)*, publicado el 7 de julio de 2016. Según SIPRI, desde 2014 diversos países miembros de la UE han suministrado significativas cantidades de armamento a Egipto y han firmado importantes contratos para futuras entregas, por lo que puede considerarse que este embargo está levantado o que se está incumpliendo sistemáticamente por no ser vinculante.

armas sobre **Siria** establecido en 2011 y la **OSCE** hizo lo propio respecto al embargo de armas de aplicación voluntaria que pesa sobre Armenia y Azerbaiyán en relación al contencioso de Nagorno-Karabaj.

En total, sumando los embargos establecidos por las diferentes organizaciones, al finalizar el año 2016 se contabilizaron **34 embargos de armas dirigidos contra un total de 22 Estados y grupos armados no estatales**,²⁹ cuatro menos que el año anterior por el levantamiento de los embargos de armas que pesaban sobre Liberia y Côte d'Ivoire por parte de la ONU y de la UE. 11 de los 20 embargos establecidos por la UE respondían a la implementación de los embargos del Consejo de Seguridad de la ONU.³⁰ Los nueve restantes correspondían a iniciativas europeas: Belarús, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabue.³¹ El embargo de armas que pesa sobre **China** se remonta a 1989,³² como consecuencia de la violenta represión de las protestas en la plaza de Tiananmén, en Beijing, ya que el conflicto armado que afecta el Turquestán Oriental desde 2014 es posterior. No obstante, la interpretación de este embargo, tal y como destaca SIPRI, ha variado, y en particular el Reino Unido y Francia han llevado a cabo diferentes aproximaciones en su política comercial con China.

De los 22 Estados y grupos armados no estatales señalados por la ONU, la UE, la Liga Árabe y la OSCE, **13 hacían referencia a Estados cuyos territorios se ven afectados por conflictos armados y a actores presentes en esos mismos territorios activos a finales de 2016** (China, Egipto, Libia, Myanmar, RCA, Rusia, Siria, Sudán y Sudán del Sur y grupos armados en Iraq, Somalia, RDC y Yemen –en el caso de Sudán, RDC y Yemen, afectan a los dos conflictos que padecen cada uno de estos países–), es decir, **13 embargos que afectan a 16 situaciones de conflicto armado**. Cabría añadir **el embargo que pesa sobre al-Qaeda y las milicias talibán**, pero aunque gran parte de ambas organizaciones tienen sus bases y operan en Afganistán y Pakistán, el embargo de armas no corresponde a ningún territorio en concreto, según señala la resolución 1390.

Siete de los otros ocho restantes Estados sobre los que pesan embargos afrontaban situaciones de tensión de intensidad variable (Armenia-Azerbaiyán, Eritrea, Irán, Líbano, RPD Corea y Zimbabue –la mayoría de estos países padecían diversos escenarios de tensión a la vez, que se veían afectados por un mismo embargo). El último caso es la situación en **Belarús**, país que continúa siendo objeto de un embargo de armas de la UE desde 2011 con motivo de la grave situación de derechos humanos imperante, el deterioro de la democracia y el imperio de la ley. **Así, de los 32 conflictos armados activos a finales**

de 2016, existían 17 casos en los que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la UE, ni la Liga Árabe ni la OSCE plantearon el establecimiento de un embargo de armas como medida sancionadora. Además, de las 87 situaciones de crisis sociopolíticas identificadas en el año 2016, **existían 59 situaciones de tensión que tampoco fueron objeto de embargos**. Ello, pese a que en muchos casos, el carácter preventivo de la medida podría incidir en una reducción de la violencia.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Malí (norte)	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Chad
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

29. Entre éstos, existe un embargo de armas voluntario, impuesto por la OSCE sobre Armenia y Azerbaiyán en 1992.

30. En el caso de Sudán, la UE estableció el embargo para el conjunto del país en 1994 y el Consejo de Seguridad de la ONU para la región de Darfur en 2004, al que se ha añadido el embargo de armas a Sudán del Sur en el año 2011.

31. No están incluidos los países sobre los que pesan otro tipo de sanciones como congelación de fondos y otros recursos económicos, ni restricciones de entrada y prohibición de viajar de algunos de sus ciudadanos. European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU)*, 7 de julio de 2016.

32. Véase *EU arms embargo on China*, SIPRI Database, 10 de enero de 2017, y European Commission, *Restrictive measures in force (Article 215 TFEU)*, publicado el 7 de julio de 2016.

Las condiciones de seguridad en el norte del país se deterioraron significativamente durante el año, sobre todo a raíz de las continuas violaciones del cese el fuego previsto en el Acuerdo de Paz de Argelia entre los grupos vinculados a la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) y los grupos progubernamentales pertenecientes a la Plataforma. A su vez, los ataques y atentados realizados de manera permanente por las organizaciones armadas de corte yihadista, las cuales quedaron relegadas de la firma del acuerdo de paz, incrementaron la situación de inseguridad en el norte y centro del país e influyeron en la desestabilización regional registrándose atentados en Burkina Faso, Côte d'Ivoire o Níger. En total, el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) **registró durante el año 285 muertes provocadas por el conflicto armado en el país.**³³ En cuanto a cifras de desplazamiento forzado se refiere, **la población desplazada en el norte de Malí se redujo de los 62.000 registrados en enero a los 37.000 en el mes de octubre**, según datos de la Organización Internacional para la Migración (IOM, por su siglas en inglés),³⁴ registrándose a su vez tendencias positivas de retorno de personas que habían buscado refugio en países vecinos.

Las tensiones entre los grupos armados árabe-tuareg miembros de la CMA o de la Plataforma rebrotaron nuevamente durante el año, volviendo a poner en entredicho el acuerdo de paz alcanzado en junio del 2015.³⁵ Ya a finales de 2015 se habían producido duros enfrentamientos en la ciudad de Anefis entre miembros de la CMA y de la milicia progubernamental, Grupo de Autodefensa de los Imghad y los Aliados Tuareg (GATIA). La crisis de Anefis había dado paso a conversaciones bilaterales entre ambos grupos en octubre de 2015, logrando la firma de un acuerdo de respeto del alto el fuego. Sin embargo, durante el 2016 se volvieron a agudizar las tensiones, dando como resultado el estallido de diferentes brotes de violencia y la fragmentación de algunos grupos. El 21 y 22 de julio, un duro enfrentamiento registrado entre militantes de GATIA y la CMA dejó un balance de 20 muertos y más de 40 heridos. El 16 de septiembre, en otro enfrentamiento entre ambos grupos, resultaron muertos alrededor de una docena de combatientes. A su vez, desde el 18 al 26 de septiembre se registraron enfrentamientos por el control territorial de los pueblos fronterizos de Inekabawatane y Khalil. El 8 de octubre, **en un atentado con coche bomba, resultó muerto el jefe militar de la CMA y líder de la organización armada Alto Consejo para la Unidad de Azawad (HCUA).** Paralelamente, la CMA inició un proceso interno de divisiones y fragmentaciones, generándose escisiones internas que dieron pie al surgimiento de la organización Congreso de Justicia de Azawad (CJA), encabezada por los líderes tuaregs Hama Ag Mahmoud y el coronel Abass Ag Mohamed Ahmad, y

al Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA). Las tensiones entre los grupos firmantes del Acuerdo de Paz debilitaron seriamente su implementación. Al respecto, no fue hasta a principios de octubre cuando se logró el establecimiento de las patrullas conjuntas previstas en el acuerdo, con miembros del operativo francés Barkhane, Fuerzas Armadas malienses y grupos rebeldes de la Plataforma patrullando el área de Ménaka-Ansongo, aunque sin participación de los miembros de la CMA.

Por otro lado, los ataques de los grupos armados de corte yihadista se siguieron concentrando contra las fuerzas de seguridad malienses y contra la misión de la ONU en el país, MINUSMA. Durante el mes de febrero se registraron al menos nueve ataques que costaron la vida a unos 13 soldados malienses y a siete miembros de la MINUSMA, dejando a su vez numerosos heridos. En el que fue el peor atentado registrado en febrero, un ataque reivindicado por el grupo Ansar Dine contra la base de la MINUSMA en Kidal el día 12 dejó siete soldados guineanos fallecidos y alrededor de 30 heridos. El 12 de abril un

La MINUSMA se ha convertido en la misión de la ONU más peligrosa en la actualidad, con 70 soldados asesinados desde 2012 en Malí

ataque contra un vehículo de la operación Barkhane cerca de Amachach, región de Kidal, mató a tres soldados franceses. El 19 de mayo, en una emboscada perpetrada en la región de Kidal, reivindicada por Ansar Dine, perdieron la vida otros cinco soldados chadianos de la MINUSMA, y otros tres resultaron heridos. Ese mismo día, la organización yihadista Frente de Liberación de Macina (MLF) hizo público un video donde comunicó oficialmente la alianza con Ansar Dine, amenazando a Francia y sus aliados en la región. El 28 de mayo, en otra emboscada a un convoy de la MINUSMA en la región de Mopti, otros cinco cascos azules de origen togolés resultaron muertos. La MINUSMA también padeció otros ataques durante el mes de mayo donde resultaron heridos siete soldados. El 19 de junio, grupos yihadistas atacaron una base militar del Ejército maliense en Nampala, región de Ségou, donde perdieron la vida 17 soldados y otras 35 personas resultaron heridas. La acción fue reivindicada por dos grupos diferentes: MLF y por el recientemente creado Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia (ANSIPRJ). A raíz de estos acontecimientos el Gobierno decretó el estado de emergencia por 10 días, que posteriormente fue ampliado por el Parlamento hasta el 29 de marzo de 2017. El 5 y 7 de agosto, otro ataque contra la MINUSMA en Kidal, se saldó con un soldado muerto y otros seis heridos. Durante el mes de octubre, una emboscada contra un convoy de las Fuerzas Armadas malienses realizada el día 4 en Tombuctú, dejó un militar fallecido. Otro ataque posterior en Mopti, realizado por Ansar Dine, mató a cuatro soldados malienses. Posteriormente, tres soldados de la MINUSMA perdieron la vida en octubre en varios ataques registrados en Kidal, donde a su vez, y en otro ataque reivindicado por Ansar Dine contra las fuerzas

33. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).

34. International Organization for Migration, "Displacement Tracking Matrix (DTM) Reports", 10 de noviembre de 2016.

35. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 3 (Procesos de paz).

francesas de la operación Barkhane, seis soldados resultaron heridos, según fuentes del Gobierno francés, aunque Ansar Dine comunicó que dos soldados franceses habían perdido la vida. En el mes de noviembre, al menos siete soldados malienses, un casco azul y cinco civiles murieron en diferentes ataques perpetrados por Ansar Dine o al-Mourabitoun. La MINUSMA sigue siendo la más peligrosa de todas las misiones de mantenimiento de la paz desplegadas por la ONU en la actualidad. A 31 de octubre, **la ONU reportó un total de 70 soldados asesinados en el país desde la puesta en marcha de la misión en el año 2012, 35 de ellos durante el 2016.** El mandato de la misión fue ampliado por el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el 30 de junio de 2017.

En relación con la desestabilización regional producida a consecuencia de atentados de organizaciones yihadistas que operan principalmente en Malí, durante el año se registraron diversos episodios violentos en países fronterizos, de los cuales destacaron los siguientes. Los días 15 y 16 de enero **Ouagadougou, capital burkinesa, sufrió un ataque coordinado por parte del grupo armado al-Mourabitoun, que dejó un balance de 28 personas muertas, alrededor de 50 personas heridas** y la liberación de unas 126 personas que habían sido tomadas como rehenes. Posteriormente, el 13 de abril, al-Mourabitoun perpetró otro ataque contra un complejo turístico en Côte d'Ivoire, en el que perdieron la vida al menos 14 civiles y dos soldados costamarfileños, además de haber dejado 33 personas heridas. El 6 y el 14 de octubre presuntos yihadistas malienses lanzaron varios ataques en el oeste de Níger, en la región de Tahoua, que costaron la vida a unos 24 miembros de los cuerpos de seguridad nigerinos. A mediados de diciembre, una docena de soldados de la unidad especial antiterrorista de Burkina Faso fueron asesinados en un ataque no reivindicado en el norte del país, en la frontera con Malí. Durante el año también se produjeron importantes acciones contrainsurgentes en el norte de Malí. Las fuerzas de seguridad malienses confirmaron el arresto el 10 de mayo de Yacouba Touré, jefe del grupo Ansar Dine. El 27 de julio se produjo el arresto del comandante regional de Ansar Dine, Mahmoud Barry, apodado "Abu Yehiya". En noviembre se detuvo en Gao al número dos de una facción de la organización Ansar Dine Attaher Ag Ihadou. A su vez, a finales de noviembre fuentes estadounidenses informaron de la supuesta muerte del líder del grupo armado al-Mourabitoun, el argelino Mokhtar Belmokhtar, quien habría muerto a consecuencia de un ataque aéreo francés, información no confirmada. El 22 de agosto, el miembro de Ansar Dine, Ahmad al-Faqi al-Mahdi³⁶ –acusado de crímenes de guerra por la destrucción de nueve mausoleos y una sección de la famosa mezquita Sidi Yahia de Tombuctú, en 2012– se declaró culpable en el juicio ante la Corte Penal Internacional, siendo condenado el 27 de septiembre a nueve años de prisión.

Región Lago Chad (Boko Haram)³⁷

Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

Durante el 2016, sobre todo a partir de mediados de año, la estrategia militar de contención de la insurgencia de Boko Haram, desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, a través de la implementación de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF, por sus siglas en inglés) empezó a dar resultados militares. La MNJTF –que ha contado además con el apoyo logístico de la UE, EEUU, Francia y Reino Unido, así como con la participación en hostilidades de grupos de seguridad privada sudafricanos–, logró arrebatar importantes franjas de territorio a la insurgencia y redujo significativamente su capacidad e impacto en la región, principalmente en el norte de Nigeria. El 25 de diciembre de 2015 el presidente nigeriano Muhammadu Buhari ya había declarado, en base a los avances registrados en la lucha contra la insurgencia, que Nigeria “técnicamente” había ganado la guerra frente a Boko Haram.³⁸ Sin embargo, Boko Haram se ha ido adaptando a las nuevas condiciones, reduciendo su presencia territorial, y ampliando sus ofensivas dirigidas contra objetivos específicos, así como empleando ataques suicidas –generalmente a través de mujeres y menores– como métodos de guerra. Esta nueva coyuntura generó que Boko Haram, lejos de poder afirmar que ha sido derrotado, se haya transformado en una organización con un accionar similar al de los grupos yihadistas presentes en la región del Sahel, no vinculado al control efectivo de ningún área en

36. Véase “La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).

37. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como “Nigeria (Boko Haram)” por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse “Región Lago Chad (Boko Haram)” dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

38. BBC, “Nigeria Boko Haram: Militants ‘technically defeated – Buhari”, *BBC*, 24 de diciembre de 2015.

particular y empleando técnicas de guerra basadas en la generación de terror y en estrategias de *hit and run*.

En el 2016, los datos referentes al número de bajas generadas por el conflicto dieron muestra de la reducción del impacto de la violencia, al menos en la región norte de Nigeria. Según datos registrados por el Nigeria Security Tracker (NST)³⁹, el **balance de muertes violentas producidas en Nigeria –relacionadas con el conflicto con Boko Haram– hasta el mes de diciembre, era de 549 civiles fallecidos, a las que habría que añadir 1.004 muertes en enfrentamientos directos entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad.** Estos datos son muy significativos comparativamente hablando. En el año 2014, el Institute for Economics and Peace, en su informe *2015 Global Terrorism Index*, situaba a Boko Haram como el grupo armado más letal del año, con un balance de **6.644 muertes** –superando las 6.073 registradas por parte de ISIS⁴⁰–. En el año 2015, y según el NST, el balance de muertes directas documentadas por la violencia de Boko Haram fue de **4.440 muertes**. Las cifras corroboran una tendencia significativa en cuanto a la reducción del número de víctimas mortales, hecho que ha sido atribuido al despliegue de la MNJTF. La estrategia militar de la MNJTF mejoró sus resultados a raíz de la mayor colaboración entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad de los diferentes países implicados. Por un lado, se trabajó conjuntamente para tratar de cortar la base financiera de la organización en la región. A su vez, y si bien la MNJTF no es una fuerza integrada, sino de coordinación militar, Nigeria permitió durante el 2016 a los Ejércitos de Níger, Chad y Camerún, la entrada en su territorio para realizar acciones militares contra la insurgencia, permisos que también fueron replicados por el resto de países. Como ejemplo de esta mayor cooperación, durante el mes de junio, y a raíz del incremento de los ataques de Boko Haram en la región de Diffa, al sur de Níger, el Gobierno de Níger, presidido por Issoufou, solicitó a Chad el envío de 2.000 soldados de la misión regional, que se desplegaron en la ciudad de Bosso el 8 de junio. Posteriormente, el 17 de junio, tropas de Níger, Chad y Nigeria iniciaron la ofensiva para expulsar a la milicia de la región fronteriza entre Níger y Nigeria. Como parte del desgaste militar a Boko Haram, se generaron importantes divisiones internas en el movimiento a lo largo del año, llevando a pugnas por el control de la organización entre su líder Abubakar Shekau y el jeque Abou Musab al-Barnawi, ex portavoz del grupo, quien cuestionó el liderazgo y la estrategia militar de Shekau. El 3 de agosto, y a través de un comunicado publicado en una revista del grupo Estado Islámico (ISIS) –a quien Boko Haram juró lealtad en marzo de 2015– ISIS designó a al-Barnawi jefe de la organización. El hecho hizo que Shekau apareciera posteriormente en una grabación rechazando

las informaciones sobre su reemplazo, y afirmando que seguía al frente de la organización, haciendo evidentes las divisiones internas.

La estrategia militar desarrollada por la MNJTF logró reducir significativamente la capacidad operativa de Boko Haram en la región Lago Chad

El conflicto armado en el norte de Nigeria también estuvo caracterizado por su impacto, así como por las denuncias de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. En septiembre, el subsecretario general de la ONU, Toby Lanzer, quien además dirige la división humanitaria de la ONU en la región del Sahel, alertó de que si la zona del Lago Chad afectada por el conflicto de Boko Haram no recibía más ayuda se podría convertir en la peor crisis humanitaria del mundo. La ONU había solicitado 739 millones de dólares para poder proporcionar la asistencia humanitaria necesaria, sin embargo, a finales de año había recibido alrededor de 197 millones de dólares. Según cifras de la ONU, más de seis millones de personas se encontraban en graves condiciones de inseguridad alimentaria, de las cuales 568.000 gravemente desnutridas. A su vez, alrededor de 2,8 millones de personas estaban desplazadas o refugiadas debido a la persistencia de la violencia y la inestabilidad en la zona.

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

El clima general de inseguridad y violencia que afectó al conjunto de Etiopía durante el último año, considerado

39. Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker*, 12 de diciembre de 2016.

40. The Institute for Economics and Peace, *2015 Global Terrorism Index*, noviembre de 2015.

el peor en décadas, y que añadió un nuevo capítulo en octubre con el establecimiento del estado de emergencia, también vino acompañado de la persistencia de la violencia en la región de Ogadén **por parte del brazo armado del Ogaden National Liberation Front (ONLF) y del Oromo Liberation Front (OLF). Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),⁴¹ habría causado la muerte de más de 200 personas, entre insurgentes, miembros de las Fuerzas Armadas etíopes, de la milicia progubernamental Liyu y de población civil de esta región somalí que forma parte de Etiopía. No obstante, esta cifra responde a informaciones procedentes de los medios de comunicación vinculados a la insurgencia, al movimiento de liberación de Ogadén o a medios independientes cuyas cifras no pueden ser contrastadas con fuentes oficiales.**

Los medios de comunicación nacionales e internacionales se ven sometidos a restricciones para acceder al territorio de Ogadén por parte del Gobierno etíope. Estas restricciones se han visto agravadas por las reformas legislativas que se han llevado a cabo en el país en los últimos años, como la contestada ley antiterrorista de 2009, utilizada como una herramienta para silenciar a la oposición y los medios. A esto se añadió en 2016 la Computer Crime Proclamation, que pretende hacer frente al crimen informático y limitar los ciberataques, pero que en realidad es una ley cuyo objetivo es censurar y controlar internet, según diversos analistas. Etiopía ocupó en 2014 y 2015 el cuarto lugar a nivel mundial –el segundo país africano tras Eritrea– como país más represor de los medios de comunicación, según la organización Committee to Protect Journalists (CPJ).⁴² Este hecho no supuso una traba para que en junio Etiopía fuera escogida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos años ni tampoco para que pasara a ocupar la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de su historial de no cooperación con los mecanismos especiales de la organización internacional. Desde 2006 Etiopía ha rechazado la entrada de todos los relatores especiales de la ONU, a excepción del relator especial sobre Eritrea. A pesar de ello, el Gobierno etíope destacó que centenares de miembros del ONLF han sido capturados o se han rendido en los últimos años, insistiendo en que el conflicto armado está finalizado.⁴³ Sin embargo, uno de los comandantes del ONLF, Abdirahman Mahdi, destacó en una entrevista que el grupo armado estaba ampliando sus acciones armadas y que se había unido a otros grupos armados. En este sentido, en 2015 se tuvo constancia de la creación de un movimiento unitario de fuerzas con presencia dentro y fuera de Etiopía con el objetivo de coordinar sus actividades político-militares para poner fin al régimen etíope y garantizar el derecho a la autodeterminación, la People's Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), que en marzo de 2016 celebró su primer congreso en Asmara (Eritrea).⁴⁴ Esta reunión también pone de manifiesto la tolerancia de Eritrea con los actores armados que operan en Etiopía.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año continuaron los ataques, atentados suicidas y emboscadas por parte de al-Shabaab, que infligió pérdidas a la misión de la UA en Somalia (AMISOM) y al Ejército somalí. Durante el Ramadán, al-Shabaab, como en los últimos años, incrementó sus acciones armadas, llevando a cabo atentados con coches bomba contra instalaciones militares, de la AMISOM, edificios civiles gubernamentales y contra espacios civiles como hoteles y restaurantes, con el objetivo de desestabilizar y erosionar el proceso electoral que llevó a cabo el Gobierno Federal, y que culminó con la elección indirecta de un Parlamento Federal a finales de año. No obstante, el proceso sufrió graves acusaciones de corrupción.⁴⁵ Al-Shabaab fue expulsado de la capital en 2011, aunque el grupo ha continuado perpetrando

41. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2016.

42. Committee to Protect Journalists, "Ethiopian newspaper editor, bloggers caught in worsening crackdown", 17 de noviembre de 2016.

43. Stratford, Charles, "Ethiopia: Ex-ONLF rebels in Ogaden learn new skills", *al-Jazeera*, 31 de mayo de 2016.

44. Véase "El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias", en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).

45. Véase el resumen sobre Somalia en el capítulo 3 (Procesos de paz).

duros ataques en la ciudad. En este contexto, persistió el repliegue de al-Shabaab hacia el norte (produciéndose un incremento de los enfrentamientos en las regiones de Galmudug y Puntlandia, en el centro y noreste del país) tras la pérdida de feudos urbanos en el centro y sur del país, como consecuencia de las sucesivas ofensivas de los cuerpos de seguridad somalíes y de la AMISOM apoyados por las operaciones encubiertas de las fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, las zonas rurales siguieron estando en manos de al-Shabaab o sometidas a la amenaza de su acción. Los cuerpos de seguridad tomaron el control de las localidades cedidas por al-Shabaab, pero les resultó imposible extender este control a todo el territorio. El proyecto **Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)** contabilizó **más de 5.550 víctimas mortales como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el año 2016, de las cuales más del 60% se atribuían a los enfrentamientos entre al-Shabaab, AMISOM y las Fuerzas Armadas somalíes**, y el resto a milicias y señores de la guerra.⁴⁶

Al-Shabaab incrementó sus acciones armadas durante 2016 con el objetivo de desestabilizar el proceso electoral en Somalia

EEUU continuó llevando a cabo la creación y entrenamiento de escuadrones y comandos contrainsurgentes como las unidades Gaashan (escudo), y la UE prolongó las dos misiones de entrenamiento marítimo y militar (EUCAP Somalia y EUTM Somalia), así como la misión militar de lucha contra la piratería EUNAVFOR Somalia hasta finales de 2018. En una de las principales acciones militares del año, en marzo las Fuerzas Especiales estadounidenses llevaron a cabo un ataque con aviones tripulados y no tripulados en el que ejecutaron hasta 150 sospechosos de formar parte de al-Shabaab en Raso Camp, a 120 millas al norte de Mogadiscio, donde el grupo yihadista estaba supuestamente construyendo una base de entrenamiento. Junto a ésta, entre las acciones más destacadas, cabe señalar el ataque en enero contra la base kenyata de la AMISOM en Cell Cadde Village (al sur de Garbahaarey, en Gedo) en el que murieron 180 combatientes y miembros de la misión; y el ataque en pleno mes de Ramadán en junio contra una base militar etíope de la AMISOM en Halgan, en Hiiraan, en el que murieron 248 personas según Sudan Tribune, entre los cuales 60 miembros etíopes de la AMISOM. En octubre se produjo otro ataque de al-Shabaab en Afmadhow, en Lower Juba, en el sur del país, que fue repelido por parte de las tropas de Kenya de la AMISOM. En el ataque murieron al menos 140 combatientes del grupo armado de los 500 que participaron en la operación militar, que pretendía derrotar las tropas locales de la región de Jubalandia.

En total, ACLED atribuye más de 250 víctimas mortales a las acciones perpetradas en Somalia por

EEUU en 2016, con una creciente presencia militar en el país.⁴⁷ Entre 200 y 300 miembros de los cuerpos especiales de EEUU colaboraron con las Fuerzas Armadas somalíes y miembros de la AMISOM como Kenya y Uganda llevando a cabo una media docena de operaciones terrestres y ataques con drones al mes. Por otra parte, la mayoría de al-Shabaab siguió

fiel a al-Qaeda mientras que una pequeña facción se sometió al patronazgo de ISIS, aunque existe una cierta controversia en esta cuestión. Diversos analistas destacan el hecho de que la mayoría de miembros del grupo armado son somalíes con una agenda local, y las acciones perpetradas en el extranjero se han limitado a Kenya por su presencia en el país, de ahí que al-Shabaab haya rechazado su vinculación a ISIS. El apoyo a ISIS en el seno de al-Shabaab respondía a un fenómeno

reducido y vinculado a los combatientes extranjeros, ya que aunque puedan considerarse parte de una lucha o dinámica global, es su agenda local y su lucha contra la presencia de las tropas extranjeras la que aporta apoyos al grupo.⁴⁸ Diversas fuentes destacaron que otros actores locales estaban logrando una mayor preeminencia en las dinámicas de la violencia, ya que solo la mitad de las acciones armadas respondían a al-Shabaab y actores gubernamentales. Múltiples actores nacionales e internacionales están participando en la lucha contra al-Shabaab y las acciones violentas también involucraron a milicias de clanes y fuerzas regionales vinculadas a los nuevos estados federales. Este hecho se relacionaría con la contienda electoral y la competencia entre actores locales, regionales y nacionales en estas dinámicas de poder, que repercutirían en un incremento de la violencia hacia la población civil. Además, la descoordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad provocó nuevos avances de al-Shabaab. Etiopía decidió retirar sus tropas no encuadradas en la AMISOM sin que ni la AMISOM ni el Ejército somalí pudieran ocupar su espacio lo que provocó que al-Shabaab retomara el control de diversas localidades durante el año. El ministro de Comunicación etíope señaló que solo se habían retirado parte de las tropas etíopes no encuadradas en la misión de la UA, y dirigió la responsabilidad de esta decisión a la ausencia de apoyo internacional, tras la reciente decisión de la UE de recortar el apoyo económico a la presencia militar internacional en Somalia. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes de tropas a la AMISOM. Diversos expertos advirtieron que esta retirada podría estar conectada con la situación a nivel interno de Etiopía como consecuencia de las protestas desencadenadas por los movimientos de la comunidad oromo, lo que habría provocado el retorno de estas tropas para sofocar la movilización social interna. Kenya también manifestó su intención de retirar sus tropas de la AMISOM en 2018.

46. Véase ACLED.

47. Mazzetti, Mark, Gettleman, Jeffrey, y Schmitt, Eric, "In Somalia, U.S. Escalates a Shadow War", *The New York Times*, 16 de octubre de 2016.

48. Gafey, Conor, "Why Al-Shabab is Not Joining ISIS", *Newsweek*, 22 de enero de 2016.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

El grave clima de violencia política que atraviesa el país inició su segundo año con la persistencia de la inestabilidad y los intentos frustrados a nivel regional de promover un diálogo político entre el Gobierno y la oposición.⁴⁹ Proliferaron las ejecuciones extrajudiciales de miembros de la oposición política y de la sociedad civil, asesinatos de funcionarios y cargos políticos, y grupos armados recientemente surgidos fueron más activos. Según el centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), las cifras de víctimas mortales como consecuencia de la violencia entre abril de 2015 y abril de 2016 serían mucho más elevadas de lo que señaló la ONU en marzo de este año. ACLED estima que fallecieron 1.155 personas mientras que la ONU reduce esa cifra a 474 víctimas mortales. Esta cifra se eleva a 1.560 personas para el conjunto de los dos años (2015 y 2016), según ACLED. La UA y el Consejo de Seguridad de la ONU intentaron intervenir para reconducir la situación y el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a finales de julio a la creación de una misión policial de la ONU con un componente de 228 efectivos. Además, también instó al Gobierno a que, en coordinación con la Comisión de la UA, asegurara el despliegue de 100 observadores de derechos humanos

de la UA y 100 expertos militares de la UA, e instó al Gobierno a que prestara su plena cooperación y acceso a fin de facilitar la ejecución de su mandato. Aunque el Gobierno ya había acordado aceptar la presencia de los observadores y los expertos de la UA, su despliegue estaba siendo lento. Se celebraron manifestaciones de rechazo a la presencia de la misión de la ONU que convocaron a miles de manifestantes ante la embajada francesa, país que propuso el borrador de la resolución, y ante la embajada de Rwanda, a la que acusan de entrenar a los rebeldes. No obstante, el embajador francés en Burundi, Gerrit Van Rossum, también se pronunció en contra de la resolución y participó en la manifestación. Se estima que unas 400.000 personas huyeron de sus lugares de origen, de las cuales 270.000 personas abandonaron el país. Burundi también rechazó en diciembre de 2015 el despliegue de la misión de la UA de 5.000 soldados y amenazó con el uso de la fuerza para evitar que esta misión penetrara en el país.

En septiembre la ONU publicó un informe que acusaba al Gobierno de graves violaciones de los derechos humanos, tras nueve meses de investigación.⁵⁰ La investigación verificó 564 ejecuciones desde abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría a un tercer mandato. La misión de investigación determinó que existen patrones sistemáticos de violaciones de los derechos humanos, arrestos masivos, violaciones, desapariciones, torturas y ejecuciones de miles de personas, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional, en especial a la UA y al Consejo de Seguridad de la ONU, a hacer frente a la espiral de violencia que podría hundir en un conflicto armado la región entera. La mayoría de las víctimas eran personas opuestas (o percibidas como tales) al tercer mandato de Nkurunziza o miembros de los partidos de la oposición. A raíz de la investigación iniciada por la CPI a partir de indicios sobre un posible genocidio en el país, Burundi decidió en octubre su retirada de la CPI, que se hará efectiva en octubre de 2017.⁵¹

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

49. Véase el resumen sobre Burundi en el capítulo 3 (Procesos de paz).

50. United Nations Independent Investigation in Burundi (UNIIB), *Burundi: UN investigation urges strong action in light of gross, widespread and systemic human rights violations*, OHCHR, 20 de septiembre de 2016.

51. Véase "La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2017).

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Dlotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“anti balaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año se produjo un deterioro de la situación en el país. Aunque las elecciones legislativas del 30 de diciembre de 2015 fueron anuladas por las numerosas irregularidades detectadas, la segunda vuelta de las presidenciales tuvo lugar el 14 de febrero de 2016 coincidiendo con la primera vuelta de los comicios legislativos. El ex primer ministro Faustin-Archange Touadéra derrotó al ex primer ministro Anicet Georges Dologuélé. En abril asumió el poder y se puso fin a la fase de transición y a la estructura de mediación internacional vigente desde 2013. La creación de un Grupo de Apoyo Internacional en sustitución del Grupo de Contacto Internacional sobre la RCA simbolizó el nuevo marco para la colaboración internacional, al que se sumó China.⁵² A pesar de los primeros logros del período posterior a la transición, como la puesta en marcha del programa nacional de desarme, desmovilización, repatriación

Amplias regiones de la República Centroafricana siguieron bajo el completo control de los grupos armados, reacios a aceptar participar en el proceso de desarme

y reintegración de grupos armados, el Gobierno no pudo hacer frente al deterioro de la situación de la seguridad observado desde junio. **Si bien la violencia entre las facciones ex-Séléka, por un lado, y entre las milicias antibalaka y las ex-Séléka, por el otro, en principio parecía localizada e impulsada por las luchas internas por el poder y la competencia por el territorio, tal y como señaló el Grupo de Expertos para la RCA,⁵³ los incidentes se agravaron y generalizaron en los meses de septiembre y octubre de 2016.** Amplias regiones del país siguieron bajo el completo control de los grupos armados, reacios a aceptar participar en el proceso de desarme. Los incidentes violentos ocurridos en Bangui y el interior del país están cada vez más interconectados y en las luchas se entremezclan las agendas políticas, según destacó el Grupo de Expertos. Un violento éxodo ocurrido el 12 de agosto de 2016 de milicias ex-Séléka del barrio PK5 de Bangui, que incluyó a Abdoulaye Hissène y a Haroun Gaye, objeto de sanciones, dio lugar a una persecución que fue dirigida por antibalakas, pero con el apoyo tácito de algunos políticos de Bangui. A mediados de septiembre, combatientes antibalaka de Bangui se desplazaron para enfrentarse a actores de la antigua coalición Séléka que cometían actos de violencia al sur de Kaga-Bandoro (en el interior del país), donde la violencia se intensificó a mediados de octubre cuando combatientes ex-Séléka atacaron el campamento de desplazados internos de la ciudad, causando al menos la muerte de 50 personas.⁵⁴ En ese mismo mes Francia culminó el fin de la Operación Sangaris y la retirada de casi todo el contingente militar. Un centenar de militares se integraron en la misión europea EUTM RCA.

Esos actos de violencia en Kaga-Bandoro cometidos por facciones ex-Séléka y sus esfuerzos para reunificarse en Bria reactivaron a grupos antibalaka en Bangui, algunos de ellos impulsados por el regreso de Jean-François Bozizé, ex ministro de Defensa e hijo del ex presidente François Bozizé, objeto de sanciones. En octubre se celebró en Bria una reunión en la que participó Nouredine Adam, líder del Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), que regresó en abril al país.⁵⁵ Adam, con base en Kaga-Bandoro, pretendía reunificar a los grupos de la antigua coalición Séléka, aunque no prosperó, ya que el grupo Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC) de Mahamat Al-Khatim y la Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) de Ali Darrassa se negaron a unir sus fuerzas

52. Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 3 (Procesos de paz).

53. Grupo de Expertos sobre la RCA, “Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana, cuyo mandato se prorrogó en la resolución 2262 (2016) del Consejo de Seguridad”, Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana, S/2016/1032, 6 de diciembre de 2016.

54. Ngoulou, Fridolin, “Centrafrique: Kaga-Bandoro, future capitale de la République du Logone?”, RJDH Centrafrique - Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme, 21 de octubre de 2016.

55. Vincent Duhem, “Centrafrique: que faire face au retour de Nouredine Adam?”, *Jeune Afrique*, 10 de junio de 2016.

a Nouredine Adam, e incluso hubo informaciones de contactos entre el MPC y la UPC. Posteriormente el FPRC y la UPC se enfrentaron en Bria a finales de noviembre causando la muerte de 85 rebeldes y civiles y el desplazamiento forzado de 11.000 personas. La MINUSCA fue objeto de críticas por su incapacidad para contener a los grupos armados, y el Gobierno solicitó el levantamiento del embargo de armas para rearmar a las Fuerzas Armadas Centrafricanas (FACA) con el argumento de proteger a los civiles. En el centro del país, la UPC amplió aún más su zona de control, según el Grupo de Expertos, avanzando hacia el sur y el este desde su feudo en Bambari, para controlar importantes zonas de extracción de diamantes en torno a Nzako y rutas de tráfico de armas que entran en el país desde la RDC. Las diferentes milicias de autodefensa de Révolution et Justice estuvieron divididas en torno a su liderazgo. En el norte, el tráfico de armas, en beneficio del FPRC, atraviesa Am Dafok y Tissi, ciudad que se extiende a ambos lados de la frontera entre RCA y Chad. En el este de RCA, el grupo armado de origen ugandés LRA llevó a cabo numerosos secuestros de civiles.⁵⁶ Cerca de medio millón de personas seguían desplazadas en el interior del país al finalizar el año.

La situación política en Bangui, aunque por lo general en calma, se vio afectada por manifestaciones violentas el 24 de octubre. Posteriormente, el 28 de octubre, el presidente se reunió con representantes de la sociedad civil, los partidos políticos, el sector privado y la plataforma religiosa. En la reunión, el presidente hizo un llamamiento en favor del diálogo político y para que la ciudadanía reconociera que las fuerzas militares y de seguridad eran incapaces de desempeñar plenamente sus responsabilidades, y destacó la necesidad de una amplia reforma del sector de la seguridad. A finales de noviembre el partido político Kwa Na Kwa publicó una declaración del ex presidente François Bozizé en la que éste anunció su intención de regresar al país para entablar un diálogo inclusivo y lograr la reconciliación. Cabe destacar la celebración de la conferencia de donantes de Bruselas en la que se puso de manifiesto el compromiso de la comunidad internacional con el país, al prometerse 2.200 millones de dólares en apoyo del Plan Nacional para la Recuperación y la Consolidación de la Paz, lo que suponen alrededor del 70% de los fondos necesarios para los cinco años de duración del plan. Por otra parte, el 9 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la paridad de género para lograr una cuota del 35% para las mujeres en las estructuras de adopción de decisiones. Los días 28 y 29 de diciembre, aprobó el presupuesto nacional para 2017, que ascendía a 237.000 millones de francos CFA (384.518.280 dólares).

En RDC (este) la insurgencia hutu rwandesa se debilitó ya que las FDLR vivieron tensiones internas que acabaron provocando la división del grupo y la creación de una escisión, el CNDR

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La situación de violencia en el este del país se vio eclipsada por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016, el aplazamiento *de facto* de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato presidencial, en contra de lo previsto en la Constitución, lo que provocó un grave clima de tensión.⁵⁷ Así, la situación de inseguridad persistió en el este de la RDC aunque se redujo la intensidad de la violencia, según remarcaron algunos analistas. **Los diferentes grupos armados cometieron acciones periódicas de saqueo y ataques contra la población civil y las Fuerzas Armadas congoleesas (FARDC), apoyadas por la MONUSCO, llevaron a cabo diversas operaciones para intentar desarticular las diferentes insurgencias**, lo que provocó desplazamientos de miles de personas durante el año. Tal y como señaló el último informe del secretario general de

56. Véase el resumen sobre África Central (LRA) en el capítulo 2 (Tensiones).

57. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

la ONU sobre la misión en el país, la continuidad del apoyo de la MONUSCO a la RDC para hacer frente a la situación de inseguridad siguió siendo imprescindible. Además del conflicto armado con el grupo de origen ugandés ADF asentado en el territorio de Beni (zona norte de la provincia de Kivu Norte),⁵⁸ continuaron los ataques contra la población civil en la provincia nororiental de Ituri por parte del grupo armado Forces de la Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI), las actividades de las diferentes milicias Mai Mai en Kivu Norte y en Kivu Sur de saqueo y extorsión de la población civil así como las acciones de las FARDC y de la MONUSCO para frenar sus ataques, y las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA en las provincias de Haut Uélé y Bas Uélé (noreste).

El grupo armado de origen rwandés Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) y sus aliados (las milicias Nyatura) también siguieron activos en las provincias de Kivu Norte y Sur, a pesar de la continuación de la Operación Sukola II, dirigida por las FARDC, para neutralizarlas, y prosiguieron los informes sobre ataques, secuestros y exacciones contra la población civil y exigencias de pago de tasas en las zonas mineras. **El grupo, sin embargo, se ha visto seriamente debilitado como consecuencia de tensiones internas (vinculadas, entre otras cuestiones, a las posturas en torno al registro biométrico de los refugiados rwandeses), que condujeron a su división.** Se escindió parte de su estructura de mando y combatientes en mayo tras la creación del Conseil National pour la Renovation et la Démocratie-Ubwiyunge (CNRD),⁵⁹ encabezado por el coronel y vicepresidente del grupo, Laurent Ndagijimana, alias Wilson Irategeka, y las FDLR, que siguen lideradas por Gaston Nyamuremye (alias Victor Byiringiro). Las FDLR, que anteriormente contaban con entre 1.400 y 1.600 combatientes, han perdido entre un tercio y la mitad de sus miembros tras la división, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU, y se vieron casi exclusivamente limitadas al territorio de Rutshuru, en Kivu Norte.⁶⁰ El CNRD arrastró a unos 46 oficiales y a todo el sector operacional de Kivu Sur, aunque cuenta con presencia en Kivu Norte, y anunció que procedería a la repatriación de los refugiados rwandeses y los combatientes de la RDC, pero aún no ha adoptado medidas para ejecutar esos planes. Esta división responde a la presión militar ejercida y a una situación de estancamiento del conflicto y de agotamiento de las nuevas generaciones que han ido adoptando posturas más políticas y pragmáticas diferentes de la vieja guardia, como el alejamiento de una de las figuras más controvertidas, el general Mudacumura, buscado por crímenes de genocidio en Rwanda y crímenes de guerra en RDC. Aunque pretende desmarcarse de las FDLR, el grupo mantendría posiciones políticas similares, como es el retorno pactado y en condiciones dignas a Rwanda y el inicio de un diálogo político con

Kigali, a lo que Rwanda se niega rotundamente. Según el Grupo de Expertos, Ndagijimana fue también uno de los principales impulsores del proceso de desarme voluntario de las FDLR en 2013-2014.⁶¹ Dicha división desembocó en confrontaciones violentas entre ambas partes en el territorio de Rutshuru. Aunque los principales líderes de las FDLR objeto de sanciones, Mudacumura, Nyamuremye y Ntawunguka siguieron prófugos, varios oficiales fueron capturados durante el año. Entre marzo y noviembre murieron 99 combatientes de las FDLR, 137 fueron capturados y 419 desmovilizados.

Según diversas fuentes, tal y como destaca el informe del secretario general de la ONU de octubre, las tensiones entre comunidades siguen siendo una fuente de violencia cada vez mayor en Kivu Norte. La continua actividad de las FDLR, la mayor presencia de grupos opositores Mai Mai y las luchas de carácter intercomunitario agravaron la situación y contribuyeron a un deterioro general de las condiciones de seguridad y a más desplazamientos de población. En el territorio de Fizi, en Kivu Sur, también se produjeron enfrentamientos entre actores armados procedentes de Burundi (principalmente los sectores no desmovilizados de las FNL que se están reorganizando para llevar a cabo acciones en Burundi) y las FARDC. En los territorios de Fizi, Mwenga, Shabunda y Uvira, se produjeron enfrentamientos entre las FARDC y milicias Mai Mai como Raia Mutomboki. Cabe destacar la rendición en octubre del líder de la milicia Mai Mai Kata Katanga, Gédéon Kyungu Mutanga, junto con 129 de sus combatientes, entregando una cantidad considerable de armas. Parte del grupo se reintegró en las FARDC. El grupo ha sido responsable de numerosos ataques contra civiles durante los últimos años, y su dirigente fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y encarcelado antes de que se fugara en 2011. **El informe del Grupo de Expertos determinó en diciembre que el oro siguió siendo el mineral más utilizado para financiar a los actores armados y redes delictivas, y prosiguió su explotación ilegal, comercio y tasación por parte de éstos, tanto las FARDC como las insurgencias y milicias Mai Mai, a veces en colaboración con compañías privadas.** Un acontecimiento positivo fue el inicio de las investigaciones de la implicación en el comercio de recursos naturales de algunos oficiales militares congoleños que anteriormente habían sido mencionados en los informes del Grupo de Expertos en razón de dicha injerencia. Existen dificultades para lograr la plena aplicación de la diligencia debida en el sector del estaño, el tántalo y el tungsteno y sus impactos en el sector de la minería pueden llevar a efectos no deseados, según han señalado diversos analistas. Si bien los procesos de trazabilidad y certificación se están ampliando, los agentes armados han penetrado ocasionalmente en emplazamientos certificados como libres de conflicto.

58. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.

59. RFI, "RDC-Rwanda: scission au sein des FDLR", *Radio France Internationale*, 3 de junio de 2016.

60. Grupo de Expertos sobre la RDC, "Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) del Consejo de Seguridad", Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, S/2016/1102, 28 de diciembre de 2016.

61. Véase *Alerta 2015! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, 2015, Barcelona, Icaria.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

El conflicto armado en el este del país en el que participa el grupo armado de origen ugandés ADF continuó en paralelo a la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y el aplazamiento *de facto* de las elecciones nacionales y la preocupación ante la posibilidad de que Kabila intentara mantenerse en el poder por un tercer mandato, en contra de lo previsto en la Constitución.⁶² El grupo armado de origen ugandés ADF continuó operando en el territorio de Beni, situado en la zona norte de la provincia de Kivu Norte, en el este del país, y reclutando a nacionales de la RDC, Rwanda y Uganda en 2016, y prosiguieron las matanzas de civiles por parte de las ADF. En consecuencia, se produjo una oleada de rechazo y protestas de la población civil ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación. **Desde 2014 más de 650 personas han sido ejecutadas en la localidad de Beni y sus alrededores.** Según fuentes de la ONU, las ADF operaban en localidades dispares y con un grado limitado de mando y control centrales, aunque el líder máximo es el comandante Seka Baluku. La operación militar Sukola I, con el renovado apoyo de la MONUSCO y su brigada de intervención, ejerció presión durante el año sobre el grupo de Baluku, en particular mediante

operaciones destinadas a despejar temporalmente su conjunto principal de bases, denominada Madina II. En mayo y octubre se capturaron diversas bases en Madina II, pero la posterior retirada de las Fuerzas Armadas congolese (FARDC) de la zona provocó que en octubre las ADF regresaran a los campamentos. Las ADF siguieron reclutando, adiestrando y operando en la densa zona boscosa al este del eje de comunicación Eringeti-Beni-Butembo, creando una grave situación de inseguridad para los civiles en la zona.

Después de haber dado apoyo a las autoridades nacionales para lograr la derrota militar del M23 de marzo a noviembre de 2013, la MONUSCO, en particular su Brigada de Intervención, se ha centrado en las ADF en Kivu Norte, en apoyo de las FARDC. Las operaciones conjuntas de ambas fuerzas han causado un deterioro considerable a las actividades del grupo armado y han obligado a sus combatientes a recurrir a nuevas técnicas para evitar el enfrentamiento. Tras el acuerdo técnico firmado por el Gobierno y la MONUSCO el 28 de enero de 2016, el apoyo de la MONUSCO a las operaciones de las FARDC en el sector operacional Sukola I fue más allá de las contribuciones logísticas y de inteligencia observadas en 2015. La brigada de intervención y, en algunos casos, elementos de la brigada de Kivu Norte, participaron directamente en las operaciones, aportando contingentes y fuerzas especiales, artillería y activos aéreos. Aunque debilitadas, las ADF prosiguieron sus ataques brutales contra los civiles, las FARDC y la MONUSCO. La misión prestó apoyo a las operaciones de las FARDC atacando posiciones de las ADF con helicópteros de combate y fuego de artillería en varias ocasiones, lo que dio lugar a un número aún no determinado de bajas de las ADF. Se identificaron objetivos concretos mediante sistemas aéreos de vigilancia no tripulados, en coordinación con las FARDC, y las ADF tuvieron importantes pérdidas en su antiguo bastión conocido como el “triángulo”, en la zona de Abyalose y cerca de Mayi-Moya. La MONUSCO se convirtió en objetivo de las ADF, sufriendo diversos ataques durante el año, como en agosto cuando la base de la MONUSCO en Semliki sufrió ataques con granadas. Como consecuencia de la continua presión ejercida por las operaciones, elementos de las ADF siguieron desplazándose hacia el norte, concretamente, hacia la provincia de Ituri. En agosto las ADF cometieron la peor masacre desde 2014, según destacó la población civil de la zona y los medios de comunicación locales. El grupo ejecutó a más de 50 personas, entre hombres, mujeres y menores, en la localidad de Rwangoma, en el territorio de Beni. El ataque tuvo lugar tres días después de la vista del presidente Joseph Kabila a Goma, la capital de Kivu Norte. El 4 de agosto Kabila se reunió con su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, para discutir una estrategia de combate contra el grupo ADF. A raíz de este ataque, se produjeron protestas por parte de la población local y de la sociedad civil y la oposición política contra el Gobierno y la MONUSCO

62. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación. El 17 de agosto se produjo una marcha de unas 2.000 personas desde Butembo a Beni donde los manifestantes se enfrentaron a la Policía. Los ataques dieron lugar a actos de venganza popular y a acciones de represalia de las FARDC contra civiles acusados de colaborar con el grupo armado.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, janjaweed, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

El centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) registró **durante el año un total de 1.913 muertes producidas en el marco del conflicto armado en la región de Darfur**. Estas cifras, unidas a las registradas en el conflicto armado que se desarrolla en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, con 1.612 muertos en 2016, mantienen

–según los datos del ACLED– a Sudán como el cuarto país más conflictivo en el continente africano. Como viene siendo habitual en la región, los mayores enfrentamientos se registraron durante el primer semestre del año, concretamente en los meses de enero y febrero (517 muertos) y durante el mes de abril, donde se registraron 421 víctimas mortales, reduciéndose significativamente en el segundo semestre del año a causa de las restricciones a la movilidad que ocasiona la temporada de lluvias. A su vez, la reapertura de negociaciones y el decreto de cese al fuego también contribuyeron al descenso de los niveles de violencia.⁶³ El año empezó con la extensión del cese al fuego por parte del Gobierno en la región de Darfur, aunque ello no impidió la continuación de los combates entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas rebeldes del Movimiento de Liberación de Sudán Abdel Wahid al-Nur (SLA-AW), concentrándose en el área de Jebel Marra, en la región de Darfur Central. A finales del mes de enero, la misión híbrida de la ONU y la UA, la UNAMID, informó que cerca de 10.000 personas se habían visto obligadas a desplazarse como consecuencia del incremento de la violencia en Jebel Marra, cifras que siguieron aumentando considerablemente en los meses posteriores alcanzando los 102.700 desplazados internos a principios de marzo, y en octubre la horquilla se disparó hasta los 160.000-195.000, según diversas fuentes recogidas por OCHA.⁶⁴ A finales de año, datos recopilados por OCHA registraban en 97.481 personas los nuevos desplazamientos internos en Darfur, a los que habría que añadir otras 99.435 personas desplazadas en situación de verificación.⁶⁵ Según registros de ACLED, los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y rebeldes producidos en la primera parte del año en Jebel Marra alcanzaron un nivel no visto desde 1997.⁶⁶

En el contexto de la ofensiva militar contra Jebel Marra, se celebró entre los días 11 y 13 de abril el referéndum en Darfur para decidir su división administrativa: mantener la actual fórmula de cinco estados o reunificarlos en uno solo. Los grupos armados rebeldes darfuríes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y las facciones del Movimiento de Liberación de Sudán lideradas por Minni Minawi (SLA-MM) y Abdel Wahid al-Nur (SLA-AW) realizaron un llamamiento a boicotear el referéndum del Gobierno, lo que se saldó con una baja participación en el mismo. El día 23 de abril, la Comisión para el Referéndum en Darfur hizo públicos los resultados, los cuales mostraron una mayoría del 97,72% a favor de mantener la fórmula administrativa actual.⁶⁷ Un día después de la celebración del

63. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016). Véase el resumen sobre Sudán (Dafur) en el capítulo 3 (Procesos de paz)

64. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA Sudan, "Jebel Marra Crisis Fact Sheet", Issue 8, 1 octubre de 2016.

65. OCHA, "Sudan: 2016 New Displacements and Affected People in Darfur as of 31 december 2016", diciembre de 2016.

66. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) "Sudan – December 2016 Update", Real Time Analysis of Political Violence across Africa, enero de 2017.

67. Los datos presentados por el Gobierno dieron cuenta de 3.081.976 votos (97,72%) a favor de la actual división administrativa, frente a 71.920 votos (2,28%) a favor de la transformación de Darfur en una unidad territorial. El porcentaje de participación fue del 72,9%, de un censo de 3.535.281 personas. Según Naciones Unidas la población de Darfur se estima en 6,2 millones de personas.

referéndum, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su intención de decretar un cese al fuego durante seis meses en las tres zonas, e instó a los mediadores de la UA a discutir con el Gobierno la viabilidad de su implementación. La celebración del referéndum significó para el Gobierno de Sudán la conclusión de manera oficial de la hoja de ruta prevista en el Acuerdo de Paz de Doha, firmado en julio de 2011, que equivalía a afirmar el fin de la guerra en la región. En esa lógica de fin del conflicto, el Gobierno de Sudán anunció el 17 de junio un cese el fuego unilateral por cuatro meses en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul, no aplicable a Darfur, debido a que para el Gobierno ya no existía guerra en la zona, y a la vez presionó para la no renovación del mandato de la UNAMID, que concluía a finales de junio de 2016, debido a que su presencia ya no era necesaria en el supuesto nuevo escenario de postconflicto. Sin embargo, el 29 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo recomendaciones de informes de la ONU y la UA, decidió prorrogar por un año más el mandato de la misión, resolución que fue muy bien recibida por los movimientos armados de oposición en Darfur.

Durante el mes de julio, los combates se mantuvieron en Jebel Marra, y tan sólo el día 22, en un enfrentamiento entre el SLA-AW y las fuerzas de seguridad sudanesas, resultaron muertos 170 militares y cuatro rebeldes, ganando las fuerzas irregulares el control de Torentowra. Las hostilidades decrecieron significativamente durante el mes de agosto, y posteriormente, el 31 de octubre entró en vigor el cese al fuego unilateral decretado por un periodo de seis meses por parte de los grupos armados darfuríes SLA-MM y JEM facción Gibril. La UNAMID dio la bienvenida al cese de las hostilidades e invitó a la facción del SLA de Abdul Wahid al-Nur (SLA-AW) a unirse al cese al fuego para avanzar hacia la construcción de la paz en Darfur. En otro orden de aspectos, durante el mes de septiembre, la ONG Amnistía Internacional hizo público un informe en el que denunció el uso de ataques químicos por parte del Gobierno de Sudán en Darfur, específicamente en Jebel Marra, afectando a 171 comunidades.⁶⁸ Por medio de imágenes satelitales, testimonios de supervivientes y fotos, Amnistía Internacional documentó crímenes de guerra en al menos 30 ataques químicos producidos durante el año, estimando en 200 y 250 las personas que pudieron haber perdido la vida como resultado de la exposición a agentes químicos, muchas de ellas menores. Los ataques se produjeron como parte de la campaña militar contra el SLA-AW, aunque el Gobierno sudanés negó las acusaciones.

La ofensiva militar sudanesa en Jebel Marra (Darfur) generó una grave crisis de desplazamiento forzado interno

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)

Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Al igual que en años precedentes y a la par de lo que sucede en el conflicto armado en Darfur, la violencia en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul varió en función de la temporada, siendo mucho más activa durante el primer semestre del año y reduciéndose con la llegada de la temporada de lluvias, que dificulta los desplazamientos, durante el segundo periodo del año.

En esta lógica, los meses de febrero a abril, y según datos proporcionados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), fueron los más violentos, registrando un total de 1.172 víctimas mortales. El balance general de **víctimas mortales producidas durante el año en las regiones del Kordofán Sur y de Nilo Azul, ascendió a 1.612 personas**, que si bien son inferiores a las producidas en el conflicto de

Darfur, donde se registraron 1.913 muertes, la tendencia en la región es de un aumento de la violencia.⁶⁹ De manera similar a lo acontecido en la vecina región de Darfur, la extensión por parte del Gobierno del cese al fuego a principios de año no tuvo efectos reales sobre el terreno, registrándose enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes del SPLM-N en las conocidas como las “Dos Áreas” (Kordofán Sur y Nilo Azul). El día 20 de febrero se produjo el peor acontecimiento del año, cuando en un enfrentamiento entre soldados y fuerzas del SPLM-N en Kilgo, Nilo Azul, 200 soldados perdieron la vida, según informaron fuentes rebeldes sin que el

68. Amnesty International, “Scorched Earth, Poisoned Air”, septiembre de 2016.

69. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).

Gobierno confirmara las bajas. En otro enfrentamiento registrado en Abri, Kordofán Sur, y también durante el mes de febrero, otros 60 soldados y siete rebeldes murieron. En total, ACLED registró **378 muertes solamente durante el mes de febrero, convirtiéndose en el segundo mes más mortífero del año, sólo por detrás de abril, que registró cerca de medio millar de fallecidos** en enfrentamientos armados. Precisamente durante el mes de abril, el día 24, la coalición de movimientos armados de Sudán, el Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que integra a grupos de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, anunció su voluntad de un cese al fuego por un periodo de seis meses, solicitando al equipo mediador de la UA discutir con el Gobierno su implementación. Si bien durante el mes de mayo persistieron los combates en la región, el 17 de junio el Gobierno anunció un cese al fuego unilateral por cuatro meses en Kordofán Sur y Nilo Azul, con la voluntad de permitir que los movimientos rebeldes que no son signatarios del Documento de Doha para la Paz, se unieran al proceso de paz en Sudán. Sin embargo, durante el mes de julio, el SPLM-N acusó al Gobierno de no respetar el cese al fuego. Los días 10 y 11 de agosto, Gobierno y rebeldes mantuvieron reuniones y trataron sin éxito de acordar una agenda para el cese de hostilidades. El 9 de septiembre, nuevamente el SPLM-N volvió a acusar al Ejército de violar el cese al fuego en Kordofán Sur. Sin acuerdos sobre puntos importantes, como la facilitación del acceso de la ayuda humanitaria, el 10 de octubre, una semana antes de concluir el periodo de cese al fuego decretado en junio, el Gobierno volvió a ampliarlo hasta finales de año, mientras se mantuvieron negociaciones bilaterales. Por otro lado, el 23 de noviembre, el SPLM-N firmó en Ginebra un Plan de Acción con las Naciones Unidas para poner fin y prevenir el reclutamiento y el uso de niños en conflicto. El SPLM-N ya se había convertido en el primer grupo armado no estatal firmante de la Ley de Protección Infantil en junio de 2015.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

A medida que avanzó el año el conflicto armado en Sudán del Sur se fue intensificando como consecuencia directa de la falta de compromisos en la implementación de las cláusulas previstas en el acuerdo de paz firmado por las partes en agosto de 2015.⁷⁰ Los datos presentados por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) dan cuenta de **3.305 muertes registradas durante el 2016 en el país, de las cuales el 70,5% se debieron a enfrentamientos dominados por el conflicto armado entre el Gobierno y el SPLA-IO**, correspondiendo el resto a muertes en enfrentamientos producidos por milicias étnicas y comunales, principalmente de la milicia murle en el estado de Jonglei.⁷¹ Ya desde principios de año, la fragilidad del acuerdo alcanzado se manifestó en diferentes episodios armados que violaban el alto al fuego acordado y que presagiaban la intensificación de las tensiones y la vuelta paulatina a las hostilidades. El decreto aprobado por el presidente Salva Kiir, sobre la nueva distribución administrativa del país, que pasaría de los diez estados a los 28, anunciado el 2 de octubre del 2015, aumentó el descontento y generó la emergencia nuevos actores armados que desconocieron el acuerdo de paz y se opusieron a la división administrativa decidida de forma unilateral.⁷² Durante el mes de febrero, en uno de los acontecimientos más graves producido durante el primer semestre del año, un enfrentamiento entre grupos armados dinkas y shilluks en un campamento de protección de desplazados internos de la ONU en Malakal, costó la vida al menos a 30 personas y dejó otras 123 heridas. Diferentes organismos acusaron al Ejército de participar activamente en la masacre. Este hecho generó muchas

70. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 3 (Procesos de paz).

71. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Dataset ACLED Version 7 (1997 – 2016).

72. Escola de Cultura de Pau, "Sudán del Sur: un acuerdo de paz muy frágil", Escenarios de riesgo para 2016, *Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria Editorial.

críticas a la misión de la ONU en el país, la UNMISS, por la falta de protección a la población civil. Durante el mes de junio, el portavoz del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU aceptó la responsabilidad del organismo por su falta de respuesta rápida durante la masacre. Posteriormente, el 25 de junio, se produjo otra gran crisis cuando un grupo armado atacó y capturó la ciudad de Wau, en el estado de Western Bahr el Ghazal. El ataque, que conllevó la declaración del estado de emergencia en la zona, dejó al menos 43 personas muertas y alrededor de 120.000 personas desplazadas. Si bien la autoría no quedó clara, un miembro de alto rango del SPLA-IO en Bahr el Ghazal admitió la participación de sus tropas contra las fuerzas gubernamentales al sur de la ciudad de Wau. El Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia del Cese al Fuego y Acuerdos de Transición sobre Seguridad (CTSAMM por sus siglas en inglés) acusó en diferentes ocasiones a las fuerzas del SPLA, leales al presidente Kiir, de no cooperar y bloquear a los equipos encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y la implementación de las medidas de seguridad. Paralelamente al mantenimiento de choques y hostilidades, se produjeron algunos avances en la implementación del acuerdo de paz. En febrero, se dio un paso importante cuando el presidente Salva Kiir nombró a Riek Machar, líder del SPLA-IO, primer vicepresidente del país. El Gobierno de Transición de Unidad Nacional (TGoNU), que debería de haberse formado a finales de noviembre de 2015, finalmente fue constituido el 28 de abril, dos días después de la llegada de Machar a la capital, Juba. Sin embargo, y a pesar de los avances en la implementación de estas importantes cláusulas del acuerdo de paz, las tensiones se mantuvieron y estallaron definitivamente durante el segundo semestre del año.

En el mes de julio se produjeron los peores hechos que conllevaron el aumento de la violencia y la vuelta al escenario de guerra. A principios de mes se desataron graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas leales a Salva Kiir, y las fuerzas del SPLA-IO del vicepresidente Riek Machar, en la capital del país, Juba. Los enfrentamientos –que comenzaron el día 7 frente al palacio presidencial y concluyeron el día 11, después de fuertes presiones de la IGAD, la ONU, la UA y EEUU– causaron, según el parte oficial facilitado por el ministro de Salud, un balance de alrededor de 270 muertos, entre ellos, 44 soldados, cinco policías y 190 combatientes supuestamente miembros del SPLA-IO. Además, 34 soldados del gobierno y 27 civiles resultaron heridos, aunque otras fuentes aumentaban el número de muertos hasta el medio millar. Entre los fallecidos también se encontraban cuatro soldados de la UNMISS (dos chinos y dos rwandeses). Machar y las fuerzas del SPLA-IO, que habían llegado a Juba unos meses antes, abandonaron la capital, afirmando que no volverían hasta que una fuerza regional se desplegara

Los enfrentamientos de julio en Juba acabaron con el recién creado Gobierno de Transición y Unidad Nacional en Sudán del Sur

en ella para garantizar su protección. Ban Ki-moon, secretario general de ONU, solicitó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la imposición de un embargo de armas, mientras que la IGAD exigió a ambos bandos que sus fuerzas armadas abandonasen Juba para ser reemplazadas por una fuerza regional de protección, medida que fue respaldada en cumbre extraordinaria de la UA celebrada en Kigali, donde el organismo acordó el despliegue de tropas regionales provenientes de Uganda, Kenya, Sudán, Rwanda y Etiopía. El 12 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU, si bien no impuso el embargo de armas, sí autorizó el despliegue de una fuerza de 4.000 efectivos, que se unirían a los ya 12.000 efectivos que componen la UNMISS, para garantizar la paz en la capital de Sudán del Sur, con la novedad de que en su mandato podrán hacer uso de la fuerza para protección de la población civil. El Gobierno de Salva Kiir se negó en un primer momento a su despliegue, pero en el mes de noviembre finalmente afirmó que lo aceptaría. Al finalizar el año, el 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad volvió a rechazar la aprobación de una resolución presentada por EEUU en la cual se solicitaba el embargo de armas al país, así como la aplicación de sanciones a algunos líderes sudaneses de ambos bandos: el ex primer vicepresidente, Riek Machar, el jefe del Ejército del SPLA, Paul Malong, y el ministro de Información, Michael Makuei.

La crisis de Juba también significó un paso atrás en la transición política. El 25 de julio, Salva Kiir destituyó a Machar como primer vicepresidente y lo sustituyó por el hasta el entonces ministro de Minería, Taban Deng Gai. Esta decisión dividió al SPLA-IO y generó nuevos enfrentamientos entre el SPLA y el SPLA-IO en diferentes partes del país, como los producidos en Leer, Wau, Ngo Baggari o Juba. A raíz de la crisis de julio, las rebeliones se extendieron a través del país. **Riek Machar emitió el 25 septiembre un comunicado desde Jartum, donde hizo un llamamiento al retorno de la guerra contra el Gobierno, declarando colapsado el Acuerdo de Paz.** Lam Akol, veterano disidente sur sudanés, declaró también la guerra al Gobierno a través de su organización National Democratic Movement. Otro movimiento armado, el South Sudan Democratic Movement-Cobra Faction (SSDM-CF), originario de la región de Greater Upper Nile, anunció la vuelta a la lucha armada, lo que auspició que más de 5.000 soldados del grupo étnico murle comandados por el general John Welarum en el estado de Borna, desertasen de las filas del Ejército nacional (SPLA) y se unieran a la insurgencia del SSDM-CF. La seguridad se deterioró significativamente en las regiones de Ecuatoria. Durante el mes de octubre, al menos 51 civiles fueron asesinados en varias emboscadas realizadas en carreteras, dirigidas contra población dinka, en respuesta a las agresiones del Gobierno en la región. El deterioro de la situación de seguridad en Sudán del Sur hizo que algunas voces, como la de Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU para

la prevención de genocidio, alertasen sobre el riesgo de amenaza de genocidio en el país, sobre todo en la región meridional de Ecuatoria. La ONU también alertó de que más del **10% de la población de Sudán del Sur, alrededor de 1,3 millones de personas, se han visto obligados a buscar refugio fuera del país por la violencia, mientras que otras 261.541 personas, sobre todo provenientes de la vecina Sudán, se encontraban refugiadas en Sudán del Sur. Además, alrededor de 1,83 millones más vivían desplazados dentro del país, de los cuales, 212.071 se encontraban en bases de mantenimiento de la paz de la ONU en noviembre de 2016.** También las agencias humanitarias informaron de que el 40% de los habitantes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria crítica.⁷³

El 25 de septiembre Riek Machar comunicó la vuelta a la lucha armada y el colapso del acuerdo de paz en Sudán del Sur

personas en 2016 y que se manifestó en diversos hechos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista (o personas sospechosas de pertenecer a estas organizaciones). Según el balance

del Ejército argelino, hasta diciembre de 2016 se había logrado “neutralizar” a 350 presuntos combatientes, de los cuales 125 habían sido abatidos y otros 225 arrestados en distintas operaciones. Este balance oficial no incluye el número de bajas entre las fuerzas de seguridad. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la cifra total de fallecidos por este tipo de violencia en Argelia ascendería a

150 personas en casi un centenar de incidentes. Las cifras de mortalidad fueron, por tanto, similares a las de años anteriores, en los que también se contabilizaron en torno a un centenar de víctimas mortales. Los hechos de violencia se produjeron en diversas localidades, entre ellas varias provincias del norte como Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Skikda, Medea o Ain Defla, pero también en la provincia de El-Oued (centro-este, fronteriza con Túnez). Uno de los incidentes más destacados del año tuvo lugar en esta última región, en abril, cuando el Ejército dio muerte a 14 presuntos combatientes cerca de la localidad de Kouinine y confiscó un depósito de armas. Un hecho que no causó víctimas mortales, pero que despertó especial preocupación en las autoridades argelinas, fue el ataque a una planta de gas natural propiedad de la compañía británica British Petroleum, la noruega Statoil y la argelina Sonatrach en la localidad de Krechba, en la desértica región de Ain Salah (sur), en una acción reivindicada por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Tras la experiencia de la toma de rehenes en la planta de In Amenas en 2013 –que acabó con la muerte de 70 personas– el Gobierno había reforzado la vigilancia de las plantas de petróleo y de gas y, después de la acción en Krechba, anunció nuevas medidas de seguridad, incluyendo el despliegue adicional de 5.000 soldados. En las semanas previas al ataque, AQMI había reivindicado otras acciones con numerosas víctimas mortales en Côte d’Ivoire y Burkina Faso,⁷⁴ confirmando que la organización mantiene sus objetivos en Argelia, pero también sus acciones de ámbito regional. A lo largo de 2016 también surgieron informaciones sobre la presencia de ISIS en el país y su pulso con AQMI. ISIS continuó lanzando amenazas contra Argelia y, según la prensa local, contaría con un centenar de seguidores en el país que tendrían la misión de reactivar la “Provincia de Argelia (wilayate Al-Djazair). Reportes indican que dos facciones de AQMI, Serriyat al-Ghuraba (célula operativa en Constantine) y Katiba al-Itissam (activa en la región de Skikda) abandonaron el grupo para unirse a ISIS. Pese a ello, algunos análisis subrayaron que ISIS no ha conseguido penetrar con fuerza en Argelia y que las perspectivas del grupo en el país han sufrido un declive desde el asesinato del líder de su filial, Jund al-Khilafa (Soldados del Califato), en diciembre de 2014.⁷⁵

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jun al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

Argelia continuó siendo escenario de un **conflicto armado de baja intensidad que se cobró la vida de cerca de 150**

73. OCHA, “South Sudan: Humanitarian Snapshot”, noviembre de 2016.

74. Véase los resúmenes de Côte d’Ivoire y Burkina Faso en el capítulo 2 (Tensiones).

75. Ghanem-Yazbeck, Dalia, “Obstacles to ISIS expansion”, *The Cipher Brief*, 1 de septiembre de 2016.

Ante las campañas contra ISIS en Libia y la actividad de AQMI en países del Sahel y el consiguiente temor de infiltración de combatientes a través de las fronteras, **Argelia optó en 2016 por intensificar su política de refuerzo de la seguridad en zonas limítrofes.** En abril las autoridades decidieron desplazar 20.000 efectivos de bases en el norte al sur del país y fuentes locales informaron sobre el refuerzo de la vigilancia en la frontera este de Argelia, tanto con Túnez como con Libia. En esta última frontera, de más de 1.000 kilómetros, se profundizó en la construcción de zanjas. Las zonas limítrofes con Malí, Níger y Libia han sido convertidas en áreas militares. En este contexto, durante el año diversos análisis resaltaron el fracaso del Comité del Estado Mayor Operacional Conjunto (CEMOC, por sus siglas en francés) entre Argelia, Níger, Mauritania y Malí. Impulsado por Argelia en 2010 y con base en la localidad argelina de Tamanrasset, el CEMOC debía servir como mecanismo de cooperación para coordinar los esfuerzos de gobiernos de la región para frenar la actividad de grupos yihadistas. Estaba previsto que se crearan patrullas conjuntas que no llegaron a configurarse y, según algunos observadores, la iniciativa argelina pretendía fundamentalmente disuadir a países occidentales de involucrarse más en el Sáhara y el Sahel. Ante la falta de respuesta de Argelia a los requerimientos de asistencia militar por parte de países de la región –Malí en 2012, Níger en 2013– y la percepción de falta de predictibilidad de Argel, los países del llamado G5 Sahel (Malí, Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad) decidieron lanzar su propia iniciativa de coordinación de seguridad para la región.⁷⁶ Finalmente, cabe destacar algunos hechos vinculados a la política interna del país. Durante 2016 se aprobaron una serie de reformas constitucionales que, entre otros temas, limita a dos los períodos presidenciales –Abdelaziz Bouteflika está en su cuarto mandato–, prohíbe que ciudadanos con doble nacionalidad opten a cargos públicos y reconoce el tamazigh como lengua oficial del Estado. Sectores críticos pusieron en duda el impacto de las reformas para reducir la influencia en el sistema político de las élites vinculadas al partido oficialista Frente de Liberación Nacional (FLN) y de las fuerzas de seguridad. A lo largo del año, además, continuaron las denuncias sobre detenciones de activistas durante manifestaciones pacíficas y medidas contra sectores disidentes. Uno de los casos de mayor repercusión fue la condena a dos años de prisión por insultos al presidente contra el periodista británico-argelino Mohamed Tamalt, quien murió en diciembre tras tres meses en huelga de hambre. Adicionalmente, cabe destacar que algunos análisis alertaron sobre el potencial de inestabilidad en el sur del país, donde se ha identificado un creciente resentimiento contra las autoridades. Los focos de contestación se han localizado principalmente en Ghardaia, In Salah y Ouargla y han estado vinculados a dinámicas etno-sectarias; movilizaciones por desacuerdos en la explotación de recursos; marginación y altos niveles de desempleo, respectivamente.⁷⁷

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de ISIS en el país norteafricano.

La situación en Libia continuó deteriorándose en 2016, en un contexto de **profundización de la división política, persistentes focos de la violencia vinculados a la actividad de una gran diversidad de actores armados** –que causaron más de un millar de víctimas mortales durante el año, según recuentos informales parciales–, **y de continuas violaciones a los derechos humanos en un clima de impunidad.** La evolución de los acontecimientos en el país estuvo marcada por los intentos de implementar el acuerdo de Skhirat, aprobado a finales de 2015 bajo los auspicios de la ONU. El principal objetivo del pacto era sortear la fragmentación política e institucional en Libia, que desde 2014 contaba con dos administraciones paralelas, una en Trípoli y otra en Tobruk/Bayda

76. Brahimi, Abdallah, “Algeria’s Military Makeover”, *Sada*, Carnegie Endowment for International Peace, 19 de abril de 2016. Véase también el resumen sobre Malí en este capítulo.

77. International Crisis Group, *Algeria’s South: Trouble’s Bellwether*, Middle East and North Africa Report no.171, ICG, 21 de noviembre de 2016.

(este). Con este propósito, el acuerdo planteó el establecimiento de un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) que sería diseñado por un Consejo Presidencial encabezado por Fajez Sarraj, futuro primer ministro. El acuerdo, sin embargo, contó con un apoyo parcial desde el principio y en los meses siguientes el Consejo Presidencial enfrentó numerosos obstáculos en los intentos por asentar su autoridad y por conseguir la aprobación del gobierno de unidad, en medio de resistencias y amenazas de actores políticos y armados.⁷⁸ Prueba de ello es que durante los primeros meses del año el Consejo Presidencial tuvo que operar en Túnez ante el clima de inseguridad. No fue hasta finales de marzo que una parte del Consejo llegó a Trípoli por mar –el aeropuerto estaba bloqueado por fuerzas hostiles a las nuevas autoridades– y se instaló en una base naval. Al no disponer de cuerpos de seguridad unificados bajo su control, el Consejo optó por crear una nueva fuerza, la Guardia Presidencial, y por establecer acuerdos de colaboración con milicias de la zona oeste del país. Sarraj consiguió el respaldo de algunos actores de Trípoli y miembros del Congreso General Nacional (CGN) accedieron a integrar el nuevo Alto Consejo Consultivo definido en el acuerdo de Skhirat. No obstante, sectores vinculados al CGN, entre ellos Khalifa Ghweil, jefe del ex Gobierno de Salvación Nacional que había estado funcionando en Trípoli, mantuvieron una posición reticente. Ejemplo de ello fue el intento de golpe de Estado encabezado por Gwheil en octubre, que añadió confusión a la situación en el país. En el este de Libia la Cámara de Representantes (CdR) –reconocida en el acuerdo de Skhirat como el único cuerpo legislativo válido–, mantuvo su negativa a ratificar la propuesta de gobierno de unidad de Sarraj. Según diversos análisis, en el este del país se habrían impuesto las reticencias hacia la administración de Sarraj por sus vínculos con milicias de Misrata, el temor por las posibles influencias de sectores islamistas y las aprensiones sobre el establecimiento de un nuevo orden y autoridad centrado una vez más en Trípoli, en desmedro de las aspiraciones descentralizadoras de la zona oriental. El ex general Khalifa Hifter, líder del llamado Ejército Nacional de Libia y figura con ascendiente en el este del país, también influyó en la posición negativa de la CdR, en parte por sentirse marginado del acuerdo de Skhirat y de las disposiciones de seguridad y por su pulso con Mahdi al-Barghathi, antiguo lugarteniente designado ministro de Defensa en el Gobierno de Sarraj. Ante el bloqueo en la aprobación del gabinete, Sarraj optó por poner en marcha el GAN sin esperar la aprobación de la CdR. Así, a finales de año, el panorama político-institucional de Libia se caracterizaba por la fragmentación, con un gobierno de unidad con base en Trípoli con autoridad limitada, una administración

Aunque en diciembre se logró la expulsión de ISIS de Sirte, diversos análisis subrayaron que el grupo armado mantenía capacidad para reorganizarse en otros puntos de Libia o en países vecinos

vinculada a la CdR que se mantenía operativa en el este del país y múltiples desacuerdos sobre la implementación del acuerdo político. Diversos análisis apuntaban a que el panorama estaba aún más dividido que un año atrás.⁷⁹

En este trasfondo de inestabilidad, **Libia continuó siendo escenario de múltiples focos de violencia, que a lo largo del año se centraron especialmente en Trípoli, Bengasi y Sirte** en forma de enfrentamientos, ataques suicidas y atentados. Entre los diversos hechos de violencia, cabe destacar al menos dos dinámicas. En primer lugar, las tensiones en la zona del creciente petrolero, escenario de acciones de ISIS durante el primer semestre y, posteriormente, de una campaña de las fuerzas de Hifter que en octubre le llevaron a asumir el control de las localidades de Ras Lanouf, Al-Sidra, Zuwaytina y Brega. Las hostilidades enfrentaron a las tropas de Hifter con el grupo armado Petroleum Facilities Guard que poco antes había llegado a un acuerdo con la administración de Sarraj. Diversos análisis coincidieron en que estos hechos suponían

un cambio importante en el equilibrio de fuerzas entre los actores armados del este y oeste del país. En segundo lugar, la campaña armada contra ISIS en la ciudad de Sirte, en el marco de una operación denominada Bunyan al-Marsous (BAM) o “Estructura Sólida”, que se extendió de mayo a diciembre. La ofensiva congregó a diversas milicias supuestamente leales al gobierno de Sarraj, aunque en términos operativos no hubo un comando de fuerzas unificado y los diversos grupos respondían a las órdenes de sus respectivos líderes. Milicias de Misrata tuvieron protagonismo en estas fuerzas, que a partir de agosto contaron con el apoyo formal de EEUU a través de una campaña aérea. Según estimaciones, en estos meses de enfrentamientos habrían fallecido más de 750 miembros de las milicias pro-gubernamentales. Se desconoce el número de bajas en las filas de ISIS, pero algunas fuentes oficiales situaban la cifra entre 1.800 y 2.000 combatientes. Si bien se consiguió el objetivo de expulsar a ISIS de la ciudad, diversos análisis subrayaron que la organización armada –que según algunos expertos contaba con entre 3.000 y 5.000 efectivos en el país antes del inicio de la campaña– mantenía capacidad para perpetrar acciones desde otros puntos de Libia o para reorganizarse en países vecinos, especialmente teniendo en cuenta su relación de colaboración con otros grupos armados próximos o filiales de ISIS en el norte de África. Según informes de la ONU, AQMI –y grupos próximos– había conseguido consolidar su presencia en el sur de Libia y continuaba usando el país como base logística para procurarse armas y municiones. Además de estas dinámicas, cabe destacar la implicación activa de

78. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 3 (Procesos de paz).

79. Véase “Libia ante un escenario de inestabilidad crónica” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

actores foráneos durante 2016 en respaldo a actores de uno y otro bando. Es el caso de EEUU y su campaña aérea –denunciada por la CdR como una violación a la soberanía del país–, precedida por informaciones de prensa sobre despliegue de operativos de fuerzas especiales estadounidenses, italianos, británicos y franceses. Si bien en la mayoría de estos casos involucraba un apoyo a fuerzas próximas al Gobierno de Sarraj, que dio su visto bueno a la campaña, en el caso de Francia se identificó un respaldo encubierto a las fuerzas del general Hifter. La implicación francesa salió a la luz pública después de un incidente en el que murieron tres soldados galos en julio, tras el derribo de un helicóptero por parte de un nuevo grupo armado creado en 2016 autodenominado Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB) y adversario del general Hifter. El militar, a su vez, ha contado con el apoyo de Rusia, Egipto y EAU y ha sido crecientemente considerado como “el hombre de Moscú en Libia”. Esta situación llevó a advertir a analistas sobre las consecuencias del respaldo externo a diversos actores armados en el país. Paralelamente, cabe destacar que Barack Obama aseguró en 2016 que Libia había sido su peor error en política exterior como presidente de EEUU por la falta de planificación tras la intervención occidental en 2011, liderada junto con Francia y Reino Unido y respaldada por la OTAN.

A este contexto político y de seguridad se suma el persistente clima de violaciones a los derechos humanos en el país. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) publicado en febrero alertó sobre el clima de impunidad en el país ante un conjunto de prácticas abusivas identificadas en el país desde 2014, que incluyen ejecuciones sumarias; ataques indiscriminados contra la población civil; torturas y malos tratos de manera sistemática en centros de detención; secuestros, desapariciones y detenciones arbitrarias; y abusos contra mujeres, activistas, periodistas y menores, incluyendo casos de reclutamiento forzado. **Informes de la UNSMIL sobre la situación a lo largo de 2016 confirmaron la continuidad de estos abusos e identificaron colectivos especialmente vulnerables, incluyendo la población migrante y refugiada en el país.** Según una investigación conjunta de la UNSMIL y OHCHR dada a conocer en diciembre de 2016, personas en esta condición son sometidas a extorsiones, trabajos forzados, violencia sexual y arrestos arbitrarios por parte de grupos armados, redes de trata y también de funcionarios libios. Pese a este escenario, Libia destacó en 2016 como una de las principales vías de tránsito hacia Europa. Al finalizar el año más de 3.000 personas habían muerto intentando cruzar el Mediterráneo por esta ruta central, en su mayoría procedentes de las costas de Libia.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacieron dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.

El conflicto armado en Colombia que protagonizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) contra el Estado, estuvo marcado por las negociaciones de paz en La Habana que dieron como resultado la firma de la paz tras más de 52 años de guerra civil.⁸⁰ Entre los aspectos más destacados del conflicto armado durante el año, las FARC-EP anunciaron el 10 de febrero que no reclutarían a menores de 18 años, una decisión que se produjo un año después de su compromiso de no aceptar en sus filas a menores de 17 años. Posteriormente, el 15 de mayo las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP en las conversaciones de La Habana firmaron el “acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”. Durante el 2016 se mantuvo vigente el desescalamiento bilateral de la violencia acordado por el Gobierno y las FARC-EP en junio de 2015. Así se logró que el conflicto armado cayera a su nivel mínimo en 52 años de violencia, en cuanto a número de víctimas, combatientes muertos y heridos, así como en el de acciones violentas registradas. Al acuerdo de desescalada de la violencia se le unió el 29 de agosto de 2016 el acuerdo de cese al fuego bilateral, que a partir de la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y FARC-EP en diciembre se ha vuelto permanente. Sin embargo, a pesar de los importantes avances logrados en el país a través de las negociaciones

80. Véase el resumen sobre Colombia en capítulo 3 (Procesos de paz).

y acuerdos entre Gobierno y guerrilla de las FARC-EP, en 2016 se produjeron algunas escisiones en el seno de las fuerzas armadas irregulares a raíz de las negociaciones de paz. Aunque éstas son minoritarias, suponen un reto para la construcción de una paz estable y duradera. El 13 de diciembre, el Estado Mayor de las FARC-EP comunicó la expulsión de cinco jefes guerrilleros (Gentil Duarte, Euclides Mora, John Cuarenta, Giovanni Chuspas y Julián Chollo) por no seguir instrucciones en el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz. Los jefes expulsados pertenecían a los Frentes 1, 7 y 16, operativos en los departamentos centrales de Meta y Guaviare. A su vez, también se presentaron disidencias en diferentes frentes operativos en los departamentos de Vichada, Guainía, Chocó, Nariño, Antioquia o Caquetá. Según estimaciones realizadas por fuentes militares y especialistas, se estima que entre un 10 y un 30% de los guerrilleros de las FARC-EP no se sumarán a la desmovilización prevista en los Acuerdos.

En relación al conflicto armado que mantiene el Gobierno colombiano con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante el año se produjeron diferentes acercamientos entre las partes con el fin de iniciar conversaciones de paz formales, pero éstos no lograron pasar de la fase de diálogo exploratorio. El Gobierno exige a la guerrilla la liberación de las personas secuestradas, hecho que al finalizar el año no se había aún producido.⁸¹ Aun así, “Iván Márquez”, alias de Luciano Arango Marín, quien fungió como jefe negociador de las FARC-EP en las conversaciones de La Habana, subrayó que el ELN no se puede quedar fuera del proceso de paz porque “una paz sin el ELN sería una paz incompleta”. El ELN mantuvo durante el año sus operaciones armadas en el país, sobre todo durante el mes de febrero cuando se registraron los niveles más altos de ataques de esta guerrilla desde el año 2010, debido a la conmemoración de los 50 años de la muerte de su histórico líder Camilo Torres. El grupo anunció un cese al fuego unilateral desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre para facilitar la participación en el plebiscito organizado para refrendar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Durante el segundo semestre del año se redujo el impacto de la violencia y todo hacía prever que a principios del 2017 se establecería el diálogo formal entre la guerrilla y el Gobierno.

Como parte del impacto inmediato que ha tenido en el país el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, y el inicio de las negociaciones en su fase exploratoria con el ELN, el 29 de diciembre, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, hizo público los datos nacionales relativos a la tasa de homicidios registrada en el país durante el 2016, la cual se situó en 24,4 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que significa la tasa más baja de los últimos 42 años. Según el Registro Único de Víctimas de la gubernamental Red Nacional de Información, durante el 2016 se registraron 301

víctimas mortales relacionadas con actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos, frente a las 1.058 del año 2015, las 3.290 registradas en 2014 o las 10.198 en 2012.⁸²

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de los noventa. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014. Un contingente de unos 13.000 soldados permanecerá hasta diciembre de 2017 para formar y entrenar a las fuerzas afganas (bajo la misión “Resolute Support”, mandato de la OTAN) y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo (3.000 soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”).

La situación de violencia en Afganistán fue de enorme gravedad durante todo el año, consolidándose el deterioro que se produjo en 2015 tras la retirada parcial de las tropas internacionales desplegadas en el país con la invasión estadounidense de 2001. Según datos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, entre enero y agosto

81. Ibid.

82. Red nacional de Información, Registro Único de Víctimas. Acto terrorista 2016. 01 de enero de 2017.

de 2016 murieron 5.523 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y casi 10.000 resultaron heridos.⁸³ **Los enfrentamientos y atentados se repitieron durante todo el año, con un grave impacto sobre la población civil, contribuyendo a deteriorar también la crisis de desplazamiento forzado que atraviesa el país.** La misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, registró un incremento del 3% en el número de víctimas civiles con respecto a 2015 (11.418 frente a 11.034), aunque se produjo un descenso en el número de víctimas mortales. Así, en 2016 se registraron 3.498 víctimas mortales civiles como consecuencia del conflicto armado –de las que 923 eran menores y 341 eran mujeres– y 7.920 personas resultaron heridas. Además, según cifras reveladas extraoficialmente por fuentes gubernamentales, entre marzo y agosto alrededor de 4.500 soldados y policías afganos habrían muerto y más de 8.000 habrían resultado heridos. El deterioro de la seguridad y la crisis humanitaria tuvieron lugar además en un contexto de grave crisis política.⁸⁴ La insurgencia talibán logró avances en el control territorial de algunas zonas del país, especialmente después de una importante ofensiva que tuvo lugar en el mes de agosto. En septiembre la insurgencia talibán logró el control del distrito de Janikhel, en la provincia de Paktia, después de intensos enfrentamientos en los que habrían muerto 30 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Cientos de insurgentes atacaron los edificios centrales de la sede del distrito y se hicieron con el control de este produciéndose también víctimas mortales en las filas talibanes. En ese mismo mes los talibanes lograron capturar el distrito de Dahan-e-Ghori en la provincia de Baghlan, y posteriormente el distrito de Khanabad, zona clave puesto que une las provincias de Kunduz y Takhar. No obstante, este distrito fue recuperado días después por las fuerzas de seguridad afganas. La insurgencia talibán intensificó también su ofensiva para avanzar hacia la capital de Helmand, Lashkar Gah, a pesar de los bombardeos aéreos estadounidenses, generando una importante crisis humanitaria y forzando a 30.000 personas a desplazarse de sus hogares en la provincia. En el mes de octubre un importante ataque talibán en las inmediaciones de la ciudad de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, causó la muerte de al menos 100 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Además, la insurgencia talibán consiguió recuperar el control sobre varias partes de la ciudad de Kunduz durante varios días en los que se produjeron enfrentamientos que obligaron a decenas de miles de personas a desplazarse.

Por otra parte, **se registraron importantes atentados, especialmente en Kabul, con un serio impacto en términos de víctimas mortales.** El atentado más grave del año, que tuvo lugar en julio, fue reivindicado por

Se consolidó el deterioro de la situación de Afganistán con intensos enfrentamientos y graves atentados que tuvieron un serio impacto en la población civil

ISIS y causó la muerte a 80 personas e hirió a otras 230. Se trató de una doble explosión que estaba dirigida contra la minoría hazara (que profesa la confesión chií) y se produjo durante una protesta que había congregado a numerosas personas de esta minoría. Se trata del atentado más grave contra la minoría hazara en Kabul desde 2011 y el primero perpetrado por ISIS en la capital afgana, orquestado por un comandante de esta organización desde la provincia de Nangarhar.⁸⁵ En junio, el estallido de bombas al paso de un convoy de autobuses de la Policía en las afueras de Kabul causó la muerte a 33 personas, cuatro de ellas civiles. Días antes, un atentado suicida contra un autobús causó la muerte de 14 guardas de seguridad nepalíes que trabajaban en la embajada canadiense. En el mes de agosto, un atentado contra la Universidad Americana en Kabul causó la muerte de 12 personas, siete de ellas estudiantes de esta universidad, dejando heridas a otras 44. Las fuerzas de seguridad mataron a dos hombres sospechosos de ser los responsables del atentado. El 6 de septiembre se registraron en Kabul dos atentados de gravedad reivindicados por los talibanes. El primero de ellos tuvo lugar en la parte exterior del Ministerio de Defensa, con el estallido de dos bombas. La explosión de la primera bomba causó decenas de muertes y fue seguida por una segunda explosión, que ocasionó la muerte de diversos altos mandos de las fuerzas de seguridad afganas (dos generales, varios coroneles y numerosos soldados y policías) que se habían desplazado al lugar tras el primer atentado. 40 personas murieron en total, ya que numerosos civiles que se hallaban en la zona de mercado próxima a la sede del Ministerio de Defensa también fallecieron como consecuencia del doble atentado. Además, 110 personas resultaron heridas. Horas después la sede de la ONG CARE International fue atacada por hombres armados. En el tiroteo posterior murieron tres atacantes y seis personas más resultaron heridas.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, All Parties Hurriyat Conference, United Jihad Council
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que

83. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Quarterly Report to the United States Congress*, octubre de 2016.

84. Véase "Afganistán, un conflicto enquistado" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

85. Para más información sobre la presencia de ISIS en el país véase nota anterior.

desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

La situación de seguridad en el estado indio de Jammu y Cachemira se deterioró notablemente a lo largo del año 2016. Según las cifras recopiladas por el South Asian

Terrorism Portal, **267 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y las fuerzas de seguridad indias, así como por la violencia que se produjo en múltiples disturbios de protesta contra la acción de las fuerzas de seguridad**, frente a las 174 víctimas mortales de 2015. En el mes de abril, cuatro personas murieron durante los disturbios que se desencadenaron en varias ciudades del estado después de que se convocaran manifestaciones para protestar por un intento de agresión sexual contra una chica por parte de un soldado de las Fuerzas Armadas indias. En este mismo mes, dos dirigentes del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen, Naseer Ahmad Pandit e Inamul Haq alias Waseem Malla, murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en lo que fue calificado por éstas como un duro golpe al liderazgo del grupo. Miles de personas asistieron a los funerales de los insurgentes. Estas muertes y funerales de protesta fueron la antesala de los hechos más graves del año, que tuvieron lugar en julio con el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del conocido insurgente, también de Hizbul Mujahideen, Burhan Wani, cuando la vivienda en la que se escondía fue asediada por las fuerzas de seguridad indias. Wani, de 22 años, era considerado uno de los insurgentes más influyentes entre los jóvenes cachemires por su presencia en las redes sociales y se le atribuía el fortalecimiento de su organización armada en los últimos meses –superando a otras organizaciones como Lashkar-e-Toiba– y la mejora de la imagen de la insurgencia entre la población. Miles de personas asistieron a su funeral y en otros lugares del estado se llevaron a cabo homenajes fúnebres al insurgente. Durante los meses de julio y agosto se repitieron disturbios y protestas de forma continuada en los que murieron cerca de 80 personas. A pesar del toque de queda que impusieron las autoridades, las protestas se produjeron con una frecuencia casi diaria y miles de personas participaron en manifestaciones desafiando

El conflicto en Cachemira se deterioró notablemente a lo largo del año con graves disturbios en los que murieron decenas de personas que protestaban por las muertes de insurgentes

el toque de queda. Especialmente preocupante fue el elevadísimo número de heridos, más de 8.000, como consecuencia de los disturbios y de la grave represión policial. Las organizaciones de derechos humanos y profesionales sanitarios denunciaron que centenares de personas podrían quedar ciegas como consecuencia de las graves heridas provocadas por los disparos con perdigones por parte de la policía. Unas 5.000 personas resultaron heridas a consecuencia de estas balas. Además, se produjo la detención del líder independentista cachemir, Mirwaiz Umar Farooq, de la All Parties Hurriyet Conference, a quien se acusó de quebrantar su arresto domiciliario para participar en las protestas. Farooq había estado bajo arresto domiciliario durante dos meses por sus denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad indias en Cachemira. Las protestas causaron además la paralización de la vida económica del estado, con bancos, tiendas y colegios cerrados.

En diciembre volvieron a repetirse las protestas de carácter masivo después de que dos insurgentes murieran tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se prolongó durante casi dos días. Los insurgentes murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad lo que llevó a la población de esta ciudad y localidades vecinas a iniciar protestas en las calles. Al menos una persona murió posteriormente en el transcurso de las masivas protestas contra el Gobierno indio, en las que decenas de personas resultaron heridas. Otro episodio de enorme gravedad lo constituyó el ataque insurgente que tuvo lugar en septiembre contra la base de las Fuerzas Armadas indias de Uri, situada en una zona cercana a la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán. **Este ataque causó la muerte a 19 soldados indios y cuatro insurgentes cachemires y fue el más mortífero contra las fuerzas de seguridad indias en Cachemira en las últimas décadas.** El ataque fue atribuido al grupo armado de oposición con base en Pakistán, Jaish-e-Muhammad, y la India acusó al Gobierno pakistaní de estar detrás del atentado. En respuesta, se iniciaron una serie de ataques selectivos contra campamentos de la insurgencia en territorio pakistaní en la zona fronteriza, aunque Pakistán negó que estas operaciones tuvieran lugar.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en

honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con el grupo armado de oposición naxalita CPI-M experimentó un repunte de la violencia a lo largo del año. De acuerdo con las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado recopiladas por el South Asia Terrorism Portal (SATP), 430 personas murieron en diferentes estados de la India afectados por el conflicto, frente a las 251 del año 2015. Este último había sido el año en el que se registraron unas cifras de mortalidad más bajas desde que en el año 2010 se iniciara la operación contraterrorista Green Hunt por las fuerzas de seguridad indias. Según el SATP, la mayoría de las personas muertas en 2016 como consecuencia de la violencia fueron insurgentes (244), seguidas de civiles (120), y miembros de las fuerzas de seguridad (66). No obstante, estas cifras fueron puestas en cuestión repetidamente por el grupo armado, que afirmó que gran parte de las personas señaladas por el Gobierno como insurgentes eran civiles. De hecho, el Director General de la Policía del estado de Chhattisgarh –uno de los estados más afectados por la violencia–, que asumió el cargo en 2016, señaló que la práctica de matar a civiles y hacerlos pasar por insurgentes es algo que nunca debería haber sucedido y que había dado instrucciones para que no volviera a ocurrir. Los maoístas acusaron a las fuerzas de seguridad de la muerte de 90 personas durante los seis primeros meses del año en la zona de Bastar, en Chhattisgarh, en supuestos enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad que no fueron tales. Los estados afectados por la violencia según SATP fueron Chhattisgarh (207 víctimas mortales), Jharkhand (81), Odisha (72), Bihar (32), Maharashtra (23), Andhra Pradesh (10), Kerala (dos), Madhya Pradesh (dos) y Telangana (una). Las fuerzas de seguridad atribuyeron la reducción de la violencia en los últimos años –a pesar del repunte en términos de mortalidad de 2016– a una mayor presencia policial en las zonas afectadas por el conflicto, a un elevado número de desertiones y rendiciones por parte de los insurgentes y a una mejor implementación de los programas de desarrollo implantados en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Aunque los enfrentamientos se repitieron de forma constante, entre los hechos más graves del año cabe destacar el que tuvo lugar en el mes de junio en el distrito de Narayanpur, en Chhattisgarh, en el que según las

fuerzas de seguridad murieron al menos 10 integrantes del grupo armado de oposición. En noviembre, otros seis insurgentes murieron en enfrentamientos en el distrito de Dantewada (uno de los más afectados por el conflicto) en este mismo estado y otros cinco insurgentes murieron después de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo una operación contra un campamento naxalita en el distrito de Narayanpur. En el estado Andhra Pradesh tuvo lugar el enfrentamiento más letal del año, en la zona fronteriza con el estado de Odisha, donde entre 18 y 24 insurgentes naxalitas murieron en una operación de las fuerzas de seguridad. Y en el estado de Bihar, 10 miembros del batallón de élite COBRA de la policía murieron como consecuencia de una explosión en el distrito de Aurangabad.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

Pakistán continuó afectado por elevados niveles de violencia durante todo el año, aunque éstos fueron sensiblemente inferiores a los de años anteriores. En 2016 se registraron un total de 2.610 muertes vinculadas a los diferentes conflictos y escenarios de tensión que tienen lugar en el país, en comparación con las 4.647 muertes en 2015 y las 11.596 muertes en 2014. Cabe

destacar que 1.277 de estas muertes se produjeron en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab y en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, por sus siglas en inglés), en su mayor parte vinculadas al conflicto armado que enfrenta a la insurgencia talibán con las fuerzas de seguridad pakistaníes. Las autoridades y fuerzas de seguridad atribuyeron esta reducción en las cifras de mortalidad al éxito de la política antiterrorista, especialmente a la operación militar Zarb-e-Azb, iniciada en 2014, y al Plan de Acción Nacional contra el terrorismo diseñado por el Gobierno después del atentado contra un colegio en Peshawar en diciembre de 2014. No obstante, a pesar de esta considerable reducción de la violencia, a lo largo de todo el año se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y diferentes organizaciones insurgentes y tuvieron lugar atentados con un grave impacto en términos de víctimas mortales y heridos. Además, a pesar de los anuncios gubernamentales, las fuerzas de seguridad no pudieron dar por cerrada la operación Zarb-e-Azb. El atentado más grave del año tuvo lugar en marzo en la ciudad de Lahore, capital de Punjab. Un atentado suicida con bomba en un parque causó la muerte de 72 personas, de los que en torno a 20 podrían ser menores, ya que el ataque tuvo lugar en las inmediaciones de una zona de juegos infantiles. El atentado fue reivindicado por la facción talibán Jamaat-ul-Ahrar, que señaló que el objetivo era la población cristiana que estaba celebrando la fiesta de la Pascua, aunque la mayoría de las víctimas profesaba la religión musulmana. Además, el grupo armado estaría tratando también de aprovechar el descontento popular tras la ejecución de Mumtaz Qadri, acusado de tirotear al gobernador de Punjab en 2011, por oponerse a la legislación anti blasfemia y defender a la minoría cristiana. Más de 100.000 personas asistieron al funeral de Qadri durante el que se produjeron disturbios. El Gobierno de Punjab anunció una operación de seguridad posterior al atentado liderada por la Policía, con apoyo militar, sin ceder a las presiones de quienes pedían que se otorgaran poderes adicionales al Ejército para llevar a cabo una operación militar de contrainsurgencia. El grupo armado Jamaat-ul-Ahrar se creó en 2014 integrado por diferentes facciones talibanes procedentes de cuatro de los siete distritos tribales de la frontera de Pakistán con Afganistán y está liderado por Omar Khalid Khorasani, comandante talibán con fuertes vínculos con al-Qaeda, que le habría proporcionado apoyo material y económico.

En enero se había producido otro atentado de gravedad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la universidad de Bacha Khan. Más de 20 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en un tiroteo protagonizado por cuatro hombres armados. El grupo armado talibán TTP negó estar detrás del atentado. En marzo, la explosión de una bomba en un autobús que transportaba funcionarios gubernamentales en la ciudad de Peshawar causó la

Aunque el conflicto armado en Pakistán siguió teniendo una elevada intensidad, se redujeron notablemente los niveles de violencia con respecto a años anteriores

muerte a 15 personas. Otras 30 resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. En septiembre se produjeron varios atentados de consideración. El más grave tuvo lugar en la región tribal de Mohmand, donde al menos 29 personas murieron y otras 20 resultaron heridas como consecuencia del estallido de una bomba en una mezquita en el momento en que numerosas personas atendían las plegarias del viernes. El grupo armado Jamaat-ul-Ahrar reivindicó este atentado señalando que había buscado atacar a seguidores del Gobierno. En la ciudad de Mardan, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, 11 personas murieron en un atentado suicida contra un tribunal, reivindicado también por Jamaat-ul-Ahrar. Además, 20 personas más resultaron heridas como consecuencia de la deflagración, que se produjo cuando la policía trató de impedir el paso del atacante hacia el interior del recinto. En Peshawar, en un atentado suicida perpetrado por cuatro atacantes contra un recinto en el que residían alrededor de 100 trabajadores de la presa Warsak que profesan la religión cristiana, murieron todos los atacantes y tres personas más.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en la provincia de Baluchistán se mantuvo activo todo el año. Según las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado recopiladas por el Center for Research and Security Studies de

Pakistán, a lo largo de 2016 se produjeron 805 muertes y 642 personas resultaron heridas. Esto representa un repunte con respecto a las cifras de 2015, cuando se registraron 719 muertes. A lo largo de todo el año se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las diferentes organizaciones insurgentes que operan en el territorio baluchi, así como ataques contra las infraestructuras. Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos repitieron sus denuncias sobre las graves violaciones perpetradas en el marco del conflicto, especialmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre los hechos más graves del año cabe destacar de forma especial los atentados de agosto y octubre en Quetta, capital de la provincia, y en noviembre en el distrito de Khuzdar. En el mes de agosto un atentado contra un hospital causó la muerte de 73 personas, en su mayoría abogados y periodistas, que estaban reunidas en el centro sanitario después de que el día anterior un prominente abogado de la ciudad hubiera sido asesinado a tiros. Más de 11 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. En los meses previos se habían producido varios asesinatos de abogados también en la ciudad de Quetta. La agencia de noticias Amaq, vinculada al grupo armado ISIS, señaló que esta organización estaba detrás del atentado, aunque un portavoz del grupo armado de oposición TTP-JA, declaró haberlo cometido. Este grupo armado, facción de la insurgencia talibán, había mostrado su lealtad a ISIS pero posteriormente volvió a adherirse al movimiento talibán y no estaba clara cuál era su vinculación con ISIS. En octubre, un atentado contra una academia de Policía ocasionó la muerte a 62 personas, la mayoría cadetes de policía, y más de cien personas resultaron heridas. Un grupo de insurgentes atacó la academia en un asalto que duró varias horas y durante el que se enfrentaron a la Policía en un intenso tiroteo. Dos de los atacantes hicieron estallar cinturones con explosivos y un tercer asaltante murió tiroteado. Aunque algunas fuentes atribuyeron el atentado a ISIS, el grupo armado pakistaní LJ, asociado a la insurgencia talibán, lo había reivindicado previamente. Un portavoz del Gobierno baluchi señaló que el atentado había sido preparado en suelo afgano acusando a “agencias de inteligencia extranjeras”. En noviembre, un atentado en el santuario sufí de Shah Noorani, en el distrito de Khuzdar, durante una celebración religiosa, causó la muerte a al menos 52 personas e hirió a más de 100 personas. El atentado fue reivindicado por ISIS.

Además de estos tres graves atentados, **a lo largo de todo el año se repitieron numerosos episodios de violencia.** En enero, una explosión en las cercanías de un centro de vacunación en Quetta causó la muerte de 16 personas (13 de ellas policías, que protegían a los equipos de vacunación) e hirió a una veintena de ellas. El grupo armado talibán TTP reivindicó el atentado, que sucedió durante el tercer día de la campaña de vacunación contra la polio en Baluchistán. En abril, 34 insurgentes murieron en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad pakistaníes en el distrito de Kalat. Entre los insurgentes fallecidos

estaba Abdul Nabi Bangulzai, líder del grupo armado de oposición United Baloch Army. Al anuncio por parte del gobierno baluchi de que desde el mes de diciembre las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de cerca de 100 insurgentes en diferentes operaciones de seguridad, respondió la organización de derechos humanos Voice of Baloch Missing Persons expresando su preocupación por el hecho de que podría tratarse de muertes que no se produjeron en combate, sino que por el contrario serían ejecuciones extrajudiciales bajo custodia, práctica habitual por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes en sus operaciones en la provincia. La organización denunció que en el mes de marzo las fuerzas de seguridad anunciaron la muerte de 12 insurgentes en una operación en la zona de Sibbi, y que sin embargo se trataba de civiles no armados que previamente habían sido detenidos. En octubre, en un atentado contra un tren en la población de Mach, al sur de Quetta, reivindicado por el grupo baluchi BLA, seis personas murieron y 19 resultaron heridas. El grupo armado señaló que el atentado tenía como objetivo a los militares pakistaníes que se desplazaban hacia Rawalpindi. Además, el líder del grupo armado BLF, Allah Nazar Baloch, solicitó apoyo internacional, incluyendo de India, para la causa baluchi y anunció ataques contra el proyecto del Corredor Económico China Pakistán, que tiene como objetivo unir el oeste de China con mar Arábigo en Pakistán con una red de carreteras, ferrocarriles y tuberías energéticas atravesando Baluchistán. La insurgencia baluchi calificó el proyecto de imperialista, y Frontier Works Organisation, la empresa pakistaní dirigida por el Ejército, señaló que en los últimos dos años 44 de sus trabajadores han sido asesinados y 100 han resultado heridos como consecuencia de atentados.

Asia Oriental

China (Turquestán Oriental)	
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social
Intensidad:	Fin
Evolución:	↓

Síntesis:

Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su

estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, por lo que el caso pasó a ser considerado conflicto armado.

A pesar de que algunas organizaciones acusan al Gobierno y a determinados medios afines de tratar de invisibilizar la situación política y el conflicto en Xinjiang, tanto los datos oficiales y las declaraciones del Gobierno como las noticias aparecidas en prensa sugieren una **drástica reducción de los niveles de violencia en Xinjiang respecto del año anterior**, en consonancia con la tendencia observada desde el año 2014. Por esta razón, este caso dejó de ser considerado como un conflicto armado activo al finalizar 2016. A partir de los hechos de violencia recogidos en medios de comunicación y centros especializados se estima que unas 200 personas murieron durante el año 2015, una cifra claramente inferior a las más de 340 víctimas mortales del año 2014. De hecho, a principios de 2015 el Uyghur Human Rights Project, un centro con sede en EEUU, señalaba que entre 656 y 715 personas fallecieron en Xinjiang por episodios de violencia política en los años 2013 y 2014. En cambio, en todo el 2016 el Gobierno solamente se hizo eco de tres incidentes con presunta participación de organizaciones uigures. A finales de diciembre, cinco personas murieron después de que un grupo de personas atacaran una oficina del Partido Comunista en el condado de Moyu, también conocido como Karakax. Días más tarde, en el marco del operativo policial y militar que estableció el Gobierno, otros tres presuntos insurgentes murieron. Según el Congreso Mundial Uigur, que mantiene que 20 personas fueron detenidas tras este incidente, el Gobierno no fue transparente en cuanto al número de víctimas mortales ni en cuanto a las motivaciones del ataque. Previamente, el 10 de septiembre cuatro personas murieron, incluyendo al subjefe de la Policía, después de que un artefacto explosivo estallara en la prefectura de Hotan. En paralelo a estos dos hechos, algunas organizaciones uigures denunciaron la situación de los derechos humanos en la región, la militarización de Xinjiang y las restricciones religiosas y culturales impuestas a la comunidad uigur, especialmente tras la entrada en vigor, el 1 de noviembre, de las nuevas normativas educativas en Xinjiang, y que contemplan entre otras cuestiones la prohibición de cualquier tipo de actividad religiosa en las escuelas. También en materia legislativa, cabe destacar la entrada en vigor de una nueva normativa, aprobada por la asamblea provincial de Xinjiang a finales de julio, que desarrolla la ley antiterrorista que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Xinjiang es la primera provincia china que desarrolla reglamentariamente esta ley de ámbito nacional. La nueva normativa, que detalla mucho más que la ley estatal las definiciones de actos terroristas y los modos de prevenirlos o castigarlos, permite, entre

otras cuestiones, la suspensión de manifestaciones u otros actos públicos de afluencia masiva o el cierre de escuelas, empresas o fábricas en las que se sospeche que se pueda producir o almacenar armamento.

Además de los episodios de violencia o represión que se registraron en Xinjiang, durante el año también cobraron notoriedad otros episodios de violencia ocurridos en terceros países que el Gobierno vinculó a grupos armados uigures. A finales de agosto, cinco personas de la embajada china en Bishkek (Kirguistán) resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo. Según informes de inteligencia de Kirguistán que trascendieron a la prensa, un miembro de ETIM, también conocido como Partido Islámico del Turkeistán, fue el responsable de este atentado. En segundo lugar, algunas informaciones de prensa vincularon a personas de etnia uigur con el atentado de fin de año en Estambul, en el que 39 personas murieron y otras 69 resultaron heridas. Más de 30 personas fueron detenidas tras este atentado. En tercer lugar, cabe destacar el incremento de la tensión entre China y Pakistán después de que China acusara al Gobierno pakistaní de no poner fin a la presencia de grupos armados uigures en su territorio. En este sentido, el Gobierno chino ordenó la deportación de más de 100 estudiantes universitarios pakistaníes en Xinjiang tras la presunta implicación de algunos estudiantes pakistaníes en un atentado ocurrido en el mes de marzo. Previamente, en años anteriores, Beijing ya había deportado a estudiantes pakistaníes por distintos motivos. Además, a finales de año, tras los atentados de Moyu/Karakax, el Gobierno cerró la frontera entre Xinjiang y Pakistán. Previamente, en junio, ambos países llevaron a cabo la primera patrulla conjunta en la frontera entre Xinjiang y Cachemira. **En los últimos tiempos, el Gobierno chino ha expresado su preocupación por el alto número de uigures que reciben adiestramiento en Afganistán y Pakistán y que combaten en Siria.** Según Beijing, algunos de estos uigures podrían retornar a Xinjiang para reclutar a nuevos combatientes o para perpetrar actos de violencia. En junio, por ejemplo, un centro de investigación estadounidense estimó que entre mediados de 2013 y mediados de 2014 unos 100 uigures se habían unido a las filas del grupo armado Estado Islámico. Por otra parte, algunos analistas señalan que Beijing teme que el Gobierno de Turquía –país con lazos lingüísticos e históricos con la comunidad uigur– pueda facilitar el reclutamiento de personas uigures para la lucha contra el Gobierno sirio de Bashar al-Assad.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Aunque no trascendieron cifras oficiales sobre el número de víctimas del conflicto armado que enfrenta al NPA con el Gobierno desde 1969, **los niveles de violencia se redujeron drásticamente respecto del año anterior, especialmente después del acuerdo de alto el fuego que el nuevo Gobierno de Rodrigo Duterte y el NPA firmaron a finales de agosto, coincidiendo con la reanudación de unas conversaciones de paz que se hallaban interrumpidas desde 2012.** A pesar de que el propio líder y fundador del Partido Comunista de Filipinas (PCF) y el NPA, Jose Maria Sison, declaró a finales de mayo su intención de mantener activas las hostilidades hasta el último día de las Administraciones de Benigno Aquino, ya desde poco después de la victoria de Rodrigo Duterte en las elecciones presidenciales del 9 de mayo se iniciaron los contactos directos entre el propio presidente y altos representantes del NDF –organización que agrupa a varios grupos de inspiración comunista y que negocia en nombre del PCF y el NPA–, de modo que las hostilidades disminuyeron en intensidad desde mediados de año. Más adelante, el 25 de julio, durante su primer mensaje sobre el estado de la nación, Rodrigo Duterte declaró un alto el fuego con el NDF como gesto de buena voluntad y para propiciar una atmósfera de confianza de cara a la primera ronda de conversaciones formales que deberían haberse llevado a cabo a finales de julio, pero que finalmente fueron pospuestas hasta finales de agosto. En el mencionado mensaje, Duterte también llamó al NDF a replicar el cese de hostilidades unilateral del Gobierno. Sin embargo, el NDF no ordenó dicha medida y además, según el Gobierno, fue el responsable de un ataque en el que un soldado murió y otros tres resultaron heridos. Ante la falta de respuesta al ultimátum dado por el Gobierno para que el NDF diera explicaciones sobre lo ocurrido, Duterte ordenó la finalización del alto el fuego el 30 de julio. A pesar de que tras el fin de la tregua por parte del Gobierno se incrementaron notablemente las hostilidades –a principios de agosto, por ejemplo, dos miembros del NPA y cinco soldados murieron y otros 12 militares resultaron

heridos en la provincia de Compostela Valley–, a finales de agosto se reanudaron las negociaciones de paz oficiales en Oslo por primera vez en varios años y, entre otras cuestiones, ambas partes pactaron dos acuerdos unilaterales de alto el fuego indefinidos, los primeros de estas características en tres décadas. Previamente, tanto el Gobierno como el NPA habían acordado sendas treguas unilaterales mientras duraran las conversaciones en Oslo. Por su posible incidencia en la dinámica del conflicto, cabe destacar que el Gobierno liberó temporalmente a unos 20 prisioneros del NDF para que participaran en dichas negociaciones, entre los que se hallaban Benito Tiamzon y Wilma Austria, los dos principales líderes del NPA y el PCF en Filipinas y, según algunas fuentes, los máximos responsables de la estrategia militar del grupo.

A pesar de la clara disminución de los niveles de violencia en la segunda mitad del año, en numerosas ocasiones ambas partes se criticaron por violar el acuerdo de alto el fuego firmado en agosto y cruzaron numerosas acusaciones. Así, pocos días después de que el propio presidente instara al NPA a no utilizar minas antipersona, la cúpula del grupo hizo pública su orden de incrementar los ataques con explosivos detonados a distancia por considerar que este tipo de armamento no está prohibido por las Convenciones de Ginebra ni por el Tratado de Ottawa. Por otra parte, durante las elecciones presidenciales el Gobierno acusó al NPA de extorsionar a los candidatos para permitirles hacer campaña. Por su parte, el NPA acusó a las Fuerzas Armadas de cometer numerosas violaciones de derechos humanos en el marco de su política contrainsurgente y de aprovechar la campaña contra las drogas que inició Duterte tras llegar a la presidencia –y que a finales de año había provocado la muerte de miles de personas– para socavar el grupo y emprender operaciones militares y policiales en áreas de control o influencia del NPA. En la misma línea, a finales de diciembre, con motivo de la conmemoración del 48º aniversario de la creación del Partido Comunista de Filipinas –que congregó a unas 15.000 personas en la ciudad de Davao (de la que Duterte había sido alcalde durante muchos años)–, uno de los principales líderes del partido, Luis Jalandoni, advirtió que el NPA no dejará las armas aunque esté negociando con el Gobierno y que el Partido Comunista de Filipinas se verá obligado a poner fin a su tregua unilateral si el Gobierno sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos y sigue violando su propia tregua desplegando efectivos militares en áreas en las que opera o controla el NPA. Finalmente, cabe destacar que ambas partes no lograron firmar un acuerdo bilateral indefinido, tal y como habían pactado durante la primera ronda de conversaciones formales en agosto, por el desacuerdo entre el NPA y el Gobierno sobre el número y los tempos de la liberación de presos políticos. A pesar de ello, el Gobierno asistió por primera vez a la mencionada conmemoración y, como ya es tradicional, decretó una tregua coincidiendo con las fechas navideñas.

Filipinas (Mindanao) ⁸⁶	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Durante el 2016 la violencia se intensificó en Mindanao y el conflicto armado se tornó mucho más complejo por la mayor coordinación entre grupos armados islamistas, por la creciente presencia de ISIS en la región y por la posible interacción entre la campaña contrainsurgente del Gobierno y la campaña contra las drogas emprendida por la nueva Administración de Rodrigo Duterte –que, según algunas fuentes, habría provocado la muerte de unas 6.000 personas solamente en la segunda mitad del año– después de que Manila acusara a algunos grupos armados de estar involucrados en el narcotráfico. En varios momentos del año el Gobierno reconoció la gravedad de la situación y, a principios de 2017, las Fuerzas Armadas declararon haber emprendido el mayor despliegue militar de su historia en Mindanao (con

La violencia se intensificó en Mindanao y el conflicto armado se tornó mucho más complejo por la mayor coordinación entre grupos armados islamistas y por la creciente presencia de ISIS en la región

22.500 tropas, 8.000 de ellas en Sulu, el principal bastión de Abu Sayyaf) y se comprometieron a derrotar en seis meses a ISIS y a los grupos a los que consideran actualmente las principales amenazas a la seguridad: Abu Sayyaf, BIFF, el grupo Maute y, en menor medida, Ansarul Khilafah Mindanao. Además de estos cuatro grupos que han tenido una mayor preponderancia durante el 2016, algunos analistas sostienen que recientemente ha habido hasta 16 organizaciones que han jurado lealtad y obediencia a ISIS. Cabe destacar que tanto el MILF, que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en 2014, como la facción mayoritaria del MNLF, que firmó un acuerdo de paz en 1996, se comprometieron en varias ocasiones a auxiliar al Gobierno en su lucha contra algunos de estos grupos. El MNLF, por ejemplo, sufrió varias bajas en distintos enfrentamientos con Abu Sayyaf en la provincia de Sulu en los meses de febrero, abril, agosto y septiembre. Por su parte, el MILF activó los mecanismos de coordinación con el Gobierno (como el Joint Peace and Security Team, el Ad-Hoc Joint Action Group o el Coordinating Committee for the Cessation of Hostilities) para facilitar las tareas de contrainsurgencia del Gobierno en algunos de sus bastiones históricos en los que operan varios de los mencionados grupos islamistas. En cuanto a ISIS, durante 2016 reivindicó por primera vez un atentado de envergadura –18 soldados murieron y más de 50 resultaron heridos en abril en la región de Basilan, lo que significó el incidente armado más letal para el Ejército desde 2011– y advirtió sobre su intención de incrementar su presencia y ataques en Filipinas. En este sentido, durante el año designó a un líder en la región –Isnilon Hapilon, un dirigente histórico de Abu Sayyaf que lideraba la facción del grupo en Basilan pero que en 2014 juró lealtad a ISIS y a finales de 2015 se escindió de Abu Sayyaf para crear o fortalecer la estructura de ISIS en Filipinas–. Además, ISIS advirtió que cuatro organizaciones armadas de Mindanao –Ansar al Shariah, Marakah al Ansar; Ansar al Kilafah y al Harakatul al Islamiyah– habían convergido bajo la autoridad de Hapilon; reconoció oficialmente la lealtad y obediencia hecha pública por numerosos grupos en Filipinas en los últimos años; anunció su intención de crear una provincia (*wilayat*) del califato en la región, declaró disponer de 10 batallones de combatientes en cinco localizaciones diferentes del país y aseguró haber provocado la muerte de 289 personas desde abril de 2015.

En cuanto a la actividad armada de grupos que han declarado su lealtad o incluso su pertenencia a ISIS, cabe destacar el **incremento de los ataques y los secuestros por parte de Abu Sayyaf**. A mediados de noviembre, el Gobierno declaró que unos 130 combatientes de Abu Sayyaf habían muerto y más de 100 habían sido detenidos desde principios de julio. Manila reconoció que solamente en los 100 primeros días de gobierno de

86. En la edición anterior del informe *Alerta!* el conflicto armado en Mindanao se abordaba desde dos casos: Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf) y Filipinas (Mindanao-BIFF).

Duterte había llevado a cabo 579 operaciones militares en Sulu y había librado 54 enfrentamientos directos con Abu Sayyaf. La determinación del Gobierno para erradicar a este grupo no solamente tiene que ver con el alto número de ataques que lleva a cabo, sino con el incremento sustancial de los secuestros. A pesar de que durante el 2016 Abu Sayyaf liberó a numerosas personas (obteniendo, según el Gobierno, más de siete millones de dólares en los siete primeros meses del año), a principios de 2017 el grupo seguía teniendo en su haber a 27 rehenes, dos terceras partes de los cuales extranjeros. Además, ante el incremento de los ataques de Abu Sayyaf a navíos que navegaban por el Mar de Célebes y el Mar de Sulu y ante la constatación de que Abu Sayyaf tiene una mayor capacidad de operar cada vez más lejos de las costas del archipiélago de Sulu, los Gobiernos de Filipinas, Malasia e Indonesia firmaron un acuerdo para incrementar la cooperación militar y fortalecer la seguridad de la región. En cuanto al BIFF, a pesar de que las Fuerzas Armadas habían señalado que la muerte en abril de 2015 de su líder y fundador, Ameril Umbra Kato, había provocado el debilitamiento y la fragmentación en pequeñas unidades por disputas entre varios de sus comandantes, lo cierto es que el grupo siguió llevando a cabo ataques frecuentes y de una cierta envergadura –como un ataque a principios de 2017 a la cárcel distrital de Cotobato Norte que provocó la fuga de 158 reos, la mayor de la historia del país–. Además, el BIFF siguió tejiendo alianzas con otros grupos locales, como el denominado grupo Maute, y ampliando sus capacidades militares, como así lo evidenciaría, según fuentes de inteligencia, la participación de unos 100 miembros del BIFF durante un mes y medio en un curso de fabricación y manipulación de artefactos explosivos. Se estima que el grupo dispone de entre 500 y 1.000 miembros, según las fuentes, y que como mínimo 80 combatientes murieron durante el año, especialmente en Maguindanao, su principal bastión. Cabe destacar que a finales de julio, una facción del BIFF declaró haber asumido el control del grupo en detrimento del actual líder y sustituto de Umbra Kato, Ismael Abubakar (alias Imam Bongos), por considerar que la actual cúpula se hallaba demasiado cercana a los postulados de ISIS, pero ello fue desmentido por el portavoz oficial del BIFF.

Uno de los grupos más activos militarmente y que generó mayor preocupación fue el autodenominado Estado Islámico de Lanao o Dawlah Islamiyah, al que el Gobierno se refiere como grupo Maute, por estar liderado por los hermanos Abdullah y Omar Maute. Ya hace algunos años el grupo había jurado su lealtad a ISIS y utilizaba su simbología y terminología, pero algunos de los hechos que le confirieron notoriedad durante el 2016 fueron su participación en un atentado en un mercado de la ciudad de Davao (Mindanao) en diciembre en el que 15 personas murieron y otras 70 resultaron heridas; la ocupación temporal de la ciudad de Butig, durante la que colgaron la bandera de ISIS en varios edificios; o el hecho de que el propio Duterte reconociera abiertamente los vínculos del grupo Maute con ISIS. Al finalizar el año el Gobierno declaró que más de 160 combatientes del grupo Maute habían sido

abatidos durante 2016, especialmente en su principal feudo, Lanao el Sur, y a la vez advirtió que el grupo poseía la capacidad para perpetrar atentados en varias localidades de Mindanao y también en otras partes del país, como así lo atestiguarían la colocación de un artefacto explosivo en las cercanías de la embajada estadounidense en Manila –que finalmente no estalló– o el atentado con explosivos en diciembre en Leyte (provincia de Visayas Oriental), en la que 34 personas resultaron heridas. Finalmente, cabe destacar la muerte a principios de enero de 2017 del líder y fundador de Ansarul Khilafah Mindanao, Mohammad Jafaar Maguid –también conocido como Abu Shareefa al-Filibini o Tokboy–. Según el Gobierno, su muerte podría provocar el desmembramiento de Ansarul Khilafah Mindanao, una organización que ha jurado lealtad a ISIS, que según fuentes de inteligencia mantiene una estrecha colaboración con el BIFF y el grupo Maute y sobre la que pesan sospechas de haber participado en varios atentados con artefactos explosivos en 2016.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado que enfrenta a diferentes grupos armados con las fuerzas de seguridad permaneció activo todo el año con continuos enfrentamientos en diferentes estados, tanto entre insurgentes y fuerzas de seguridad como entre diferentes grupos armados entre sí. A pesar del inicio del proceso de diálogo político con los grupos firmantes del acuerdo de alto el fuego, se repitieron enfrentamientos protagonizados

fundamentalmente por aquellos grupos armados que no se adhirieron al acuerdo de alto el fuego nacional firmado en 2015.⁸⁷ Los territorios más afectados por la violencia fueron el estado Shan, en el que se enfrentaron las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición SSA-N; el estado Kachin, que registró enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición KIA; el estado Rakhine, en el que hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición AA y el recién surgido grupo armado HaY; y el estado Kayin en el que se enfrentaron las fuerzas de seguridad gubernamentales, apoyadas por la guardia fronteriza, con una facción del grupo armado DKBA. Además, a lo largo de todo el año otros grupos armados como el TNLA y el MNDAA también protagonizaron choques violentos con las fuerzas de seguridad. El conflicto armado tuvo un grave impacto sobre la población local. Decenas de miles de personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares huyendo a otras zonas del país o buscando refugio en los países vecinos como China, Bangladesh o Tailandia. Además, el acceso de las organizaciones humanitarias a la población afectada por el conflicto estuvo severamente restringido en varios momentos del año, comprometiendo la seguridad alimentaria de amplios grupos de población. Organizaciones humanitarias señalaron que el bloqueo estaba siendo incluso más severo que los que se produjeron con el anterior Gobierno.

La aparición del grupo insurgente rohingya HaY agravó la situación en el estado Rakhine de Myanmar

Durante meses las fuerzas de seguridad atacaron posiciones del KIA en los estados Kachin y Shan, tratando de recuperar el control de zonas administradas por el grupo mediante bombardeos y forzando el desplazamiento de miles de personas. Al finalizar el año se intensificaron los enfrentamientos con una gran ofensiva de las Fuerzas Armadas contra el KIA en el estado Kachin. En el estado Shan también fueron intensos los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la conocida como “Alianza del norte”, integrada por los grupos armados KIA, TNLA, MNDAA y AA. En septiembre se produjeron graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la facción del grupo armado DKBA Na Ma Kyar, en el estado Karen, que llevaron a más de 3.000 personas a huir de sus hogares, refugiándose en Tailandia algunas de ellas. Los enfrentamientos tendrían como objetivo capturar al líder del grupo, Saw Saw Aung, e iniciar una ofensiva a gran escala contra la organización insurgente. Algunas fuentes han señalado que los enfrentamientos en esta zona tendrían como objetivo controlar territorio de zonas cercanas a las bases del grupo armado de oposición KNU (uno de los firmantes del acuerdo de alto el fuego nacional) y en las que estaría prevista la construcción de una presa, ahora encallada y a la que el KNU se opone. Además, desde el mes de febrero se registraron choques entre los grupos armados de oposición TNLA

y SSA-S. En octubre el conflicto armado se expandió al estado Rakhine con la aparición de un nuevo grupo insurgente, HaY, cuyo objetivo era denunciar y poner fin a la persecución de la población rohingya en el estado. Un grupo de 250 insurgentes de HaY llevó a cabo varios ataques contra tres puestos policiales fronterizos el 9 de octubre, causando la muerte de nueve policías y de ocho insurgentes y haciéndose con una gran cantidad de armas y municiones. Como consecuencia de las operaciones de seguridad que se iniciaron tras el ataque otras 22 personas murieron, varias de ellas bajo custodia. Miles de personas se desplazaron como consecuencia de los operativos de seguridad y se produjo un grave incremento de la tensión entre las comunidades budista y musulmana. Numerosos hombres civiles se desplazaron de sus hogares temiendo ser acusados de insurgentes y las fuerzas de seguridad forzaron a más de 2.000 personas a abandonar sus poblaciones. En noviembre se registraron nuevos episodios de violencia, después de una nueva ofensiva insurgente en la que murió un alto mando militar, lo que desembocó en una operación de seguridad aérea que causó decenas de víctimas mortales civiles y forzó nuevos desplazamientos de población. Naciones Unidas señaló en diciembre que las denuncias sobre abusos contra la población civil, incluyendo asesinatos y violaciones, tenían un carácter diario.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

87. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Aunque el Gobierno no ofreció cifras oficiales sobre las tasas de mortalidad vinculadas al conflicto armado en el sur del país, algunos analistas señalaron que **los niveles de violencia siguieron disminuyendo en 2016, en sintonía con la tendencia que se observa desde el año 2009**. A mediados de año, un analista señaló que entre enero y julio la media de personas fallecidas cada mes era de alrededor de 12 y de 32 el número de personas heridas. Sin embargo, hubo meses en los que los niveles de violencia fueron superiores, como el mes de agosto, en el que 24 personas murieron y otras 73 resultaron heridas en los 137 episodios de violencia que se registraron. Para contextualizar la magnitud de estos datos, cabe tener en cuenta que a principios de 2016 el centro de investigación Deep South Watch señaló que el número de víctimas mortales en 2015 había sido de 246, una cifra claramente inferior a las 341 del año anterior y a las 456 del 2013. En 2015 el número de personas heridas a causa del conflicto armado también descendió de las 987 en 2013 a las 544 en 2015. Según este centro de investigación, **en los 12 años de conflicto armado, 6.543 personas han muerto (una media de 545 cada año) y 11.919 han resultado heridas (993 cada año) en los casi 15.400 episodios de violencia registrados** (una media de 1.281 al año, mientras que en 2015 se contabilizaron 674 episodios). En cuanto a las víctimas del conflicto, se estima que los patrones no se han alterado significativamente en los últimos años, siendo la población civil la más afectada. En 2016, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado suponían un 24% de las víctimas mortales y un 53% de las personas heridas. En varias ocasiones el Gobierno ha señalado que la disminución sostenida de los niveles de violencia se debe a su gestión del conflicto, tanto en el aspecto militar como en las políticas de desarrollo que ha impulsado en los últimos años, así como al proceso de diálogo en curso entre Bangkok y MARA Patani, una organización que incluye a los principales grupos insurgentes en el sur del país. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la evolución de los niveles y patrones de violencia no solamente tienen que ver con la política contrainsurgente de Bangkok, sino también con decisiones racionales y estratégicas de los grupos insurgentes, como calcular qué niveles de violencia infligir para mantener la atención del Estado y a la vez no erosionar en exceso el apoyo social que puedan tener o bien replegarse estratégicamente en función de la coyuntura política (golpes de Estado, cambios de gobierno, protestas en Bangkok, evolución de las conversaciones de paz, etc.) o de cuestiones logísticas y de abastecimiento de material bélico.

En cuanto a los episodios de violencia más graves del año, cabe destacar los 15 ataques simultáneos que ocurrieron en las provincias de Yala y Narathiwat el 13 y 14 de marzo, coincidiendo con el 56° aniversario de la fundación del BRN –el grupo que según el Gobierno

y la mayoría de analistas está detrás de la mayor parte de los episodios de violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana–; los ataques cometidos durante el Ramadán, en los que 32 personas murieron y otras 61 resultaron heridas; el estallido de una bomba en un mercado nocturno de Pattani a finales de octubre, en el que 21 personas resultaron heridas; un atentado con coche bomba en Pattani en el que 12 policías resultaron heridos; y, especialmente, los 12 ataques simultáneos con artefactos explosivos los días 11 y 12 de agosto en varios lugares considerados turísticos de ocho provincias del sur del país, en los que cuatro personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas. Previamente, los días 6 y 7 de agosto habían estallado 35 artefactos explosivos en el sur del país, aunque sin ocasionar víctimas mortales, mientras que a finales de mes una persona murió y otras 30 resultaron heridas tras el estallido de dos bombas en un hotel en la provincia de Pattani. Estos últimos atentados de mediados de agosto, los más graves desde el estallido de una bomba en Bangkok en agosto de 2015 que provocó la muerte de 20 personas, coincidieron con la celebración del cumpleaños de la reina, fecha señalada en Tailandia. El hecho de que la cadena consecutiva de atentados aconteciera solamente unos pocos días después de la aprobación en referéndum de la nueva Constitución impulsada por la Junta Militar hizo sospechar al Gobierno que algunos grupos opositores vinculados al ex primer ministro Thaksin Shinawatra pudieran tener algún tipo de relación con las explosiones, pero finalmente las autoridades tailandesas señalaron que el modus operandi y el tipo de armamento utilizado apuntaban a los grupos armados secesionistas que operan en el sur del país. Aunque ya había habido antecedentes en los que los grupos armados habían llevado a cabo ataques fuera de las tres provincias de mayoría musulmana (Yala, Pattani y Narathiwat) y Songkhla, como los atentados en un puesto policial en Phuket en diciembre de 2013 o en Koh Samui en 2015, algunos analistas apuntaron que **los atentados de agosto podrían evidenciar una intención de ampliar el radio de acción de la insurgencia y de atacar deliberadamente objetivos turísticos** (el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país) para lograr mayor atención o mayores concesiones en la mesa de negociación por parte del Gobierno. Finalmente, cabe destacar que siguieron produciéndose denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el sur del país, amparadas por leyes de excepcionalidad. En este sentido, en enero tres ONG denunciaron el uso de la tortura contra presuntos insurgentes. Por su parte, también a principios de año el Gobierno declaró estar investigando la existencia de vínculos de los grupos insurgentes con organizaciones foráneas, después de que presuntos miembros de Estado Islámico hubieran visitado la región para fomentar el extremismo religioso y la adhesión a ISIS.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto armado en el este de Ucrania asistió a una clara reducción de la mortalidad y de los enfrentamientos, si bien continuó sin perspectivas de resolución.⁸⁸ En

términos globales, entre enero y mediados de noviembre murieron más de 600 personas, incluyendo Fuerzas Armadas ucranianas, fuerzas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y civiles, y hubo en torno a 2.000 heridos, en contraste con los más de 4.400 fallecidos y 11.000 heridos de 2015. Además, 82 de los fallecidos fueron civiles (227 civiles fallecidos en 2015). La cifra acumulada de víctimas combatientes y civiles desde el inicio de la guerra en abril de 2014 se eleva a 9.733 fallecidos –incluyendo en torno a 2.000 civiles– y 22.720 heridos, según los balances de la Oficina del ACNUDH de mediados de noviembre. Además, en 2016

Se asistió a una reducción significativa de la violencia y las víctimas mortales en la guerra en Ucrania, si bien el proceso de paz continuó sin avances

se desplazaron internamente 106.000 personas, lo que sumado al desplazamiento interno previo supuso una cifra total de 1,7 millones de personas desplazadas internas, según cifras de mediados de 2016.⁸⁹ Durante el año se registraron hostilidades, especialmente en áreas de Donetsk y en menor medida de Lugansk, pese a los sucesivos altos el fuego.⁹⁰ La misión de la OSCE detectó en abril un incremento del uso de armamento pesado y la Oficina del ACNUDH alertó de graves violaciones del alto el fuego desde mediados de ese mes. Se asistió a una escalada entre junio y agosto, con un aumento de la violencia en torno a zonas residenciales en localidades como Avdiivka y Mariinka. **El acercamiento de posiciones militares de las partes en conflicto generó alarmas, por los riesgos de la vuelta a una guerra de gran escala.** La consecución de una tregua que entró en vigor el 1 de septiembre con motivo del curso escolar, y de un acuerdo para la creación de diversas zonas desmilitarizadas contribuyeron a desescalar la situación.

No obstante, la contienda empeoró de nuevo a partir de octubre, multiplicándose las violaciones del alto el fuego y el uso de armamento no permitido por los acuerdos de paz. Los bombardeos en noviembre se concentraron en áreas como el aeropuerto de Donetsk, Yasynuvata y Avdiivka; zonas al norte y oeste de Horlivka; y en torno al eje estratégico de Debaltsevo y Svitlodarsk; zonas al este y noreste de Mariupol; y en el oeste de Lugansk. Como en 2015, **se alcanzó una tregua en diciembre, que entró en vigor el día 24, si bien se denunciaron incidentes en fechas posteriores.** Tanto en áreas bajo control del Gobierno como de las fuerzas rebeldes se registraron violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de violencia sexual en lugares de cruce entre ambos territorios. Por otra parte, medios de comunicación apuntaron a un supuesto incremento de discrepancias dentro de las filas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En paralelo, las fuerzas separatistas hicieron frente a diversas bajas de varios altos miembros, como Dmitry Kargayev, asesor del líder rebelde de Lugansk, y Arsen Pavlov (alias Motorola), uno de los líderes de Donetsk. Se informó también de intentos de asesinato de los líderes separatistas Alexander Zakharchenko (Donetsk) e Igor Plotnitsky (Lugansk). Las autoridades rebeldes acusaron a Ucrania de estar detrás de los incidentes. **El conflicto armado transcurrió en un contexto de crisis interna y tensión internacional entre Ucrania y Rusia relativa a Crimea, así como entre instituciones euroatlánticas (diversos gobiernos europeos, OTAN) y Rusia.**⁹¹ Entre otras circunstancias, la OTAN aprobó en julio el despliegue de cuatro batallones en los países bálticos y Polonia y otras medidas en el Mar Negro, el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría; y Rusia desplegó en agosto en Crimea un sistema avanzado de defensa antimisiles.⁹²

88. Véase el resumen sobre Ucrania en el capítulo 3 (Procesos de paz).

89. IDMC, *Ukraine*, Global Internal Displacement Database, IDMC.

90. Véase el resumen sobre Ucrania en el capítulo 3 (Procesos de paz).

91. Véase el resumen sobre Ucrania – Rusia en el capítulo 2 (Crisis socio-políticas).

92. Véase el resumen sobre Ucrania – Rusia en el capítulo 2 (Tensiones).

Rusia y Cáucaso

Rusia (Daguestán)	
Inicio:	2010
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La insurgencia armada de corte islamista salafista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada se ha articulado en torno a diversas estructuras, como la red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammát, y posteriormente a través de Vilayat Daguestán, ambas integradas en la insurgencia del norte del Cáucaso (Emirato Caucásico). A partir de finales de 2014 diversos comandantes de Daguestán y el norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose de Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se ha desplazado a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y la corrupción y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

La violencia vinculada al conflicto armado entre fuerzas armadas locales y federales y la insurgencia islamista en Daguestán se mantuvo en niveles reducidos. Así, en 2016 murieron en torno a 140 personas –según estimaciones de Caucasian Knot–, cifra ligeramente superior a la del año anterior (126 víctimas mortales en 2015), pero inferior a las de años previos (en torno a 200 en 2014, 340 en 2013, 405 en 2012).⁹³ La mayor parte de víctimas mortales fueron insurgentes (más de 110 insurgentes, frente a una veintena de integrantes de las fuerzas de seguridad, y menos de una decena de civiles). Se sucedieron los hechos de violencia, incluyendo ataques insurgentes en diversas localidades y operaciones contrainsurgentes. El grupo armado ISIS reivindicó diversos ataques, en línea con la adscripción reciente a ISIS de gran parte de la insurgencia del norte del Cáucaso. Entre los incidentes reivindicados por ISIS, cabe mencionar un ataque con coche bomba en el distrito de

Derbent en febrero hirió a una docena de personas y causó varias víctimas mortales. Asimismo, en enfrentamientos en mayo, más de una quincena de policías resultaron heridos y varios policías e insurgentes murieron, hechos en los que ISIS se atribuyó participación. En diciembre **los servicios de seguridad rusos afirmaron haber matado al líder de la rama de ISIS en el Cáucaso, Rustam Aselderov** (alias Sheikh Abu Mohammad al-Qadari), y a varios insurgentes en una operación junto a la capital daguestaní, Makhachkala. Aselderov había proclamado su lealtad a ISIS en diciembre de 2014, y fue nombrado emir del norte del Cáucaso. Se le atribuyen atentados como un doble ataque que mató a 34 personas en la ciudad rusa de Volgogrado en 2013, cometido bajo su militancia anterior en la insurgencia Emirato Caucásico.

Por otra parte, durante el año **las autoridades continuaron con medidas de presión y hostigamiento contra sectores salafistas de la población civil**, acusados con frecuencia de pertenencia o colaboración con la insurgencia, sin fundamento legal, y sometidos a prácticas como detenciones e interrogatorios, arrestos masivos, registros de mezquitas y destrucción de propiedad, como denunciaron organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Así lo alertó Human Rights Watch en su informe anual que hace referencia al periodo 2016.⁹⁴ Diversas organizaciones y activistas han denunciado también en los últimos años prácticas abusivas como falsos positivos (asesinatos de civiles varones jóvenes encubiertos como asesinatos de insurgentes) a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2016 se produjeron nuevas detenciones y acusaciones contra población civil salafista. Entre otros hechos, fue detenido en febrero un imam salafista en Derbent. Ese mismo mes el cierre de otra mezquita en Jasaviurt desencadenó protestas de varios miles de personas. A finales de octubre se detuvo a medio centenar de personas junto a una mezquita en la capital.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y

93. Caucasian Knot, *Infographics. The Statistics of the Number of Victims in the North Caucasian Federal District Regions for the Period of 6 years*, CK.

94. Human Rights Watch, *World Report 2017. Events of 2016*, HRW, 2017.

el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Se deterioró gravemente el conflicto armado entre el Estado turco y la insurgencia kurda, a lo que se añadieron otros frentes de conflictividad en el país, como un intento de golpe de Estado militar y atentados de gran escala atribuidos a ISIS. En 2016 murieron a causa del conflicto al menos 1.830 personas, según datos de International Crisis Group (260 civiles, 777 combatientes del PKK, 654 miembros de las fuerzas de seguridad y 139 jóvenes sin afiliación clara).⁹⁵ Desde el reinicio de la guerra en julio de 2015, el total de muertes por el conflicto se eleva a 2.495 personas.⁹⁶ Durante 2016 continuaron las operaciones especiales militares y policiales en núcleos urbanos del sudeste de Turquía, ampliadas a nuevos distritos en febrero y marzo. La guerra urbana supuso un incremento marcado de víctimas mortales entre febrero y mayo, y el desplazamiento de decenas de miles de personas. El Estado turco desplegó 20.000 fuerzas de seguridad adicionales en el sudeste en marzo. Las autoridades anunciaron en junio el fin de las operaciones urbanas y el inicio de una fase de reconstrucción. El movimiento kurdo, por su parte, denunció la continuación de operaciones en diversos distritos, así como la política de demolición y expropiación forzosa de edificios en el sudeste y de destrucción de infraestructura, desplazamiento y bloqueo de ayuda humanitaria. **Ya desde mayo, y especialmente en la segunda mitad del año, se redujo la dimensión urbana de la guerra y recrudeció la violencia en áreas rurales,** con protagonismo de la rama militar del PKK (HPG). Continuaron los bombardeos del Ejército contra el PKK en el sudeste y norte de Iraq. Entre los múltiples hechos de violencia vinculados al PKK, 217 personas (incluyendo 60 civiles) resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra una comisaría en Elazig (provincia homónima) en agosto, en un ataque reivindicado por el PKK; otros 73 resultaron

La situación de conflictividad en Turquía asistió a una escalada, con un grave deterioro del conflicto armado Turquía-PKK, que causó más de un millar de víctimas mortales

heridos en otro atentado con coche bomba contra un edificio policial en Ipekyolu (provincia de Van) en agosto; un ataque con camión bomba contra un puesto policial en Cizre en agosto mató a 11 policías e hirió a 78 personas, tras lo que el Gobierno declaró la guerra total contra el PKK; 53 personas resultaron heridas a causa de otro ataque con coche bomba contra un control policial junto a la sede del AKP en Van al inicio de la festividad musulmana de Eid al-Adha. Así, los ataques del PKK se dirigieron mayoritariamente contra objetivos policiales y militares, con impactos también en la población civil. El aumento de las acciones del PKK fue interpretado como una estrategia de aprovechar el vacío de seguridad tras el fallido golpe de Estado en Turquía en julio, al que siguieron purgas masivas en las fuerzas de seguridad.

El conflicto también escaló de la mano de los ataques de gran escala del grupo TAK (considerado una escisión del PKK por algunas fuentes, y un grupo vinculado al PKK por otras), con más de un centenar de víctimas mortales y más de medio millar de personas heridas.

Los atentados del TAK en 2016 incluyeron un atentado en febrero contra un autobús militar en Ankara, con 29 muertos y 61 heridos; coche bomba en Ankara en marzo, con 36 muertes y más de un centenar de heridos; atentado contra la Gran Mezquita de Busra, con 13 personas heridas; atentado suicida en Estambul en junio contra un vehículo policial, con 12 muertes (incluyendo 5 civiles) y más de 30 heridos; ataque con bomba junto a una comisaría en Estambul en octubre, con 10 civiles heridos; atentado con coche bomba contra una comisaría en Diyarbakir en noviembre, con 11 muertes y más de un centenar de heridos; doble ataque con bomba junto al estadio de fútbol del club Besiktas en Estambul en diciembre, con 45 muertes y más de 150 heridos; atentado en la provincia de Kayseri (centro) contra un autobús que transportaba soldados de servicio, con 15 soldados muertos y 56 heridos. En paralelo, se produjeron también ataques de supuestos militantes del PKK contra objetivos políticos, con algunas víctimas mortales. También sedes del pro-kurdo HDP fueron objeto de ataques.

Por otra parte, **el conflicto en torno a la cuestión kurda también tuvo una plasmación de grave incremento de la persecución contra sectores no armados del movimiento kurdo.** Así, entre otros hechos, las autoridades turcas intervinieron 28 ayuntamientos en septiembre, reemplazando a alcaldes electos por funcionarios, acusándoles de desviar recursos al PKK; suspendió de su cargo a 11.000 profesores por supuestos vínculos con el grupo; y ordenó el cierre de más de 190 asociaciones, acusadas de los mismos cargos. Además, fueron detenidos los co-alcaldes de Diyarbakir (entre muchos otros alcaldes), los co-líderes

95. International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: The Raising Toll*.

96. Ibid.

del partido pro-kurdo HDP y numerosos parlamentarios. El movimiento kurdo, cuyos representantes políticos llamaron al diálogo y al silencio de las armas en repetidas ocasiones durante el año, instaron a movilizaciones y “resistencia” en las calles contra las medidas de persecución política y social. El antagonismo militar y político-social entre el Estado y el movimiento se reflejó también en un nuevo plan del Gobierno anunciado en febrero, que descartó el diálogo con el PKK o sectores afines y se centró en cambio en la aniquilación del grupo y en el desmantelamiento de su tejido social. El PKK a su vez amenazó con extender la guerra por el territorio de Turquía y aumentar su intensidad y descartó negociaciones en las condiciones existentes. **El deterioro del conflicto entre Turquía y el PKK transcurrió además en un año convulso para Turquía, con múltiples frentes de conflictividad, incluyendo atentados de gran escala atribuidos a ISIS; el intento de golpe de Estado militar, atribuido al movimiento religioso Hizmet; y otros hechos de violencia política así como violaciones de derechos humanos.**⁹⁷ Las dinámicas del conflicto kurdo se vieron también fuertemente influidas por el contexto regional y la guerra en Siria. Turquía inició una intervención militar en su país vecino en agosto, con despliegue de tropas propias y apoyo a grupos armados, con el fin –entre otros objetivos– de frenar los avances del grupo kurdo YPG, vinculado al PKK, y se sumó a las iniciativas diplomáticas de Rusia, presionando para aislar a los actores kurdos sirios, aliados de EEUU. Ankara también desplegó fuerzas en Iraq e intentó implicarse en la ofensiva contra ISIS en Mosul, pese a la negativa de Bagdad. El PKK/KCK, por su parte, trató de consolidar su presencia en Siria e Iraq, de la mano de sus organizaciones regionales.⁹⁸

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita,
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría chií,

iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

La situación en Yemen continuó deteriorándose a lo largo del año, con **elevados niveles de violencia que tuvieron un devastador impacto en la población civil.** Según estimaciones de la ONU, el conflicto armado que desde marzo de 2015 enfrenta principalmente a los al-houthistas en alianza con las fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh con las tropas del Gobierno yemení de Abdo Rabbo Mansour Hadi apoyadas por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita había causado la muerte de al menos 10.000 personas hasta finales de 2016 (de las cuales unas 6.000 habrían fallecido el año anterior). Se trata, según ha reconocido la agencia humanitaria de la ONU, de estimaciones a la baja a partir de las informaciones procedentes de los centros de salud que han podido continuar documentando las víctimas de la guerra, en un contexto de grave destrucción de las infraestructuras sanitarias producto de las hostilidades. El conflicto armado tuvo otras graves consecuencias, como un **aumento en los niveles de desplazamiento forzado interno –más de tres millones de personas a finales de 2016–, un incremento de las necesidades de ayuda humanitaria –un total de 19 millones de personas, equivalentes a un 80% de la población del país, requería asistencia a finales de año– y un empeoramiento en los niveles de desnutrición,** en un país dependiente en un 90% de la importación de alimentos y con graves problemas de escasez de agua. Según datos de OCHA, medio millón de niños y niñas padecían desnutrición severa y se estima que unos 10.000 menores han muerto de enfermedades prevenibles desde marzo de 2015. Desde principios de 2016 y en diversas ocasiones a lo largo del año, Arabia Saudita fue señalada –entre otros por un panel de expertos de la ONU y otras investigaciones– por su responsabilidad en ataques sistemáticos a civiles en

97. Véase el resumen sobre Turquía en el capítulo 2 (Tensiones).

98. Véase el resumen sobre Siria e Iraq en este capítulo y sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones).

la guerra de Yemen. Según un informe de Yemen Data Project dado a conocer en septiembre, uno de cada tres ataques de la coalición internacional liderada por Riad había tenido como objetivos blancos civiles, entre ellos escuelas, hospitales, mezquitas, mercados, zonas residenciales y otras infraestructuras. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también encontró indicios creíbles sobre el uso de bombas de dispersión por las fuerzas de la coalición.⁹⁹ La ONU y organizaciones de derechos humanos también denunciaron a las fuerzas al-houthistas por abusos como ataques indiscriminados en áreas civiles, uso de minas y agresiones con francotiradores. Asimismo, a lo largo de 2016 se intensificaron las denuncias sobre el reclutamiento de menores soldados en el marco del conflicto armado. De los 559 casos documentados entre julio de 2015 y mayo de 2016, la mayoría habían sido reclutados por los Comités Populares vinculados a las fuerzas al-houthistas.

En el plano militar, no se produjeron cambios significativos en los frentes de combate. **Durante el primer semestre las hostilidades transcurrieron en paralelo a los intentos por encauzar las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU.**¹⁰⁰ El cese el fuego que había sido acordado a finales de diciembre de 2015 tras una ronda de conversaciones en Suiza no fue respetado por las partes y derivó en una escalada de enfrentamientos a principios de año. En los meses siguientes un nuevo acuerdo de tregua permitió el inicio de negociaciones en Kuwait, en abril, así como algunos intercambios de prisioneros entre las fuerzas al-houthistas y Arabia Saudita. No obstante, los combates persistieron y fueron especialmente intensos en algunas zonas, como Taiz, ciudad asediada por las fuerzas al-houthistas desde 2015. Adicionalmente, se produjeron enfrentamientos y ofensivas en la capital, Sanaa, en Maarib, Nihm, Lahj, Shabwa y Hajjah. En esta última provincia se produjo uno de los episodios más cruentos del año, cuando dos ataques aéreos de la coalición saudí en un mercado provocaron la muerte de 120 civiles, incluyendo 22 menores, en marzo. El segundo semestre estuvo marcado por un aumento de la violencia tras la ruptura de las negociaciones, en agosto. La coalición liderada por Riad retomó sus ofensivas aéreas contra Sanaa y otras áreas del norte del país, mientras que las fuerzas al-houthistas intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita, que afectaron principalmente las zonas fronterizas causando más de un centenar de víctimas saudíes hasta finales de 2016. En este contexto, en octubre, un nuevo ataque aéreo de la coalición saudita perpetrado contra un funeral en Sanaa causó la muerte a más de 140 personas y dejó heridas a otras 600. La ofensiva se produjo durante la ceremonia fúnebre del

Desde marzo de 2015 y hasta finales de 2016, el conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Hadi, apoyado por Arabia Saudita, había causado al menos 10.000 víctimas mortales

padre de un ministro del bando al-houthista, provocó numerosas bajas entre representantes políticos, militares y tribales y llevó a analistas a advertir sobre su impacto en los esfuerzos por reactivar las negociaciones. Tras la ofensiva los al-houthistas lanzaron dos misiles contra territorio saudí, uno de los cuales alcanzó la base militar de Taif ubicada a más de 500 kilómetros de la frontera. En este contexto, EEUU lanzó su primer ataque sobre territorios controlados por los al-houthistas que destruyó tres radares en la costa yemení después de un presunto ataque fallido contra un barco estadounidense apostado en el Mar Rojo. No obstante, los al-houthistas negaron tener responsabilidad en este ataque y acusaron a EEUU de utilizarlo como excusa. Washington descartó tener la intención de implicarse de manera más directa en este conflicto. A finales de año, las hostilidades se centraban en Taiz, Hodeida y los alrededores de Sanaa. Los al-houthistas mantenían el control de la capital, la zona norte del país y la mayor parte de la costa del Mar Rojo. El resto del país se encontraba bajo el control nominal del Gobierno de Hadi, con sede en Adén (sur). No obstante, la zona meridional se vio afectada por una intensa actividad de grupos como AQPA e ISIS, que durante el año se enfrentaron a las fuerzas de Hadi y protagonizaron múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad.¹⁰¹

Cabe destacar que tras la consternación causada por el ataque saudí al funeral en Sanaa –que Arabia Saudita atribuyó a una información errónea que identificó el sitio como un objetivo militar– volvieron a intensificarse las críticas a la cooperación occidental con la coalición liderada por Riad. Tras la ofensiva, EEUU advirtió que su cooperación con el reino no suponía un “cheque en blanco” y que revisaría su asistencia militar y logística a la coalición. Pese a los flagrantes indicios de violaciones al derecho internacional humanitario y el elevado número de víctimas civiles en el conflicto yemení, EEUU y varios países europeos –entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania o España– continuaron proveyendo armas, apoyo logístico y/o de inteligencia a Arabia Saudita o pretendían continuar proporcionando arsenales al país, que incrementó en un 275% sus compras de armas en el período 2011-2015, según los datos de SIPRI. Sólo EEUU había vendido cerca de 22.200 millones de dólares en armas a Riad desde el inicio de la campaña militar en marzo de 2015. Paralelamente, continuaron las versiones sobre el presunto apoyo iraní a los al-houthistas –incluyendo informaciones sobre provisión de armas– sin que pudiera confirmarse con claridad su alcance. Cabe destacar también que los intentos por forzar una investigación independiente de los abusos contra civiles en Yemen se vieron obstaculizados. El Gobierno holandés solicitó una

99. Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen: Report of the UN High Commissioner for Human Rights, A/HRC/33/38, 4 de agosto de 2016.

100. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 3 (Procesos de paz).

101. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

acción en esta línea en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fue bloqueada por Reino Unido y derivó en una propuesta menos ambiciosa presentada por Eslovaquia en nombre de la UE. Arabia Saudita también presionó para ser excluida de una lista de países que violan los derechos de los menores después de que un informe de la ONU determinara que la coalición liderada por Riad era responsable del 60% de las muertes de niños y niñas en el conflicto yemení.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011 grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país.

Siguiendo la tendencia del año anterior, a lo largo de 2016 **AQPA y también la reciente filial de ISIS en Yemen continuaron aprovechando el clima general de caos y violencia en el país para persistir en sus acciones, principalmente en la zona sur y este.**¹⁰² Si en 2015 se produjeron diversos enfrentamientos con las fuerzas

al-houthistas que intentaban avanzar a esta región del país, en 2016 se registraron combates con fuerzas anti al-houthistas vinculadas al Gobierno de Hadi instalado en Adén, así como numerosas ofensivas y ataques explosivos contra miembros de las fuerzas de seguridad y reclutas. Durante el primer trimestre del año se observó una expansión de la actividad de estos grupos. ISIS reivindicó varios ataques suicidas, uno de los cuales dejó 13 reclutas fallecidos en febrero y otro dejó 26 personas muertas en un puesto de control en marzo. Paralelamente, AQPA capturó varias ciudades en las provincias de Shebwa y Abyan y protagonizó combates con fuerzas pro-gubernamentales en áreas como Mansoura. En este contexto, algunas informaciones y análisis advirtieron que AQPA controlaba unos 600 kilómetros de costa y estaba intentando configurar una especie de mini-Estado en Mukalla, un puerto de medio millón de habitantes ubicado en el sureste del país y capital de la provincia de Hadramaut. Los combatientes de AQPA aprovecharon el repliegue de las fuerzas de seguridad de Mukalla tras la intensificación del conflicto entre el Gobierno de Hadi y los al-houthistas en 2015 para tomar el control de esta localidad, donde abolieron impuestos, pusieron en marcha actividades de propaganda sobre acciones del grupo para reconstruir carreteras y abastecer a hospitales en las áreas bajo su control, y asumieron algunas actividades económicas vinculadas al contrabando y la provisión de combustible.¹⁰³ No obstante, **en abril las fuerzas pro-Hadi con apoyo de la coalición y, en particular, de tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzaron una ofensiva y retomaron el control de Mukalla y sus alrededores.** En este sentido, algunos análisis destacaron que en el seno de la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita se estaba dando un reparto de funciones, con Riad focalizado en el norte –principalmente en la provincia de Maarib y en áreas a lo largo de la frontera– y EAU centrado en el sur, intentando ayudar a que las fuerzas de Hadi consoliden presencia y control en la zona meridional del país.¹⁰⁴ Además de este papel significativo de las fuerzas de EAU, que también participaron en la detención de sospechosos de pertenecer o tener vínculos con AQPA, cabe mencionar que EEUU continuó teniendo también un rol destacado en este conflicto a través de sus ofensivas aéreas. A lo largo de 2016 se informó de diversos ataques con aviones no tripulados que causaron decenas de muertes. Una de estas ofensivas provocó la muerte a 54 presuntos milicianos de AQPA en Mukalla, en marzo; un nuevo ataque en la localidad de Zinjibar habría causado la muerte de tres dirigentes de la filial de al-Qaeda en Yemen, en abril; y otra ofensiva aérea en la provincia de Shebwa habría dejado otros 13 milicianos fallecidos, en agosto. A finales de año, EEUU informó que había dado muerte a otros 28 combatientes de AQPA en un total de nueve ataques entre septiembre y diciembre de 2016. Algunas ofensivas estadounidenses también tuvieron como objetivo células de ISIS.

102. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

103. Yara Bayoumi, Noah Browning y Mohamed Ghobari, “How Saudi Arabia’s war in Yemen has made al-Qaeda stronger and richer”, Reuters Special Report, 8 de abril de 2016.

104. Adam Baron, *Yemen’s forgotten war: How Europe can lay the foundations for peace*, European Council on Foreign Relations, diciembre de 2016.

Pese a estas acciones, ISIS y AQPA se mantuvieron activos durante todo el año y reivindicaron numerosas ofensivas en Mukalla y en Adén. AQPA reclamó la autoría de ataques contra fuerzas gubernamentales en el este de Mukalla en mayo y de dos ataques suicidas contra puestos militares que causaron 11 fallecidos en esta ciudad en julio. ISIS reivindicó una serie de cruentas acciones: un ataque con coche bomba que mató a 40 reclutas del Ejército en Adén en mayo; varios atentados suicidas que dejaron al menos 42 víctimas mortales en Mukalla en junio; otro ataque suicida contra la sede de una milicia progubernamental que resultó en 60 personas fallecidas en Adén en agosto; y otras dos ofensivas en esta ciudad que habrían dejado un centenar de soldados muertos en diciembre. Aunque el balance de la letalidad de este conflicto es difícil de precisar, en parte por la falta de información sistemática y contrastada y por la superposición de dinámicas de violencia en el país, estimaciones parciales y preliminares indican que la cifra anual superaría las 400 víctimas mortales. La situación de inestabilidad en esta zona del país también evidenció las dificultades del Gobierno de Hadi para mantener la seguridad en las áreas nominalmente bajo su control. En este contexto, International Crisis Group destacó que AQPA –y en menor medida la emergente filial de ISIS en Yemen–, se ha convertido en el actor que ha sacado más ventaja de la grave situación de inestabilidad en el país. El think tank subrayó que AQPA estaba en una posición más fuerte que nunca y que está apostando por una estrategia pragmática, forjando alianzas con sectores suníes e involucrándose en actividades de contrabando, frente a una filial de ISIS que con sus tácticas más brutales estaba teniendo menos éxito en la captación de reclutas o el control de territorios.¹⁰⁵

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad

entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El Sinaí siguió siendo **escenario de continuos hechos de violencia a lo largo de 2016, principalmente en localidades de la zona norte de esta región, como Sheikh Zuweid, Rafah y El-Arish**, aunque también se registraron episodios en otras áreas del territorio egipcio como El Cairo, Giza, o Hurghade (en la costa del Mar Rojo). La violencia se concretó en forma de ataques, tiroteos, detonaciones de artefactos explosivos, emboscadas, ofensivas en zonas turísticas, enfrentamientos y operaciones terrestres y aéreas de las fuerzas de seguridad en el marco de su campaña “Martyr’s Right”, iniciada en 2015. Las acciones de grupos armados fueron reivindicadas mayoritariamente por la filial de ISIS en la región, el ex grupo Ansar Beit al-Maqdis rebautizado como Provincia del Sinaí. No obstante, algunas acciones también fueron reclamadas por otras organizaciones como Ajnad Misr, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam (estos dos últimos anunciaron su existencia en 2016). La filial de ISIS fue la más activa, con un promedio de 39 ataques reivindicados cada mes entre enero y septiembre, según los datos recopilados por el Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP). Estas cifras representan un aumento respecto a 2015, cuando se contabilizó un promedio de 21 ataques mensuales. El balance de víctimas de las hostilidades es complejo de precisar debido a la ausencia de una cobertura informativa independiente del conflicto y las dificultades para contrastar las cifras aportadas por las autoridades. **Según balances no oficiales a partir de informaciones de prensa, la cifra de fallecidos por el conflicto en 2016 superaría las 650 personas.** Según los datos de TIMEP, desde el inicio de la operación Martyr’s Right en septiembre de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016 las autoridades habían dado muerte a más de un millar de presuntos “terroristas”, de los cuales unos 400 habrían fallecido entre enero y marzo de 2016. Entre el segundo y tercer trimestre de 2016 las fuerzas egipcias habrían dado muerte a otros 1.500 combatientes. No obstante, el TIMEP apuntó que estas cifras parecen incongruentes con los datos sobre el contingente de ISIS en Sinaí que, según estimaciones

105. International Crisis Group, *Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base*, Middle East Report no.174, 2 de febrero de 2017.

de EEUU e Israel oscilaría entre los 600 y el millar de combatientes –la BBC elevaba esta cifra a entre 1.000 y 1.500 efectivos. En este sentido, se ha apuntado que no está claro si las autoridades egipcias están apuntando en sus operaciones más allá de los milicianos activos del grupo, si están inflando las cifras de bajas en el conflicto o si el grupo armado es capaz de reemplazar rápidamente a los combatientes fallecidos. Cabe destacar también que a lo largo de 2016 se informó de diversas bajas entre población civil en el marco del conflicto, ya sea por encontrarse en medio de enfrentamientos, por incidentes con explosivos o como consecuencia de asesinatos por su presunta colaboración con el Ejército o por su filiación religiosa, como en el caso del asesinato de dos sacerdotes en junio y julio o la decapitación de un clérigo súfi en noviembre. En esta línea, uno de los episodios más destacados del año fue el atentado con bomba en una iglesia copta en El Cairo en diciembre, en una acción reivindicada por ISIS que causó la muerte a 25 personas.

Entre otros hechos relevantes del año destacan el ataque con mortero contra policías en El Arish que dejó 15 efectivos fallecidos en marzo y que llevó al presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, a convocar una reunión de seguridad de emergencia para coordinar las acciones del Ejército y la Policía. En agosto, las autoridades aseguraron haber dado muerte al presunto líder del grupo Provincia del Sinaí, Abu Duaa al-Ansari, en un ataque aéreo en el norte del Sinaí en el que habrían muerto también otros 45 milicianos. Según informaciones de prensa, al-Ansari era sospechoso de estar involucrado en el atentado contra el avión ruso que cubría la ruta de Sharm el-Sheikh a Moscú y que causó 224 víctimas mortales en octubre de 2015. En esta línea, cabe destacar la caída en mayo de un avión de Egyptair que cubría la ruta París-El Cairo y que resultó en la muerte de 66 personas. Las investigaciones no descartaban un atentado y hacia finales de año algunos indicios apuntaban al hallazgo de explosivos. Durante el último trimestre se intensificaron los ataques contra policías y soldados. Una de las ofensivas, reivindicada por ISIS, acabó con la muerte de 12 militares en un puesto de control en Bir-al-Abd, en el primer ataque de envergadura ocurrido en la parte central de la provincia del Sinaí. Asimismo, se informó del asesinato o intento de asesinato de varios altos cargos militares. En este contexto, a lo largo del año el Gobierno egipcio fue renovando periódicamente el estado de emergencia en el Sinaí. Asimismo, la procuraduría general presentó en noviembre cargos contra 292 presuntos milicianos de ISIS acusados de formar 22 células. De este grupo, 151 se encontraban en custodia. Adicionalmente, cabe destacar que a lo largo de 2016 ISIS continuó con sus intentos de explotar la frustración y las divisiones en el seno de los Hermanos Musulmanes (HM) en un contexto de intensa represión por parte del régimen.¹⁰⁶ El grupo emitió videos de propaganda dirigidos a jóvenes de

los HM en los que los interpeló para que rechacen los medios pacíficos y se unan a combatir en sus filas.¹⁰⁷

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU; Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, Iraq continuó siendo escenario de elevadísimos niveles de violencia que se cobraron la vida de miles de personas en 2016, en el marco de un conflicto armado que enfrentó principalmente al grupo armado ISIS con un conjunto de fuerzas integrado por tropas gubernamentales, milicias chiíes apoyadas por Irán, milicias sunníes, combatientes kurdos (peshmergas) y la coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU. Los hechos de violencia tuvieron lugar en distintos puntos del país, pero se concentraron en las provincias de Badgad, Anbar y Nínive, y se materializaron en ataques suicidas, detonación de artefactos explosivos, enfrentamientos entre los diversos actores en pugna y ataques aéreos, entre otros episodios, con un gran impacto en la población civil. **Según la organización**

106. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

107. Mostafa Hashem, "The Great Brotherhood Divide", *Sada*, 2 de marzo de 2016.

Iraq Body Count (IBC), la cifra total de civiles fallecidos a causa de la violencia en el país ascendió a 16.361 personas en 2016, es decir, un promedio de alrededor de 1.300 civiles fallecidos cada mes.

Este balance de mortalidad de civiles en 2016 es ligeramente inferior al de 2015 y 2014 –cuando se contabilizaron 17.578 y 20.218, respectivamente–, pero es posible que las cifras definitivas de 2016 sean superiores. La tendencia de los últimos tres años evidencia una intensificación sustancial de la violencia en Iraq en comparación con los años 2010-2012 (con un promedio de entre 4.100 y 4.600 víctimas anuales) y también con 2013, cuando se registraron 9.852 civiles fallecidos. Otros balances, como el de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) arrojan cifras más conservadoras, con un total de 6.878 civiles muertos y 12.388 heridos en 2016. No obstante, la propia misión reconoce que sus números deben ser considerados como un “mínimo absoluto” dada su incapacidad para verificar los informes sobre numerosas muertes y su imposibilidad de obtener información relativa a algunos de los principales escenarios de las hostilidades. Cabe destacar, además, que a las cifras de muertes entre la población civil se debe añadir el número de fallecidos entre los diversos actores armados, mucho más difícil de calcular, pero que se estima en miles de personas.

Según IBC, desde el inicio del conflicto armado en Iraq en 2003 y hasta 2016 habrían muerto un total de 280.000 personas, incluyendo combatientes, pero la gran mayoría –entre 170.000 y 190.000– serían civiles. Según el desglose de datos del año de IBC, hasta noviembre de 2016 un 77% de los civiles fallecidos eran hombres, 11% mujeres y 12% menores de edad. La principal causa de muerte de civiles fueron las ejecuciones (7.170) y un segundo factor los ataques aéreos y fuego de artillería (2.854).

En el plano militar, **la evolución del conflicto en Iraq durante 2016 se caracterizó por las campañas de las fuerzas gubernamentales para expulsar a ISIS de Falluja, durante el primer semestre, y de Mosul, en la segunda mitad del año,** ofensivas que fueron duramente resistidas por el grupo armado. La campaña para recuperar el control de Falluja, ubicada a tan solo 50 kilómetros de Bagdad y en manos de ISIS desde 2014, se inició a mediados de mayo. ISIS reaccionó lanzando una serie de contraataques y desplegando escuadrones de la muerte con la orden de ejecutar a cualquier persona que intentara huir o rendirse a las fuerzas gubernamentales. La ofensiva aérea y los combates provocaron numerosas bajas y generaron preocupación por el destino de la población atrapada en la ciudad y sus graves carencias humanitarias. A finales de junio las autoridades iraquíes anunciaron que Falluja había sido liberada,

La violencia en Iraq agravó la crisis humanitaria en el país y a finales de 2016 un total de 3,6 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado

aunque la localidad continuó siendo escenario de ataques esporádicos a lo largo del año. Ante un escenario de retroceso de las áreas bajo su control territorial, ISIS optó por intensificar su estrategia de atentados, principalmente en la capital iraquí y contra objetivos sensibles para la comunidad chií. Así, a principios de julio, el grupo armado reivindicó el mayor ataque sobre Bagdad desde el inicio de la guerra en 2003, con un devastador atentado con coche bomba en una concurrida calle comercial del distrito de Kerrada, de mayoría chií, que causó la muerte a 324 personas. En los meses siguientes, las fuerzas gubernamentales avanzaron posiciones en el norte, rumbo a Mosul, y se libraron combates en zonas aledañas. La previsión de hostilidades en esta zona llevó a decenas de miles de personas a huir de sus

hogares. El 17 de octubre, el Gobierno iraquí anunció oficialmente el inicio de la campaña para recapturar Mosul, la segunda ciudad del país y clave para ISIS tanto por su valor simbólico –desde esta localidad el líder del grupo armado anunció la instauración del “califato” de ISIS– y estratégico –la pérdida de esta ciudad afectaría las rutas de suministro desde Iraq a las zonas controladas por ISIS en Siria. El grupo armado prohibió a la población abandonar Mosul y desplazó a unas 1.500 familias de áreas vecinas hasta la ciudad, ejecutó a decenas de

personas acusadas de traición o colaboración con las fuerzas iraquíes, sembró minas e incendió plantas químicas en los alrededores de la ciudad, utilizó a menores de edad con cinturones de explosivos en las zonas de penetración de las fuerzas gubernamentales y lanzó ataques contra otras localidades, como Kirkuk, en un intento por evitar la concentración de tropas en Mosul. Los peshmergas, milicias suníes y chiíes y tropas iraquíes con apoyo de la coalición internacional rodearon la ciudad y accedieron a algunos barrios en los meses siguientes. Las Unidades de Movilización Popular (UMP) chiíes –a las que se reconoció estatus legal dentro de las fuerzas iraquíes a finales de noviembre– tuvieron un rol decisivo en el control de Tal Afar, al oeste de Mosul, clave en la ruta de conexión con Siria. A finales de año, sin embargo, las fuerzas pro-gubernamentales no habían conseguido expulsar a ISIS de Mosul y según estimaciones de la UNAMI sólo en el primer mes de la campaña habían muerto casi 2.000 soldados iraquíes. En este contexto EEUU continuó incrementando su contingente en Iraq y en septiembre de 2016 ya contaba con 4.460 efectivos en el país. Cabe destacar que la campaña en Mosul también alentó tensiones entre Turquía e Iraq, ante la insistencia de Ankara de participar en la ofensiva y la negativa de Bagdad, que denunció la presencia de fuerzas turcas en Bashiqa, cerca de Mosul, como una violación a su soberanía.¹⁰⁸

108. Mostafa Hashem, “The Great Brotherhood Divide”, *Sada*, 2 de marzo de 2016.

La violencia en Iraq **intensificó la crisis humanitaria, con un aumento en los niveles de desplazamiento forzado. Según cifras de la ONU, a diciembre de 2016 más de 3,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares y 2,4 millones enfrentaban una situación de inseguridad alimentaria.** Agencias de la ONU y ONG internacionales denunciaron abusos de los actores armados, entre los que destacan las acusaciones a ISIS por genocidio y crímenes de guerra contra la población yazidí –a finales de 2016 se estimaba que el grupo mantenía cautivas a unas 1.900 personas, en su mayoría yazidíes– y por uso de menores en sus acciones, entre otras. Asimismo se alertó sobre acciones de venganza o represalia contra población suní por parte de milicias chiíes en zonas como Diyala o Falluja. Adicionalmente, cabe destacar que en paralelo a la evolución del conflicto armado Iraq atravesó una delicada situación política interna durante 2016, caracterizada por tensiones, pulsos de poder y expresiones de descontento popular ante la corrupción, el inmovilismo político y la peor crisis económica desde 2003. El clérigo Muqtada al-Sadr alentó movilizaciones populares contra la corrupción y las cuotas sectarias en política que llevaron a la instauración del estado de emergencia en Bagdad, en abril, después de que los manifestantes penetraran en la fortificada “zona verde” de la capital iraquí. El primer ministro Haider al-Abadi enfrentó numerosas dificultades para promover un cambio de gabinete y votos de no confianza a dos de sus ministros, en el marco de una pugna creciente con el ex primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. Finalmente, cabe mencionar que la responsabilidad occidental en la deriva del conflicto iraquí volvió a ocupar el centro de la atención en julio tras la publicación del informe Chilcot en Reino Unido, resultado de una investigación independiente que concluyó que diversos riesgos de la intervención en Iraq –como una lucha interna en el país, inestabilidad regional o una mayor actividad de al-Qaeda– habían sido explícitamente identificados antes de la invasión.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ¹⁰⁹
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

El conflicto palestino israelí registró niveles de violencia similares a los del año anterior, con **periódicos incidentes que según datos de la ONU provocaron la muerte de más de 120 personas durante 2016 –109 palestinos y 13 israelíes– y que, según las cifras disponibles hasta el mes de octubre, habían dejado heridas a otras 3.329 personas –3.166 de origen palestino y 163 israelíes.** El balance de fallecidos por el conflicto es ligeramente inferior al de 2015, cuando se contabilizó un total de casi 200 víctimas mortales –169 palestinas y 25 israelíes–, mientras que la cifra de personas heridas fue significativamente menor a la observada el año anterior, en el que se registraron 15.781 personas heridas (15.477 palestinas y 304 israelíes). A lo largo del año, la violencia se materializó en una serie de ataques palestinos contra civiles y fuerzas de seguridad israelíes y acciones de las fuerzas israelíes contra población palestina, enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén, además de algunos episodios de intercambio de fuego en Gaza.

La serie de ataques palestinos, algunos con armas blancas o en forma de atropellos deliberados, que se intensificaron a partir de octubre de 2015, fueron catalogados como parte de una “tercera intifada” –también bautizada como “intifada de los cuchillos”– y se caracterizaron por ser acciones individuales protagonizadas en su mayoría por jóvenes. Entre octubre de 2015 y marzo de 2016 se habían producido más de 300 incidentes de este tipo. Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron a estos ataques ejecutando a muchos de los agresores, en algunos casos a pesar de que ya no representaban una amenaza. Entre los episodios más destacados cabe mencionar como una jornada especialmente cruenta el 14 de febrero, cuando las fuerzas israelíes dispararon y dieron muerte a cinco palestinos –tres

109. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

de ellos adolescentes– mientras intentaban perpetrar ataques. A principios de junio, cuatro israelíes murieron y seis resultaron heridos después de que dos atacantes palestinos abrieran fuego en una zona comercial de Tel Aviv. Durante el año también se produjeron víctimas mortales durante operaciones de rastreo y redadas de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados y en algunos enfrentamientos en Cisjordania. En Gaza los principales hechos de violencia se produjeron en junio tras el descubrimiento de túneles desde la Franja a Israel, lo que derivó en bombardeos de las fuerzas israelíes contra objetivos de Hamas –la escalada se aplacó tras la mediación de Egipto– y durante el segundo semestre tras el lanzamiento de proyectiles por parte del grupo Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis –que habría declarado lealtad a ISIS–, lo que motivó nuevos ataques israelíes sobre Gaza.

Cabe destacar que estas dinámicas de violencia se produjeron en un trasfondo de creciente frustración de la población palestina, de derechización del Gobierno israelí y de algunos intentos por reactivar negociaciones de paz tendientes a la solución de dos Estados.¹¹⁰ En este contexto, a mediados de año el Cuarteto para Oriente Medio –integrado por EEUU, Rusia, la UE y la ONU– publicó su primer informe sobre el conflicto en el que identificó las principales amenazas para conseguir una solución pactada. Entre ellas señaló tres tendencias especialmente preocupantes. En primer lugar, la violencia continua, los ataques contra civiles y la incitación a la violencia. En segundo lugar, la incesante política de construcción de asentamientos israelíes –su número se ha más que doblado desde el inicio del proceso de Oslo y ha llevado a la presencia de 570.000 colonos en Cisjordania y Jerusalén–, la designación de zonas de uso exclusivo de Israel –70% de la “zona C” ha sido apropiado unilateralmente– y los obstáculos para el desarrollo palestino. Por último, la delicada situación de seguridad y humanitaria en Gaza, además de la falta de un liderazgo palestino unificado. Pese a las críticas, trascendió que Israel quedó conforme con el documento, que no constituye un mandato ni incluye referencias a las fronteras de 1967. La dirigencia palestina, en cambio, expresó su disconformidad con el informe y se mostró más proclive a la iniciativa promovida por Francia durante 2016, más en línea con la estrategia de la AP de internacionalización del conflicto.¹¹¹ El Gobierno israelí rechazó participar en la iniciativa francesa –

defendiendo negociaciones bilaterales– y profundizó en algunas políticas especialmente polémicas.

Convertido en el Gobierno más derechista de la historia de Israel –en especial tras la incorporación al gabinete del ultraderechista Avigdor Lieberman, líder del partido Yisrael Beitenu (Israel es Nuestro Hogar), como ministro de Defensa en mayo–, la administración de Netanyahu anunció planes para ampliar el muro de separación e intensificó su política de demoliciones de viviendas palestinas. **Según datos de la ONU a diciembre de 2016, las autoridades israelíes habían demolido o incautado 1.089 viviendas palestinas, provocando el desplazamiento forzado de 1.593 personas, las cifras más elevadas desde que OCHA comenzó a hacer seguimiento a este tema en 2009.** Adicionalmente, miembros del gabinete promovieron una controvertida iniciativa que pretende legalizar retrospectivamente decenas de asentamientos no autorizados construidos en terrenos privados palestinos –todos los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son ilegales según la ley internacional, pero Israel distingue entre los autorizados y los que no, según su propia legislación. Hasta finales de año la normativa había conseguido superar dos votaciones en la Knesset.

En este contexto, **el Gobierno israelí sufrió un revés al finalizar 2016 tras la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución (2334) que denuncia los asentamientos israelíes como una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados** y reafirma que no se aceptarán modificaciones a las fronteras previas a 1967 sin que sean resultado de negociaciones. La aprobación de la resolución por el Consejo –la primera sobre el conflicto desde 2009 y sobre los asentamientos desde 1980– fue posible por la abstención de EEUU, que tradicionalmente había vetado este tipo de iniciativas y que en esta ocasión optó por la abstención, en el marco de una creciente tensión entre el Gobierno de Barack Obama y el de Netanyahu. No obstante, el Gobierno israelí se mantenía a la expectativa de la llegada al poder de Donald Trump, que anunció su decisión de adoptar una serie de medidas favorables a los intereses israelíes, entre ellas un cambio de la sede de la embajada estadounidense a Jerusalén. La victoria de Trump en EEUU también alentó a diversos miembros del gabinete israelí a apostar públicamente por aprovechar la nueva coyuntura para pensar en un futuro sin perspectivas de un Estado palestino.

Al finalizar 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que denuncia los asentamientos israelíes como una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la solución de dos Estados

110. Véase “Israel-Palestina: la agonía de la solución de dos Estados y el riesgo de mayor violencia a 50 años de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

111. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 3 (Procesos de paz).

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), al-Shamia Front, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha complejizado y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional.

La guerra en Siria continuó agravándose en 2016 y siguió caracterizándose por la multiplicidad de actores armados involucrados, la proyección de intereses regionales e internacionales en el conflicto y elevadísimos niveles de violencia que tuvieron un especial impacto en la población civil durante el año. Según estimaciones del Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), entre **unas 50.000 y 60.000 personas habrían muerto producto de las hostilidades en 2016, de las cuales unas 13.000 serían civiles. Los datos de la Syrian Network for Human Rights (SNHR) elevan esta última cifra a casi 17.000, entre las cuales contabilizan a casi 4.000 menores y 2.500 mujeres.**¹¹² A lo largo de 2016 numerosos informes

A lo largo de 2016 numerosos informes de la ONU y de organizaciones internacionales denunciaron los sistemáticos abusos a las leyes internacionales de derechos humanos y al derecho humanitario en Siria, escenario de ataques indiscriminados contra la población civil

de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron los sistemáticos abusos a las leyes internacionales de derechos humanos y al derecho humanitario en Siria, escenario de ataques indiscriminados, pero también deliberados, contra la población civil.¹¹³ Informes de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria y de Amnistía Internacional documentaron las sistemáticas y masivas muertes de personas en centros de detención controlados por el régimen –casi 18.000 desde 2011, según datos de Amnistía– y alertaron también sobre las ejecuciones sumarias de civiles a manos de otros actores armados, como ISIS, Frente al-Nusra, al-Shamia Front y Ahrar al-Sham.¹¹⁴ Como en años anteriores, también se denunciaron torturas, uso de la violencia sexual, secuestros y desapariciones. Según cifras de la SNHR, más de 5.000 personas pasaron a estar en situación de desaparición forzada sólo en 2016, elevando la cifra total de personas desaparecidas desde 2011 a no menos de 76.000. Dos fenómenos que se intensificaron de manera significativa durante 2016 fueron los ataques contra infraestructuras de salud y los asedios. El régimen fue denunciado por usar la destrucción de hospitales y centros médicos como una estrategia en sus ofensivas en zonas controladas por la oposición y como principal responsable de los asedios –también perpetrados por otros actores armados–, que afectaron a un número creciente de población. Según cifras de la ONU a finales de 2016, el número de personas viviendo bajo asedio se había más que duplicado en un plazo de seis meses, pasando de 468.700 a un millón de personas en noviembre, con los consiguientes problemas de acceso a servicios y para la cobertura de necesidades básicas. Adicionalmente, fueron constantes las denuncias de actores humanitarios sobre los obstáculos de acceso de la ayuda y prácticas como la remoción de

medicinas de los convoyes de asistencia. El conflicto armado continuó motivando además masivos desplazamientos de población dentro y fuera del país. A finales de 2016 la cifra de personas refugiadas de origen sirio superaba los 4,8 millones, otras 6,3 se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno y 13,5 millones –más de la mitad de la población– requerían asistencia humanitaria.

En cuanto a la evolución del conflicto armado y los frentes de batalla, durante 2016 continuaron registrándose enfrentamientos en diversos puntos del país, pero la campaña más decisiva se libró en Aleppo durante el segundo semestre y culminó con la victoria de las fuerzas del régimen en diciembre.

112. Syrian Network for Human Rights, *The Yearly Report for 2016*, SNHR, 18 de enero de 2017.

113. Véase "Siria y el fracaso en la protección de civiles en contextos de conflicto armado" en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017).

114. Véanse los informes de OHCHR, *Out of Sight, Out of Mind: Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic*, 3 de febrero de 2016 y de Amnesty International, *'It breaks the human': Torture, disease and death in Syria's prisons*, AI, 18 de agosto de 2016 y *Syria: Abductions, torture and summary killings at the hands of armed groups*, AI, 5 de julio de 2016.

En los primeros meses del año se registró una ligera disminución en los niveles de violencia, en medio de nuevos intentos por promover negociaciones para poner fin al conflicto y por declarar una tregua.¹¹⁵ A finales de febrero, en una iniciativa promovida por EEUU y Rusia, se puso en marcha un cese de hostilidades entre el régimen y actores armados de oposición, excluyendo grupos armados yihadistas como ISIS o el Frente al-Nusra (grupo que hasta 2016 se reconocía como filial de al-Qaeda en Siria pero que decidió marcar distancia con esta organización y rebautizarse como Jabhat Fateh al-Sham). Sin embargo, la reducción de los niveles de violencia duró tan solo unas semanas y a partir de abril se registró un incremento significativo de los enfrentamientos en áreas como Idlib, Damasco, Deraa, Homs, Hasakah y, en especial, Aleppo. Aunque se activaron algunas iniciativas diplomáticas para intentar restablecer el cese de hostilidades, los hechos de violencia continuaron y, en junio, el presidente Bashar al-Assad anunció en tono desafiante que pretendía tomar el control de la totalidad de Siria, manifestando así su confianza en imponerse por la vía militar con el apoyo decisivo de Rusia e Irán. A partir de entonces se hizo evidente que **Alepo, bastión de las fuerzas rebeldes y con un alto peso simbólico, pasaba a convertirse en el principal objetivo de la guerra. La ciudad se convirtió en escenario de cruentos enfrentamientos, intensos bombardeos y bloqueos que derivaron en que más de 275.000 personas quedarán atrapadas en la zona este de la ciudad, controlada por la oposición.** En septiembre, un breve y fallido intento por restablecer un cese el fuego en el país fue el preludio de una intensificación de la violencia en el último trimestre. El acuerdo promovido por EEUU y Rusia –que también incluía disposiciones para el acceso de ayuda humanitaria y el establecimiento de un mecanismo de cooperación militar entre Washington y Moscú en la lucha contra ISIS y Frente al-Nusra– quedó desactivado rápidamente tras nuevos hechos de violencia. Primero, por las tensiones que generó un ataque estadounidense en la zona de Deir al-Zor que causó la muerte a 62 soldados sirios –Washington calificó el incidente como un error– y, luego, por un ataque aéreo atribuido a las fuerzas sirias y rusas contra un convoy humanitario de la ONU y la Media Luna Roja que provocó la muerte a otras 18 personas. En este contexto, la campaña del régimen contra Aleppo se intensificó (se estima que sólo en la última semana de septiembre murieron más de 400 personas). Tras una intensa campaña aérea y el avance de fuerzas terrestres –apoyadas por Rusia, Irán, Hezbollah–, el régimen decretó a mediados de diciembre que había asumido el control total de la ciudad de Aleppo. La ONU denunció asesinatos perpetrados por milicias

Alepo se convirtió en el principal escenario de la guerra de Siria y 275.000 personas quedaron atrapadas en la zona este de la ciudad, controlada por la oposición

pro-gubernamentales en su avance hacia la ciudad, desapariciones de personas que cruzaron a las zonas controladas por el régimen y retención de personas en la zona este por parte de grupos armados opositores. La ofensiva provocó el desplazamiento forzado de 116.000 personas, 80.000 de las cuales pasaron a zonas controladas por el Gobierno y otras 36.000 –entre combatientes y civiles– fueron trasladadas durante la segunda quincena de diciembre a otras zonas de la provincia de Aleppo y de la provincia de Idlib, en manos de la oposición. Todo a partir de un acuerdo promovido por Rusia y Turquía que a partir del 30 de diciembre derivó en la puesta en marcha de un nuevo cese el fuego, refrendado de manera unánime por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (2336), aunque persistían los interrogantes sobre su viabilidad y las perspectivas de nuevas negociaciones. Analistas advertían sobre las dificultades de los grupos armados opositores para revertir las ganancias militares del régimen.

Este acuerdo auspiciado por Ankara y Moscú fue posible, en parte, por el cambio de prioridades en lo que respecta a Siria por parte de Turquía, que en los últimos años ha dado apoyo a grupos de la oposición siria y que durante 2016 restableció relaciones con Rusia y optó por una aproximación pragmática orientada a bloquear la expansión y consolidación de grupos próximos al PKK, como las YPG.¹¹⁶ Durante el primer semestre Turquía lanzó varias acciones armadas contra las milicias kurdas YPG y en agosto intervino en Siria con una ofensiva aérea y terrestre oficialmente para atacar a ISIS, pero sobre todo para frenar los avances de las YPG en el norte de Siria. EEUU –respaldo clave de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) encabezadas por el YPG– acabó presionando a las fuerzas kurdas para que se replegaran al este del río Éufrates, línea roja para Turquía. **En lo relativo a ISIS, cabe destacar que durante 2016 el grupo armado logró mantener su bastión en Raqqa, reivindicó ataques suicidas en localidades como Jablah y Tartus –que provocaron la muerte a 160 personas en mayo– y protagonizó intensos enfrentamientos con las FDS en zonas como Manjib, al norte de la provincia de Aleppo.** En esta zona las hostilidades forzaron el desplazamiento de cientos de familias, en medio de una ofensiva que contó con el apoyo de la coalición internacional contra ISIS. En este contexto, activistas denunciaron que dos ataques aéreos de EEUU en julio habían provocado la muerte de un centenar de civiles. En noviembre, EEUU informó que sus fuerzas habían lanzado 5.362 ataques aéreos contra ISIS en Siria y reconoció que 64 civiles habían muerto a causa de ataques estadounidenses contra presuntos objetivos de ISIS

115.Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 3 (Procesos de paz).

116.Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

en Iraq y Siria entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016 (esta cifra excluye las víctimas de los hechos de Manjib, que se encontraban bajo investigación). Pese a las operaciones contra ISIS, cabe mencionar que el grupo consiguió retomar Palmira en diciembre, nueve meses después de haber sido expulsado de

la ciudad por fuerzas rusas y tropas del régimen. Finalmente, cabe destacar que a mediados de año la ONU también responsabilizó al régimen de Damasco y a ISIS por el uso de armas químicas en 2014 y 2015, según el resultado de la investigación de un equipo internacional de expertos.